

INE/CG787/2022

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO
EXPEDIENTE: UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020
DENUNCIANTES: OLIVIA CHINO DORANTES Y OTROS
DENUNCIADO: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020, INICIADO CON MOTIVO DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR VEINTE PERSONAS, OTRORA ASPIRANTES AL CARGO DE CAPACITADORES-ASISTENTES ELECTORALES, EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR LA SUPUESTA VULNERACIÓN AL DERECHO POLÍTICO DE LIBRE AFILIACIÓN, Y, EN SU CASO, EL USO NO AUTORIZADO DE SUS DATOS PERSONALES

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós.

G L O S A R I O	
<i>COFIPE</i>	Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Comisión de Quejas</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Consejo General</i>	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
<i>Constitución</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>DEPPP</i>	Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
<i>DERFE</i>	Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral

G L O S A R I O	
<i>LGIPE</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>LGPP</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PVEM</i>	Partido Verde Ecologista de México
<i>Reglamento de Quejas</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral
<i>Sala Superior</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>Tribunal Electoral</i>	Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>UTCE</i>	Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva

R E S U L T A N D O

1. Denuncias. En la fecha que en cada caso se precisa, se recibieron en la *UTCE*, **veinte** escritos de queja, signados por igual número de personas, mediante los cuales, cada una de ellas, hicieron del conocimiento de esta autoridad, haber sido incorporadas al padrón del *PVEM* sin haber otorgado consentimiento para ello.

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
1	Olivia Chino Dorantes	06/11/2020 ¹
2	Mario Mauricio Ramírez Arellano	10/11/2020 ²
3	Claudia Lorena Pérez Mirón	06/11/2020 ³
4	Rocío Espinosa Aquino	06/11/2020 ⁴
5	Marbella Altunar Rueda	06/11/2020 ⁵
6	David Cruz Antonio Domínguez Aguilar	06/11/2020 ⁶
7	Alejandro Santoyo Almanza	10/11/2020 ⁷
8	Martha Flores Ramírez	06/11/2020 ⁸

¹ Visible a página 08. Salvo precisión en contrario, la referencia corresponde a las constancias del expediente que se resuelve.

² Visible a página 11.

³ Visible a página 17.

⁴ Visible a página 22.

⁵ Visible a página 31.

⁶ Visible a página 36.

⁷ Visible a página 43.

⁸ Visible a páginas 50 a 51.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No.	Persona denunciante	Fecha de presentación
9	Samuel Alejandro Hernández Hernández	06/11/2020 ⁹
10	Luz Andrea Alva Rodríguez	09/11/2020 ¹⁰
11	Sergio Meza Salcedo	09/11/2020 ¹¹
12	Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín	09/11/2020 ¹²
13	María Ana Ela Basurto Sánchez	09/11/2020 ¹³
14	Manuel Guzmán Gómez	10/11/2020 ¹⁴
15	Lucía Guzmán Gómez	10/11/2020 ¹⁵
16	Alonso Guzmán López	10/11/2020 ¹⁶
17	Oscar Alejandro Torres Vázquez	10/11/2020 ¹⁷
18	Marcelino Carmona García	10/11/2020 ¹⁸
19	Herman Aguilar Andapia	10/11/2020 ¹⁹
20	María de la Luz Suárez Ávila	10/11/2020 ²⁰

2. Registro, recepción de escritos de queja, admisión, reserva de emplazamiento y diligencias de investigación. En proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veinte,²¹ emitido por el Titular de la *UTCE*, se tuvieron por recibidas las quejas, quedando registradas como un solo **procedimiento sancionador ordinario** identificado con la clave **UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020**.

Asimismo, se admitieron a trámite dichas denuncias y se reservó lo conducente respecto al emplazamiento de las partes, hasta en tanto culminara la etapa de investigación.

Finalmente, con el propósito de constatar los hechos materia de inconformidad y allegarse de mayores elementos y constancias necesarias para la debida sustanciación del procedimiento, en dicho proveído, también se ordenó requerir al *PVEM* así como a la *DEPPP*, información relacionada con la presunta afiliación de las personas quejasas a dicho partido político.

⁹ Visible a página 63.

¹⁰ Visible a página 66

¹¹ Visible a página 73.

¹² Visible a página 79.

¹³ Visible a página 88.

¹⁴ Visible a página 95.

¹⁵ Visible a página 99.

¹⁶ Visible a página 103.

¹⁷ Visible a páginas 109 y 110.

¹⁸ Visible a página 120.

¹⁹ Visible a página 125.

²⁰ Visible a página 129.

²¹ Visible a páginas 133 a 141.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

Las diligencias se llevaron a cabo en los términos que se detallan a continuación:

Sujeto	Oficio-Fecha de notificación	Respuesta
PVEM	INE-UT/04131/2020²² 25 de noviembre de 2020	Oficio PVEM-INE-231/2020²³, PVEM-INE-256/2020²⁴, PVEM-INE-270/2020²⁵, PVEM-INE-359/2020²⁶ y PVEM-INE-369/2020²⁷ (alcance, en este se aportaron constancias de afiliación) 30 de noviembre, 02, 08, 18 y 22, de diciembre de 2020.
DEPPP	INE-UT/04132/2020²⁸ 25 de noviembre de 2020	Correo electrónico institucional²⁹ 27 de noviembre de 2020

3. Inspección y vista con constancias. En acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, ³⁰se ordenó realizar inspección al portal de internet del *PVEM*, a efecto de verificar si el registro de las personas denunciantes como militantes de ese partido político había sido cancelado; el resultado de la diligencia se hizo constar en Acta Circunstanciada,³¹ en la que se asentó que Alonso Guzmán López y Lucía Guzmán Gómez continuaba apareciendo en dicho sitio web.

Asimismo, se instruyó dar vista a las personas denunciantes que se precisan en la siguiente tabla, con copia simple de los Formatos de Afiliación aportados por el *PVEM*, a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera.

No.	Sujeto–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Mario Mauricio Ramírez Arellano INE-JDE39-MEX/VS/0131/2021 ³²	02/02/2021 Del 03 al 05 de febrero de 2021	No
2	Luz Andrea Alva Rodríguez INE-MÉX-14JDE/VS/0218/2021 ³³	02/02/2021 Del 03 al 05 de febrero de 2021	Si ³⁴

²² Visible a página 143.

²³ Visible a páginas 168 a 169; anexos 170 a 175.

²⁴ Visible a página 176. Anexo en 177 a 178.

²⁵ Visible a página 183. Anexos en 184 a 207.

²⁶ Visible a página 236. Anexos en 237 a 240.

²⁷ Visible a página 241. Anexos en 242 a 243.

²⁸ Visible a página 146.

²⁹ Visible a páginas 151 a 152.

³⁰ Visible a páginas 244 a 249.

³¹ Visible a página 251 a 255.

³² Visible a página 259.

³³ Visible a página 326.

³⁴ Visible a páginas 264 a 265.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No.	Sujeto–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
3	Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín INE-MÉX-14JDE/VS/0219/2021 ³⁵	02/02/2021 Del 03 al 05 de febrero de 2021	Si ³⁶
4	Oscar Alejandro Torres Vázquez INE/JDE10-CM/0117/2021 ³⁷	08/02/2021 Del 09 al 11 de febrero de 2021	No
5	Claudia Lorena Pérez Mirón INE/OAX/JD05/VS/040/2021 ³⁸	02/02/2021 Del 03 al 05 de febrero de 2021	Si ³⁹
6	Rocío Espinosa Aquino INE/OAX/JD05/VS/041/2021 ⁴⁰	02/02/2021 Del 03 al 05 de febrero de 2021	No
7	María de la Luz Suárez Ávila INE-09JDE-MEX/VS/040/2021 ⁴¹	02/02/2021 Del 03 al 05 de febrero de 2021	No
8	Samuel Alejandro Hernández Hernández INE-JAL-JDE07-VS-0097-2021 ⁴²	02/02/2021 Del 03 al 05 de febrero de 2021	No
9	Marcelino Carmona García INE/GRO/JD09/0071/2021 ⁴³	09/02/2021 Del 10 al 12 de febrero de 2021	Si ⁴⁴
10	Herman Aguilar Andapia INE/GRO/JD09/0072/2021 ⁴⁵	09/02/2021 Del 10 al 12 de febrero de 2021	No
11	María Ana Ela Basurto Sánchez INE/CDMX/22JDE/VS/0090/2021 ⁴⁶	08/02/2021 Del 09 al 11 de febrero de 2021	No
12	Alejandro Santoyo Almanza INE/SLP/JD05/VS/033/2021 ⁴⁷	03/02/2021 Del 04 al 08 de febrero de 2021	No
13	Martha Flores Ramírez INE/JD05/VS/5669/2021 ⁴⁸	26/05/2022 Del 27 al 31 de mayo de 2022	Si ⁴⁹
14	Alonso Guzmán López INE/05JDE/VS/281/2021 ⁵⁰	27 de mayo de 2021 Del 28 de mayo al 01 de junio de 2021	No
15	Olivia Chino Dorantes	28/05/2021	Si ⁵²

³⁵ Visible a página 320.

³⁶ Visible a páginas 273 a 274.

³⁷ Visible a página 302.

³⁸ Visible a página 306.

³⁹ Visible a página 309.

⁴⁰ Visible a página 310.

⁴¹ Visible a páginas 314 a 316.

⁴² Visible a página 351.

⁴³ Visible a página 363.

⁴⁴ Visible a página 360.

⁴⁵ Visible a página 366.

⁴⁶ Visible a página 369.

⁴⁷ Visible a página 380.

⁴⁸ Visible a páginas 428 a 429.

⁴⁹ Visible a página 453.

⁵⁰ Visible a página 447.

⁵² Visible a página 465.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No.	Sujeto–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
	INE/JDE04-GRO/VS/0263/2021 ⁵¹	Del 31 de mayo al 02 de junio de 2021	
16	Manuel Guzmán Gómez INE/05JDE/VS/501/2021 ⁵³	12/08/2021 Del 13 al 17 de agosto de 2021.	Si ⁵⁴
17	Lucía Guzmán Gómez INE/05JDE/VS/503/2021 ⁵⁵	10/08/2021 Del 11 al 13 de agosto de 2021	Si ⁵⁶
18	Marbella Altunar Rueda ⁵⁷	05/01/2022 Del 06 al 10 de enero de 2022	No
19	David Cruz Antonio Domínguez ⁵⁸	04/01/2022 Del 05 al 07 de enero de 2022	No

4. Solicitud al PVEM, respecto de dar de baja a uno de los quejosos. Toda vez que, en la inspección realizada conforme lo señalado en el numeral anterior, se detectó que las personas denunciantes Alonso Guzmán López y Lucía Guzmán Gómez continuaban apareciendo en el padrón de afiliados del partido político denunciado, en acuerdo de cinco de abril de dos mil veintiuno,⁵⁹ se solicitó a dicho instituto político que procediera a darles de baja.

5. Inspección al portal de internet del PVEM. El partido político denunciado informó que las personas denunciantes Alonso Guzmán López y Lucía Guzmán Gómez habían sido dados de baja, y que los nombres que aparecían en el portal de internet del PVEM se trataba de homónimos,⁶⁰ para demostrar su dicho solicitó que se señalara fecha y hora para que una persona de la representación del denunciado acudiera a las oficinas de la UTCE a realizar la inspección, en ese sentido, mediante proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno,⁶¹ se ordenó nuevamente inspeccionar su portal en internet para lo cual se citó al PVEM,, a efecto de verificar si el registro de Alonso Guzmán López y Lucía Guzmán Gómez había sido cancelado; el resultado de la diligencia, corroborando la baja, se hizo constar en acta circunstanciada.⁶²

⁵¹ Visible a página 462.

⁵³ Visible a página 477.

⁵⁴ Visible a página 496.

⁵⁵ Visible a página 481.

⁵⁶ Visible a página 498.

⁵⁷ Visible a página 583.

⁵⁸ Visible a página 587.

⁵⁹ Visible a páginas 385 a 390.

⁶⁰ Escrito visible a páginas 398 a 400.

⁶¹ Visible a páginas 407 a 411.

⁶² Visible a página 418 a 422.

6. Reposición de notificaciones. Mediante proveído de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, ⁶³ se requirió a las 05 y 06 Juntas Distritales Ejecutivas del INE en Chiapas que remitieran las constancias de notificación de los quejosos Marbella Altunar Rueda, David Cruz Antonio Domínguez Aguilar. Manuel Guzmán Gómez, Lucía Guzmán Gómez y Alonso Guzmán Gómez respecto de diversos acuerdos dictados por la UTCE en el procedimiento en que se actúa.

Asimismo, se ordenó reponer la notificación del acuerdo de veintisiete de enero del dos mil veintiuno respecto a Manuel Guzmán Gómez y Lucía Guzmán Gómez, toda vez que las diligencias respectivas no cumplieron con las formalidades previstas en la normatividad electoral.

7. Prevención a quejosos. Toda vez que Manuel Guzmán Gómez y Lucía Guzmán Gómez, enviaron escritos por correo electrónico, mediante los cuales hicieron manifestaciones en relación con cédula de afiliación aportada por el *PVEM*, mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno, ⁶⁴ se previno a los quejosos referidos para que remitieran, de manera física sus escritos, a la *UTCE*, con el apercibimiento que de no hacerlo se resolvería con las constancias que obran en autos.

8. Emplazamiento. El veintidós de marzo de dos mil veintidós, ⁶⁵ la *UTCE* ordenó el emplazamiento al *PVEM*, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a la conducta que se le imputó y aportara las pruebas que considerara pertinentes.

Para tal efecto, se le corrió traslado con copia simple de todas y cada una de las constancias que integraban el expediente de mérito.

El acuerdo de emplazamiento se diligenció en los términos siguientes:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PVEM INE-UT/02451/2022 ⁶⁶	Citatorio: 24 de marzo de 2022 Cédula: 25 de marzo de 2022 Plazo: 28 de marzo al 01 de abril de 2022	Correo electrónico ⁶⁷ 1 de abril de 2022

⁶³ Visible a páginas 467 a 471.

⁶⁴ Visible a páginas 539 a 544.

⁶⁵ Visible a páginas 589 a 601.

⁶⁶ Visible a página 609.

⁶⁷ Visible a páginas 616 a 631.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

9. Alegatos. El dos de mayo de dos mil veintidós,⁶⁸ se ordenó poner las actuaciones a disposición de las partes a efecto que, en vía de alegatos, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

El acuerdo de vista para formular alegatos se diligenció en los términos siguientes:

Denunciado:

Sujeto – Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
PVEM INE-UT/04167/2022 ⁶⁹	Cédula: 04 de mayo de 2022 ⁷⁰ Plazo: 06 al 12 de mayo de 2022	Escrito ⁷¹ 12 de mayo de 2022

Denunciantes:

Al respecto, es de referir que las personas quejasas, no obstante ser debidamente notificadas, fueron omisas en pronunciar alegatos:

No.	Quejosa (o)–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
1	Mario Mauricio Ramírez Arellano INE-JDE39-MEX/VS/0526/2022 ⁷²	Cédula: 04 de mayo de 2022 ⁷³ Plazo: 05 al 11 de mayo de 2022	Sin respuesta
2	María de la Luz Suárez Ávila INE-09JDE-MEX/VS/0218/2022 ⁷⁴	Cédula: 06 de mayo de 2022 ⁷⁵ Plazo: 09 al 13 de mayo de 2022	Sin respuesta
3	Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín INE-MÉX-14JDE/VS/1157/2022 ⁷⁶	Cédula: 06 de mayo de 2022 ⁷⁷ Plazo: 09 al 13 de mayo de 2022	Sin respuesta
4	Luz Andrea Alva Rodríguez INE-MÉX-14JDE/VS/1156/2022 ⁷⁸	Cédula: 06 de mayo de 2022 ⁷⁹ Plazo: 09 al 13 de mayo de 2022	Sin respuesta

⁶⁸ Visible a páginas 632 a 636.

⁶⁹ Visible a página 639.

⁷⁰ Visible a página 640.

⁷¹ Visible a páginas 693 a 706.

⁷² Visible a página 647

⁷³ Visible a página 646.

⁷⁴ Visible a página 652.

⁷⁵ Visible a página 651

⁷⁶ Visible a páginas 656 a 657.

⁷⁷ Visible a página 658.

⁷⁸ Visible a páginas 662 a 663.

⁷⁹ Visible a página 664.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No.	Quejosa (o)–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
5	Sergio Meza Salcedo INE-JDE07-MEX/VS/0294/2022 ⁸⁰	Citatorio: 04 de mayo de 2022 ⁸¹ Cédula: 06 de mayo de 2022 ⁸² Plazo: 09 al 13 de mayo de 2022	Sin respuesta
6	Martha Flores Ramírez INE/JD05/VS/0641/2022 ⁸³	Cédula: 06 de mayo de 2022 ⁸⁴ Plazo: 09 al 13 de mayo de 2022	Sin respuesta
7	Claudia Lorena Pérez Mirón INE/OAX/JD05/VS/0186/2022 ⁸⁵	Cédula: 06 de mayo de 2022 ⁸⁶ Plazo: 09 al 13 de mayo de 2022	Sin respuesta
8	Rocío Espinosa Aquino INE/OAX/JD05/VS/0187/2022 ⁸⁷	Cédula: 04 de mayo de 2022 ⁸⁸ Plazo: 05 al 11 de mayo de 2022	Sin respuesta
9	Oscar Alejandro Torres Vázquez INE/JDE10-CM/0419/2022 ⁸⁹	Citatorio: 10 de mayo de 2022 ⁹⁰ Cédula: 11 de mayo de 2022 ⁹¹ Plazo: 12 al 18 de mayo de 2022	Sin respuesta
10	María Ana Ela Basurto Sánchez INE/CDMX/22JDE/VS/00512/2022 ⁹²	Cédula: 11 de mayo de 2022 ⁹³ Plazo: 12 al 18 de mayo de 2022	Sin respuesta
11	Samuel Alejandro Hernández Hernández INE-JA-JDE07-VS-0200-2022 ⁹⁴	Citatorio: 09 de mayo de 2022 ⁹⁵ Cédula: 10 de mayo de 2022 ⁹⁶ Estrados: 10 de mayo de 2022. ⁹⁷ Plazo: 11 al 17 de mayo de 2022	Sin respuesta
12	Olivia Chino Dorantes INE/JDE04-GRO/VS/0230/2022 ⁹⁸	Cédula: 06 de mayo de 2022 ⁹⁹ Plazo: 09 al 13 de mayo de 2022	Sin respuesta

⁸⁰ Visible a página 668.

⁸¹ Visible a página 669 a 670.

⁸² Visible a página 671.

⁸³ Visible a página 684

⁸⁴ Visible a páginas 681 a 682.

⁸⁵ Visible a página 688.

⁸⁶ Visible a página 687

⁸⁷ Visible a página 692.

⁸⁸ Visible a página 691.

⁸⁹ Visible a página 711.

⁹⁰ Visible a página 708.

⁹¹ Visible a página 709.

⁹² Visible a página 715.

⁹³ Visible a páginas 712 a 713.

⁹⁴ Visible a página 719.

⁹⁵ Visible a páginas 717 a 718.

⁹⁶ Visible a página 720.

⁹⁷ Visible a páginas 721 a 724.

⁹⁸ Visible a página 730.

⁹⁹ Visible a página 731.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No.	Quejosa (o)–Oficio	Notificación-Plazo	Respuesta
13	Marcelino Carmona García INE/GRO/JD09/0312/2022 ¹⁰⁰	Cédula: 09 de mayo de 2022 ¹⁰¹ Plazo: 10 al 16 de mayo de 2022	Sin respuesta
14	Herman Aguilar Andapia INE/GRO/JD09/0313/2022 ¹⁰²	Cédula: 09 de mayo de 2022 ¹⁰³ Plazo: 10 al 16 de mayo de 2022	Sin respuesta
15	Alejandro Santoyo Almanza INE/SLP/JD05/VS/092/2022 ¹⁰⁴	Cédula: 19 de mayo de 2022 ¹⁰⁵ Plazo: 20 al 26 de mayo de 2022	Sin respuesta
16	Marbella Altunar Rueda	Cédula: 27 de mayo de 2022 ¹⁰⁶ Plazo: 30 de mayo al 03 de junio de 2022	Sin respuesta
17	David Cruz Antonio Domínguez	Cédula: 26 de mayo de 2022 ¹⁰⁷ Plazo: 27 de mayo al 02 de junio de 2022	Sin respuesta
18	Alonso Guzmán Gómez INE/05JDE/VS/485/2022 ¹⁰⁸	Citatorio: 10 de agosto de 2022 ¹⁰⁹ Cédula: 11 de agosto de 2022 ¹¹⁰ Plazo: 12 al 18 de agosto de 2022	Sin respuesta
19	Manuel Guzmán Gómez	Estrados: 30 de agosto de 2022 ¹¹¹ Plazo: 31 de agosto al 06 de septiembre de 2022	Sin respuesta
20	Lucía Guzmán Gómez	Estrados: 30 de agosto de 2022 ¹¹² Plazo: 31 de agosto al 06 de septiembre de 2022	Sin respuesta

10. Verificación final de no reafiliación. Mediante inspección realizada el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, por personal de esta Unidad Técnica al *Sistema de Verificación del Padrón de Personas Afiliadas a los Partidos Políticos*, se corroboró que las personas denunciantes habían sido dadas de baja del padrón de militantes del *PVEM*, sin advertir alguna nueva afiliación.

¹⁰⁰ Visible a página 733.

¹⁰¹ Visible a página 734.

¹⁰² Visible a página 736.

¹⁰³ Visible a página 737.

¹⁰⁴ Visible a página 741.

¹⁰⁵ Visible a página 742 a 743.

¹⁰⁶ Visible a página 747.

¹⁰⁷ Visible a página 750.

¹⁰⁸ Visible a página 770.

¹⁰⁹ Visible a páginas 771 a 772.

¹¹⁰ Visible a página 773

¹¹¹ Visible a página 786

¹¹² Visible a página 785

11. Elaboración de proyecto. En su oportunidad, al no existir diligencias pendientes por practicar, se ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, para que fuera sometido a la consideración de las integrantes de la *Comisión de Quejas*.

12. Sesión de la *Comisión de Quejas*. En la Tercera Sesión Extraordinaria de carácter privado, celebrada veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, la *Comisión de Quejas*, analizó y aprobó el presente proyecto, por mayoría de votos de sus integrantes en lo general, y en particular, por cuanto hace al resolutivo SEGUNDO, respecto de cinco personas denunciantes¹¹³, por mayoría de votos de dos de sus integrantes, con el voto en contra de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, para su correspondiente discusión en el *Consejo General*.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA

El *Consejo General* es competente para resolver los procedimientos sancionadores ordinarios cuyos proyectos le sean turnados por la *Comisión de Quejas*, conforme a lo dispuesto en los artículos 44, párrafo 1, incisos aa) y jj), y 469, párrafo 5, de la *LGIPE*, respecto de las conductas que se definen como infractoras a dicha Ley electoral, atribuidas a los sujetos obligados a la misma.

En el caso, la conducta objeto del presente procedimiento sancionador es la presunta transgresión a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), r), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) de la *LGPP*, con motivo de la probable violación al derecho de libertad de afiliación y la presunta utilización indebida de datos personales, por parte del *PVEM*, en perjuicio de las personas que han sido señalados a lo largo de la presente determinación.

¹¹³ Martha Flores Ramírez, Luz Andrea Alva Rodríguez, Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín, Claudia Lorena López Mirón y Olivia Chino Dorantes.

Ahora bien, conforme al artículo 23, del *COFIPE*, los partidos políticos ajustarán su conducta a las disposiciones establecidas en el citado Código, correspondiendo al Instituto Federal Electoral —hoy *INE*— vigilar que las actividades de éstos se desarrollen con apego a la ley.

Del mismo modo, de conformidad con los artículos 341, párrafo 1, inciso a); 342, párrafo 1, incisos a) y n), y 354, párrafo 1, inciso a), del ordenamiento en consulta, los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho Código, entre otras, el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 38 del dispositivo legal en cita, las cuales son sancionables por el *Consejo General*.

Dichos artículos se reproducen en los diversos 442, párrafo 1, inciso a); 443 párrafo 1, incisos a) y n); y 456, párrafo 1, incisos a), de la *LGIPE* y 25, párrafo 1, incisos a) y e) de la *LGPP*, respectivamente.

En consecuencia, siendo atribución del *Consejo General* conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, resulta competente para conocer y resolver respecto de las presuntas infracciones denunciadas en el procedimiento sancionador ordinario, atribuidas al *PVEM*, derivado, esencialmente, de la violación al derecho de libertad afiliación y utilización indebida de datos personales por parte de ese instituto político.

Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la *Sala Superior* en la sentencia dictada dentro del expediente SUP-RAP-107/2017,¹¹⁴ en el sentido de que esta autoridad electoral nacional es competente para resolver los procedimientos ordinarios sancionadores relacionados con la presunta afiliación indebida de ciudadanos a los partidos políticos, esencialmente, por las razones siguientes:

- Porque la tutela de la ley le corresponde de manera directa a las autoridades, no a los partidos.
- Porque, por mandato legal, el *INE* es una autoridad que tiene potestad para imponer sanciones en materia electoral federal por violación a la ley.

¹¹⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

- Porque la existencia de un régimen sancionatorio intrapartidista, no excluye la responsabilidad de los partidos políticos por violación a la ley, ni la competencia del *INE* para atender tal cuestión.
- Porque la *Sala Superior* ya ha reconocido que el *INE* es el órgano competente para atender denuncias por afiliación indebida de ciudadanas y ciudadanos.

Lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 443, párrafo 1, inciso n), 459, 464, 467, 468 y 469, de la *LGIPE* —los cuales contienen reglas que ya se encontraban previstas en el *COFIPE*, en los artículos 342, párrafo 1, incisos a); 356, 361, 364, 365 y 366—, relacionados con lo dispuesto en los numerales 35, fracción III y 41, párrafo segundo, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*, es decir con base en el derecho humano a la libre asociación, en su vertiente de afiliación política.

SEGUNDO. NORMATIVA ELECTORAL APLICABLE AL CASO

En el presente asunto se debe subrayar que, respecto de las personas denunciantes de quienes habrá de emitirse pronunciamiento de fondo, se tiene que, en **un caso**, la presunta falta (violación al derecho de libre afiliación) se cometió durante la vigencia del *COFIPE*, puesto que el registro o afiliación de la persona que enseguida se precisa, al *PVEM*, se realizó antes de mayo de dos mil catorce, fecha en la cual se encontraba vigente dicho *Código*.

No.	NOMBRE	FECHA DE AFILIACIÓN DEPPP
1	Marcelino Carmona García	10/10/2010

Por tanto, en el caso antes precisado, debe establecerse que, si al momento de la comisión de la presunta falta se encontraba vigente el *COFIPE*,¹¹⁵ es claro que este ordenamiento legal debe aplicarse para las cuestiones sustantivas del presente procedimiento en los casos que así corresponda, al margen que las faltas pudieran haber sido advertidas por los quejosos y cuestionadas mediante las quejas que dieron origen al presente asunto, una vez que dicha norma fue abrogada por la *LGIPE*.

Por otro lado, para los supuestos que a continuación se citan, la legislación comicial aplicable para la resolución del presente asunto será la *LGIPE*; lo anterior, toda vez que las afiliaciones de estas personas ocurrieron una vez que entró en vigor dicho ordenamiento legal.

¹¹⁵ El *COFIPE* estuvo vigente hasta el veintitrés de mayo de dos mil catorce.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No.	NOMBRE	FECHA DE AFILIACIÓN DEPPP
1	Olivia Chino Dorantes	25/10/2016
2	Mario Mauricio Ramírez Arellano	17/03/2018
3	Claudia Lorena Pérez Mirón	12/11/2019
4	Rocío Espinosa Aquino	12/11/2019
5	Marbella Altúnar Rueda	02/09/2019
6	David Cruz Antonio Domínguez Aguilar	20/09/2019
7	Alejandro Santoyo Almanza	25/09/2019
8	Martha Flores Ramírez	16/12/2019
9	Samuel Alejandro Hernández Hernández	08/02/2020
10	Luz Andrea Alva Rodríguez	11/11/2019
11	Sergio Meza Salcedo	04/11/2016
12	Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín	17/03/2019
13	María Ana Ela Basurto Sánchez	23/12/2019
14	Manuel Guzmán Gómez	18/06/2019
15	Lucía Guzmán Gómez	05/04/2019
16	Alonso Guzmán López	05/04/2019
17	Oscar Alejandro Torres Vázquez	08/10/2016
18	Herman Aguilar Andapia	08/10/2016
19	María de la Luz Suárez Ávila	25/12/2018

Finalmente, será la *LGPE* y el *Reglamento de Quejas*, la normativa aplicable para cuestiones procesales y/o adjetivas.

TERCERO. EFECTOS DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL INE/CG33/2019

Para efectos de la resolución del asunto que nos ocupa y, con el propósito de conocer las razones que subyacen a la problemática de las indebidas afiliaciones cometidas por los partidos políticos en perjuicio del derecho político electoral de libre afiliación, es necesario mencionar que el veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este *Consejo General* aprobó el acuerdo INE/CG33/2019, por el que, se implementó un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de los partidos políticos nacionales.

Las razones que motivaron la suscripción del mencionado acuerdo, fueron las siguientes:

- 1)** La imposición de sanciones económicas que se aplicaban a los partidos políticos por la transgresión al derecho de libre afiliación política fue insuficiente para inhibir esta conducta.
- 2)** Los partidos políticos reconocieron la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.
- 3)** La revisión que el *INE* realizó a los padrones de las y los militantes de los partidos políticos nacionales en dos mil catorce y dos mil diecisiete, se circunscribió a verificar su número mínimo de afiliadas y afiliados para la conservación de su registro y a vigilar que no existiese doble afiliación, a partidos políticos con registro o en formación.
- 4)** Dicha verificación no tuvo como propósito revisar que los partidos políticos efectivamente contasen con el documento comprobatorio de la afiliación de las y los ciudadanos en términos de lo previsto en su normativa interna.

Así, esta autoridad electoral nacional, con la finalidad de dar una solución integral al problema generalizado respecto de la correcta afiliación y desafiliación, y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, así como fortalecer el sistema de partidos, estimó necesario implementar, de manera excepcional, un procedimiento para garantizar que, en un breve período, sólo se encuentren inscritas las personas que, de manera libre y voluntaria hayan solicitado su afiliación, y respecto de las cuales se cuente con alguno de los documentos que avalen su decisión.

El proceso de actualización se concibió obligatorio y permanente, lo cual es indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país.

Para alcanzar el objetivo propuesto en dicho acuerdo, se estableció una suspensión temporal en la resolución de los procedimientos sancionadores ordinarios, con las excepciones siguientes:

- Aquellos supuestos en los que se actualizara la caducidad de la potestad sancionadora de la autoridad administrativa electoral; o bien,
- Porque se encontraran en la hipótesis de cumplimiento a una ejecutoria dictada por alguna de las Salas que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, previó una serie de actividades y obligaciones para los partidos políticos, que debían ser ejecutadas en el plazo comprendido entre el uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, cuya inobservancia tendría como efecto anular la suspensión de la resolución de los procedimientos e imponer las sanciones atinentes.

En este sentido, debe destacarse que durante la vigencia del referido acuerdo, se procedió a eliminar de los padrones de militantes el registro de todas y cada una de las personas denunciadas en los procedimientos, tanto en el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos de la *DEPPP*, como de sus portales de *internet* y/o cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse, logrando eliminar el registro de más de nueve millones de personas.

Cabe señalar, que los padrones de afiliados/as son bases de datos variables debido a los movimientos de altas y bajas que llevan a cabo todos los días los partidos políticos nacionales; además de ello, el proceso de verificación permanente de que son objeto los padrones, implica que los nuevos registros se compulsen contra el padrón electoral y entre los padrones de los partidos políticos con registro vigente y en proceso de constitución, para determinar si serán registros válidos, sujetos de aclaración o definitivamente descartados.

En ese sentido, de conformidad con los elementos con que cuenta este Consejo General al momento de resolver el presente asunto, es válido concluir que la revisión y seguimiento en el desahogo de las etapas supervisadas de manera particular y puntual por esta autoridad, así como la actitud activa de los partidos políticos en el desarrollo de sus actividades y obligaciones, permitió alcanzar el propósito perseguido con el acuerdo INE/CG33/2019, esto es, atender la problemática de raíz hasta entonces advertida y depurar los padrones de afiliados de los partidos políticos, garantizando con ello el ejercicio del derecho de libertad de afiliación en beneficio de la ciudadanía.

En suma, el acuerdo INE/CG33/2019, emitido por este Consejo General, tuvo como propósito ser un parteaguas que sentase las bases que permitieran transitar hacia

padrones de militantes sólidos y confiables, para superar el alto número de afiliaciones indebidas encontradas antes de su aprobación, visto que, hasta ese momento, la pura imposición de multas no había sido una solución de fondo a la tutela del derecho fundamental de libertad de afiliación, propiciaba el fortalecimiento del régimen de partidos políticos.

En este sentido, el referido acuerdo delineó un régimen transitorio que permitiera a los institutos políticos consolidar sus padrones, a través del agotamiento de los procedimientos siguientes:

1. En cuanto a las afiliaciones recabadas **antes** de la aprobación del acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos debían poner en estado de *reserva* la totalidad de su militancia, con el fin de verificar si contaban en sus archivos con la documentación probatoria del consentimiento de los ciudadanos que figuraban como sus militantes.
2. Atinente a las afiliaciones, refrendos o ratificaciones recabados **después** de la entrada en vigor del acuerdo, los partidos políticos tienen la obligación de conservar el documento, ya sea físico o electrónico, que acredite la voluntad de la persona afiliada de ser integrada como militante del partido político respectivo, de manera que, en un escenario ideal, cada una de las afiliaciones o refrendos recabados a partir del veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, estuviera debidamente soportada.
3. Por otro lado, en cuanto a la **depuración** de sus padrones, a partir de la aprobación del acuerdo, los partidos políticos debían examinar sus archivos para determinar respecto de cada uno de sus militantes, si contaban con la documentación que acreditara la legítima afiliación y, en caso de no contar con ella, buscar la ratificación de la militancia de las y los ciudadanos respectivos, a más tardar, el treinta y uno de enero de dos mil veinte y, de no lograrlo, dar de baja a la persona en cuestión; en caso de contar con la documentación respectiva, o bien obtener la ratificación de militancia, debían solicitar a la DEPPP la reversión del estatus de *reserva* a *válido*.
4. Asimismo, se ordenó **suspender la resolución** de los procedimientos ordinarios sancionadores cuya materia consistiera en la presunta indebida afiliación a los partidos políticos, hasta en tanto concluyeran las etapas previstas por el acuerdo, a fin de que este Consejo General pudiera contar con datos que revelaran la conducta observada por los institutos políticos durante y después de la vigencia del acuerdo multicitado, así como la

realización de las actividades previstas en el mismo, y tomarlas en consideración al momento de resolver en definitiva el procedimiento respectivo y, en su caso, imponer una sanción proporcional no sólo a la comisión intrínseca de la falta, como hasta entonces, sino además, ponderara las medidas y acciones tomadas por los partidos políticos para resolver el problema subyacente.

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

1. MATERIA DEL PROCEDIMIENTO

En el presente asunto se debe determinar si el **PVEM conculcó el derecho de la libre afiliación**, en su **vertiente positiva —indebida afiliación—** de las **veinte personas** que alegan no haber dado su consentimiento para pertenecer a sus filas, en contravención a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41 Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a), e), t) y u); 44, párrafo 2, y 342, párrafo 1, incisos a) y n), del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso dispositivo 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e), q), t) y u) [dispositivos que, después de la reforma del trece de abril de dos mil veinte, ahora aparecen como incisos a), e), q), x) e y)], del artículo 25, párrafo 1, de la *LGPP*.

2. MARCO NORMATIVO

A) Constitución, tratados internacionales y ley

A efecto de determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario tener presente la legislación que regula los procedimientos de afiliación de las y los ciudadanos a los partidos políticos, específicamente por lo que respecta al denunciado, así como las normas relativas al uso y la protección de los datos personales de los particulares.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 6

...

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

Artículo 16.

...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...

Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

...

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

...

Artículo 41.

...

I.

...

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

El derecho de asociación en materia político-electoral, que la *Sala Superior* ha considerado se trata de un **derecho fundamental**, consagrado en el artículo 35, fracción III, de la *Constitución*, propicia el pluralismo político y la participación de la ciudadanía en la formación del gobierno.

En efecto, la libertad de asociación, que subyace en ese derecho, constituye una condición fundamental de todo Estado constitucional democrático de derecho, pues sin la existencia de este derecho fundamental o la falta de garantías constitucionales que lo tutelen, no solo se impediría la formación de partidos y agrupaciones políticas de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio constitucional de sufragio universal, establecido en forma expresa en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, de la *Constitución*, quedaría socavado; por tanto, el derecho de asociación en materia político-electoral es la base de la formación de los partidos políticos y asociaciones políticas.

De esta forma, todo ciudadano mexicano tiene derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; específicamente, es potestad de las y los ciudadanos mexicanos constituir partidos políticos o afiliarse libre e individualmente a ellos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 9; 35, fracción III; 41, fracciones I, párrafo segundo, in fine, y IV; y 99, fracción V, de la *Constitución*.

El ejercicio de la libertad de asociación en materia política prevista en el artículo 9 constitucional está sujeta a varias limitaciones y una condicionante: las primeras están dadas por el hecho de que su ejercicio sea pacífico y con un objeto lícito, mientras que la última circunscribe su realización a las personas que tengan la calidad de ciudadanos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 33 de la *Constitución*. Asimismo, si el ejercicio de esa libertad política se realiza a través de los partidos políticos, debe cumplirse con las formas específicas que se regulen legalmente para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

En este tenor, el derecho de afiliación político-electoral establecido en el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, in fine, de la *Constitución*, es un derecho fundamental con un contenido normativo más específico que el derecho de asociación en materia política, ya que se refiere expresamente a la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para asociarse libre e individualmente a los partidos políticos y a las agrupaciones políticas; y si bien el derecho de afiliación libre e individual a los partidos podría considerarse como un simple desarrollo del derecho de asociación en materia política, lo cierto es que el derecho de afiliación —en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el establecido en el citado artículo 41 constitucional— se ha configurado como un derecho básico con caracteres propios.

Cabe señalar, además, que el derecho de afiliación comprende no sólo la potestad de formar parte de los partidos políticos y de las asociaciones políticas, sino también las de conservar o ratificar su afiliación o, incluso, desafilarse. Del mismo modo, la libertad de afiliación no es un derecho absoluto, ya que su ejercicio está sujeto a una condicionante consistente en que sólo las y los ciudadanos mexicanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Igualmente, si el ejercicio de la libertad de afiliación se realiza a través de los institutos políticos, debe cumplirse con las formas específicas reguladas por el legislador para permitir su intervención en el Proceso Electoral.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **24/2002** emitida por el *Tribunal Electoral*, de rubro **DERECHO DE AFILIACIÓN EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL. CONTENIDO Y ALCANCES**.¹¹⁶

Conviene tener presente que la afiliación libre e individual a los partidos políticos fue elevada a rango constitucional mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, cuando se estableció que los partidos políticos, en tanto organizaciones de ciudadanos, tienen como fin hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e idearios que postulan; y que únicamente las y los ciudadanos pueden afiliarse a los institutos políticos, libre e individualmente.

Esta reforma, conforme al contenido de la exposición de motivos correspondiente,¹¹⁷ tuvo como propósito proteger el derecho constitucional de las y los mexicanos a la libre afiliación a partidos y asociaciones políticas, garantizando que se ejerza en un ámbito de libertad plena y mediante la decisión voluntaria de cada uno de ellos, complementando el artículo 35, fracción III constitucional, que ya preveía, desde mil novecientos noventa —reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de abril del citado año—, como un derecho público subjetivo de las y los ciudadanos, asociarse para tomar parte en los asuntos políticos del país; disposición que ha permanecido incólume desde entonces en el texto de la Ley Fundamental.

El derecho de libre asociación —para conformar una asociación— y afiliación —para integrarse a una asociación ya conformada—, como derechos políticos electorales, se encuentran consagrados a nivel internacional en diversos instrumentos suscritos por nuestro país, tal es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, reconoció en su artículo 20, que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas; y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

En el mismo sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el dieciséis de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el Pacto Internacional de Derechos

¹¹⁶ Consultable en la página: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=24/2002&tpoBusqueda=S&sWord=24/2002>

¹¹⁷ Consultable en la página: https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/136%20-%2022%20AGO%201996.pdf

Civiles y Políticos, mismo que estableció en su artículo 22, que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.

En congruencia con lo anterior, la Organización de Estados Americanos suscribió en San José de Costa Rica —de ahí que se conozca también con el nombre de Pacto de San José—, en noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, misma que establece en su artículo 16, en lo que al tema interesa, que todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole.

Esto es, la tradición jurídica internacional reconoce el derecho fundamental de asociarse libremente y a no ser obligado a formar parte de una colectividad, hace más de siete décadas; y el de formar grupos organizados y permanentes —asociarse— para tomar parte en los asuntos políticos de su nación, hace más de cinco.

No obstante que el derecho de afiliación libre e individual a los partidos políticos se incorporó al texto fundamental en la década de los noventa del siglo pasado, la legislación secundaria, como sucede con la regulación internacional, tiene una larga tradición en la protección de la voluntad libre de las personas para ser parte de un partido político.

En efecto, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, publicada el cinco de enero de mil novecientos setenta y tres, hace ya cuarenta y cinco años, estableció en su artículo 23, fracción II, numeral 1, incisos a) y b), un mecanismo de certeza encaminado a dar cuenta de que las personas afiliadas a una agrupación política, como precursor de un partido político, habían consentido ser incorporadas al respectivo padrón de militantes, como se advierte enseguida:

Artículo 23. *Para que una agrupación pueda constituirse y solicitar posteriormente su registro como Partido Político Nacional, en términos del artículo 24 de esta ley, es necesario que satisfaga los siguientes requisitos:*

I...

II. Haber celebrado cuando menos en cada una de las dos terceras partes de las entidades de la República, una asamblea en presencia de un juez, notario público o funcionario que haga sus veces quien certificará:

1. Que fueron exhibidas listas nominales de afiliados de la entidad respectiva, clasificadas por municipios o delegaciones, las que deberán contener:

a. En cada hoja un encabezado impreso cuyo texto exprese que las personas listadas han quedado plenamente enteradas de la declaración de principios, programa de acción y Estatutos, y que suscriben el documento como manifestación formal de afiliación, y

b. El nombre y apellidos, domicilio, ocupación, número de credencial permanente de elector y firma de cada afiliado o huella digital en caso de no saber escribir.

En términos semejantes, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales promulgada el veintiocho de diciembre de mil novecientos setenta y siete, estableció en su artículo 27, fracción III, inciso a), que, entre otros requisitos a cubrir para que una organización pudiese constituirse como partido político, debía celebrar un determinado número de asambleas distritales o estatales, en las que un Juez Municipal, de Primera Instancia o de Distrito; notario público o funcionario acreditado por la entonces Comisión Federal Electoral, certificara que los afiliados que asistieron, aprobaron los documentos básicos respectivos **y suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.**

Esta línea fue continuada por el Código Federal Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de febrero de mil novecientos ochenta y siete, mismo que también contemplaba en su artículo 34, fracción II, que era un requisito para constituirse como Partido Político Nacional, haber celebrado el número de asambleas en cada una de las entidades federativas o Distritos Electorales previsto en dicha norma, en las cuales un notario o servidor público autorizado, certificara que los afiliados, además de haber aprobado la declaración de principios, programa de acción y los Estatutos, suscribieron el documento de manifestación formal de afiliación.

En esta línea de tiempo, es pertinente destacar el *COFIPE* de mil novecientos noventa.

Dicha norma, para el caso que nos ocupa, guarda una importancia singular, puesto que, en ella, por primera vez se previó, de manera expresa, lo siguiente:

- Es derecho de las y los ciudadanos mexicanos constituir Partidos Políticos Nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente, en su artículo 5, párrafo 1;
- Los Estatutos de los institutos políticos establecerán, entre otras cuestiones, los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, en su artículo 27, párrafo 1, inciso b);

- Era obligación de los Partidos Políticos Nacionales, cumplir sus normas de afiliación, ello en el artículo 38, párrafo 1, inciso e); y
- Los partidos y agrupaciones políticas, podían ser sancionados con amonestación pública, multa de 50 a 5 mil días de salario mínimo, reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que les correspondiera, la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento, la suspensión de su registro como partido o agrupación política, e incluso con la cancelación de su registro, entre otros supuestos, cuando incumplieran con las obligaciones señaladas en el artículo 38 antes mencionado.

Por otro lado, conviene dejar establecido que este mismo *Código*, en su artículo 38, párrafo 1, inciso c), establecía, como lo hace ahora la *LGPE*, que es obligación de los Partidos Políticos Nacionales mantener el mínimo de afiliados en las entidades federativas o Distritos Electorales, requeridos para su constitución y registro.

B) Lineamientos para la verificación de afiliados

En congruencia con lo anterior, para llevar a cabo la verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos, la autoridad electoral nacional, el trece de septiembre de dos mil doce, emitió el Acuerdo del *Consejo General* del entonces *IFE* por el que, en acatamiento a la sentencia emitida por la *H. Sala Superior* en el expediente **SUP-RAP-570/2011**, se aprueban los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro (**CG617/2012**).

De ahí que la *DERFE* y la *DEPPP*, en el año de dos mil catorce, iniciaron un procedimiento de verificación de los padrones de afiliados de los Partidos Políticos Nacionales, con la finalidad de comprobar si los mismos contaban con el mínimo de adeptos en las entidades federativas o Distritos Electorales requeridos para su constitución y registro.

Así, de las disposiciones contenidas en los Lineamientos mencionados, se obtienen las siguientes conclusiones respecto al procedimiento para la verificación del padrón de los partidos políticos nacionales:

- La *DEPPP* (en coordinación con la Unidad de Servicios de Informática y la *DERFE*), desarrollará un sistema de cómputo, en el cual los Partidos Políticos

Nacionales deben realizar la captura de los datos mínimos y actuales de todos sus afiliados.

- La *DEPPP*, informará mediante oficio a la *DERFE* que el padrón de afiliados del partido político que corresponda, se encuentra en condiciones de ser verificado.
- La *DERFE*, procederá a realizar la verificación conforme a sus Lineamientos, obteniendo un Total preliminar de afiliados, el cual deberá entregar a la *DEPPP*.
- Recibidos los resultados de la verificación por parte de la *DEPPP*, deberá remitir a los partidos políticos, las listas en las que se señalen los datos de los afiliados que se encuentren duplicados en dos o más partidos, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.
- Recibida la respuesta de los partidos políticos, la *DEPPP* (en coordinación con la *DERFE*), analizará cuáles registros pueden sumarse al Total preliminar de afiliados, para obtener el número Total de afiliados del partido; asimismo, deberán señalar que en aquellos casos en los que se encuentren afiliados a su vez a algún otro partido político con registro, para que puedan ser sumados al Total de afiliados del partido, éste deberá presentar escrito con firma autógrafa de lo o el ciudadano, en el que manifieste su deseo de continuar afiliado al partido político que corresponda y renuncia a cualquier otro.
- En caso de que más de un partido político presentara el documento a que se refiere el párrafo que antecede, la *DEPPP*, con el apoyo de las Juntas Locales y Distritales del Instituto, solicitará por oficio a la o al ciudadano en cuestión, que decida cuál es el partido al que desea continuar afiliado, apercibido que, en caso de no hacerlo, se eliminará del padrón de afiliados de los partidos en los que se encontró registrado.

En torno a ello, es preciso no perder de vista que el propósito central de los Lineamientos analizados consistió en regular el procedimiento para determinar si los partidos políticos con registro nacional cuentan o no con el mínimo de afiliados exigido por la ley para la conservación de su registro, pero en modo alguno constituyen la fuente de la obligación de los partidos políticos para cumplir la normatividad general y la interna de cada uno de ellos, ni mucho menos para respetar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos, pues, como se señaló, tal derecho emana de la Constitución, de los instrumentos internacionales y de la ley.

Esto es, los Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro, únicamente constituye el instrumento normativo al que se deberán apegar tanto los partidos políticos como las diversas instancias del *INE* involucradas en la verificación del requisito legal para la conservación del registro de los Partidos Políticos Nacionales, que describe las etapas a que se sujetará el procedimiento de verificación y las áreas de responsabilidad de cada uno de los sujetos que intervienen, pero en modo alguno significa que la obligación de los partidos políticos de respetar el derecho de libre afiliación a sus filas encuentre sustento en dicho instrumento, ni mucho menos que dicha obligación haya nacido a la par de los Lineamientos mencionados.

Al respecto, si bien tal ordenamiento contiene distintas previsiones en lo referente a la afiliación de las y los ciudadanos, la responsabilidad de respetar de manera irrestricta la libertad de estos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, proviene directamente de la *Constitución*, instrumentos internacionales y del *COFIPE*, cuyas disposiciones son previas a la emisión de dichos Lineamientos y de un rango superior, por lo que resultaría impreciso afirmar que previo a la emisión de la norma reglamentaria, los partidos políticos no tenían la carga de obtener y conservar la documentación idónea para poner en evidencia que la afiliación de un determinado ciudadano estuvo precedida de su libre voluntad, como se desarrollará más adelante.

Así, la operación del procedimiento de verificación puede poner al descubierto la afiliación a uno o varios partidos políticos de un ciudadano determinado, quien, de estimarlo pertinente, podrá cuestionar la o las afiliaciones que considere fueron ilegítimas, correspondiendo al partido en cuestión demostrar que, previo a la incorporación del individuo a sus filas, acató las disposiciones de la Constitución y la Ley, mediante los documentos donde conste la libre voluntad de la persona de ser afiliada al partido político que lo reportó como militante para demostrar que cuenta con los necesarios para conservar su registro.

De lo anterior, es posible advertir que la línea evolutiva que ha seguido el derecho de libre afiliación para tomar parte en los asuntos políticos del país, ha seguido una tendencia encaminada a garantizar, cada vez de mejor manera, que las y los ciudadanos gocen de libertad absoluta para decidir su ideario político y, en congruencia con él, determinar si desean o no afiliarse a un partido político y a cuál, así como abandonarlo o permanecer al margen de todos, pues la regulación respectiva ha transitado desde la publicación de listas de afiliados, a fin de asegurar que los ciudadanos conozcan su situación respecto de un instituto político en particular, hasta la obligación de éstos de comprobar fehacientemente, a través de

documentos idóneos y específicos, que la incorporación de una persona al padrón de militantes de un instituto político fue solicitada por la persona, como expresión de su deseo libre de participar activamente, por ese canal, en la vida pública de la nación.

C) Normativa interna del PVEM

Como se ha mencionado, la obligación de los partidos políticos de garantizar el derecho de libre afiliación de sus agremiados, deviene de las propias disposiciones constitucionales, legales y convencionales a que se ha hecho referencia párrafos arriba; por tanto, su cumplimiento, en modo alguno, se encuentra sujeto a las disposiciones internas que cada instituto tiene en su haber normativo.

No obstante, a efecto de tener claridad acerca del proceso que una persona debe llevar a cabo para convertirse en militante del partido político ahora denunciado, se hace necesario analizar la norma interna del PVEM, para lo cual, enseguida se transcribe la parte conducente de sus Estatutos, en los términos siguientes:¹¹⁸

Estatutos del PVEM

De los Procedimientos para Afiliación de sus Militantes, Adherentes y de sus Simpatizantes

Artículo 2.- *El Partido Verde Ecologista de México, está abierto para todos los mexicanos, incluidos los jóvenes que se interesen, respeten y acepten la Declaración de Principios, el Programa de Acción, y los Estatutos del Partido, que colaboren en la defensa y protección del medio ambiente y coincidan con el principio básico de la democracia en el respeto de la decisión de la mayoría.*

Los mexicanos que así lo decidan podrán afiliarse libre e individualmente al instituto político de conformidad con las siguientes modalidades:

I.- *Militante, ciudadanos que se valoran como el principal activo del Partido Verde Ecologista de México; con el compromiso y la participación en la toma de decisiones, que contribuyen a definir el proyecto verde ecologista mexicano;*

II.- *Adherente, los mexicanos que contribuyen con el Partido Verde Ecologista de México para la realización de sus fines y objetivos mediante aportaciones intelectuales y de propaganda; y*

III.- *Simpatizante, los mexicanos que mantienen una voluntad activa de colaboración y se inscriben voluntariamente en un registro del correspondiente ámbito territorial; para recibir información de actividades, reuniones y participación en programas.*

¹¹⁸ Consultable en la dirección electrónica: <http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-pvem.pdf>

La afiliación al Partido Verde Ecologista de México, es individual, personal, intransferible, libre y pacífica. En tal virtud y por tratarse de un Partido Político Nacional, en el cual sus afiliados, militantes, simpatizantes y adherentes participan en forma personal y voluntaria, en el ejercicio de las actividades políticas que se encuentran consideradas en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como prerrogativas de los ciudadanos, la simple afiliación a este Instituto Político de ninguna manera podrá generar derechos laborales.

Artículo 3.- *Para ser militante del Partido Verde Ecologista de México, es necesario ser ciudadano mexicano con el compromiso de lograr una sociedad más justa, solidaria e igualitaria, a través de la participación de las ideas y del trabajo, que definan y configuren el proyecto político verde ecologista mexicano de transformación y búsqueda de una sociedad mejor y de una sana relación del hombre con su entorno natural.*

Los militantes del Partido Verde Ecologista de México son aquellos ciudadanos que están en pleno ejercicio de sus derechos políticos y estatutarios y acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

I.- *Estar registrado en el padrón de adherentes por un plazo no menor a dos años plenamente acreditados conforme al capítulo de afiliación de los presentes Estatutos. En los casos de haber sido dirigente, candidato o haber ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, el plazo a cumplir no podrá ser inferior a por lo menos tres años a partir de su registro como adherente, salvo haber sido candidato de coalición o candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México en cuyo caso el Consejo Político Nacional determinará si queda sin efecto lo previsto en la presente fracción y procede su registro como militante;*

II.- *Adquirir el compromiso de participar en forma permanente y disciplinada en la realización de los objetivos del Partido;*

III.- *Una vez cumplidos los requisitos anteriores y apoyado por un militante, solicitar por escrito su cambio de carácter al Comité Ejecutivo Estatal correspondiente, quien turnará dicha solicitud al Consejo Político Nacional para su aprobación, quien en su caso registrará su inclusión en el padrón nacional de militantes.*

...

CAPÍTULO XVIII **Del Registro de Afiliación**

Artículo 91.- *De la afiliación de los Militantes;*

Se consideran militantes del Partido los ciudadanos que cumpliendo con lo establecido por el artículo 3 de los presentes Estatutos, hayan obtenido ese carácter de acuerdo a las disposiciones de este capítulo.

Artículo 92.- *Para solicitar la credencial como militante, el interesado deberá cumplir la totalidad de los siguientes requisitos:*

I.- *Tener el carácter de adherente con al menos dos años de antigüedad al día de la solicitud, si es que no ha sido dirigente, candidato o haya ocupado un cargo de elección popular postulado por otro Instituto Político, en el caso de que no se cumpliera lo anterior, el plazo no podrá ser inferior a cuatro años a partir de su registro como adherente;*

II.- *Presentarse personalmente ante el Comité Ejecutivo Estatal y entregar la solicitud correspondiente; y*

III.- *Haber participado en alguna de las actividades cívico políticas organizadas por los órganos competentes del Partido.*

Artículo 98.- *De la afiliación de los adherentes;*

Se considerarán como adherentes a los mexicanos a que se refiere el artículo 4 de los presentes Estatutos y que han obtenido ese carácter de acuerdo a lo establecido en este capítulo.

Artículo 99.- *Para ser adherente es necesario tener 15 años cumplidos al día de la solicitud correspondiente, y tratándose de personas que tengan 18 años o más, aparte del trámite de solicitud tendrán que presentar su credencial para votar con fotografía.*

Artículo 100.- *La persona interesada deberá presentar la solicitud ante el Comité Ejecutivo Estatal correspondiente cumpliendo con los requisitos que establecen los presentes Estatutos*

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ARCHIVOS Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN CLASIFICADA

Artículo 9. *Toda la información en posesión del Partido que éste genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por cualquier título es pública y accesible a cualquier persona y sólo podrá clasificarse como “temporalmente reservada” y “confidencial”.*

Como información temporalmente reservada podrá clasificarse aquella cuya divulgación represente un riesgo de perjuicio significativo al interés público; que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas internas o en procesos electorales federales y locales; influyan en la organización del proceso electoral en contravención con la normatividad electoral aplicable; o las demás previstas en la Ley de Transparencia.

Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. Dicha información no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los organismos internos del Partido facultados para ello. Se considera como información confidencial la contenida en el artículo 116 de la Ley de

Transparencia. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los organismos internos del Partido, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

...

TÍTULO CUARTO

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 21. *Se adoptarán las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.*

Asimismo, el Partido no podrá difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en sus sistemas, a menos que haya mediado consentimiento del titular y que sea acorde a las finalidades del instituto político.

Artículo 22. *Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales “padrón de afiliados (simpatizantes, adherentes y militantes) del Partido Verde Ecologista de México”. Cuya finalidad es crear el banco de datos de Afiliados a este Instituto Político y serán resguardados por el Consejo Político Nacional del Partido, para su custodia, administración, actualización y ejecución de todo lo relativo al padrón de afiliados.*

El Secretario, es la instancia donde se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento. Asimismo, no se requerirá el consentimiento de los individuos para proporcionar los datos personales cuando: se transfieran entre órganos y entidades del Partido; sean necesarios para cuestiones estadísticas, científicas o de interés general; y cuando se contrate la prestación de un servicio que los requiera. Lo anterior, siempre y cuando dichos datos se utilicen para el ejercicio de las facultades y propósitos del Partido de conformidad con la Ley de Partidos o cuando medie orden judicial.

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- El derecho de afiliación en materia política-electoral consiste, fundamentalmente, en la prerrogativa de las y los ciudadanos mexicanos para decidir **libre e individualmente** si desean formar parte de los partidos y agrupaciones políticas.
- Afiliado o Militante es el ciudadano que libre, voluntaria e individualmente, acude a un partido político para solicitar su incorporación al padrón de militantes respectivo, a través de los documentos aprobados por los órganos partidistas correspondientes.
- Al PVEM podrán afiliarse las y los ciudadanos que, libre e individualmente, expresen su voluntad de integrarse al partido.

- Para obtener la afiliación al partido de referencia, se requiere, además de ser ciudadana o ciudadano mexicano y expresar **su voluntad libre, individual y pacífica de afiliarse** al Partido, **suscribir personalmente** la solicitud de alta como militante.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- Los partidos políticos, como sujetos obligados por la ley, deberán contemplar en sus Estatutos la forma de garantizar la protección de los datos personales de sus militantes, así como los derechos al acceso, rectificación, cancelación y oposición de estos.

D) Normativa emitida por este Consejo General

Ahora bien, resulta importante precisar la determinación que respecto de las afiliaciones y los padrones de militantes de los partidos políticos asumió el órgano máximo de dirección del *INE*, al emitir el acuerdo registrado con la clave *INE/CG33/2019*, por el cual se aprobó *la implementación de manera excepcional de un procedimiento para la revisión, actualización y sistematización de los padrones de afiliadas y afiliados de los partidos políticos nacionales*, ello derivado de la vinculación que tiene con la materia de la probable infracción que se analiza en el procedimiento al rubro indicado, el cual en lo que interesa estableció:

“C O N S I D E R A N D O

...

10. Justificación del Acuerdo.

...

Así las cosas, con la finalidad de atender el problema de fondo y al mismo tiempo garantizar a la ciudadanía el pleno ejercicio de su derecho a la libre afiliación, aunado a que en el mes de enero de dos mil diecinueve inició el procedimiento para la constitución de nuevos PPN (lo que implica que la o el ciudadano que aparece registrado como militante de algún PPN, no puede apoyar la constitución de algún

nuevo partido) y en aras de proteger el derecho de libre afiliación de la ciudadanía en general, la que milita y la que no y fortalecer el sistema de partidos, **se estima necesario aprobar la implementación de manera excepcional de un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los PPN que garantice que, en un breve período, solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de los cuales se cuente con alguno de los documentos referidos en el considerando 12, numeral 3. En el entendido de que el proceso de actualización debe ser obligatorio y permanente conforme a los Lineamientos referidos en los Antecedentes I y II.**

...

12. Procedimiento de revisión y actualización y modernización de los Padrones de afiliadas y afiliados.

...

4. Consolidación de padrones.

Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, **con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma,** así como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

A partir del sexto día hábil del mes de enero de dos mil veinte y hasta el último día de ese mes, los PPN notificarán a la DEPPP respecto de la cancelación de datos en el sistema de cómputo de todos aquellos registros que permanecieron en el estatus de reserva y de los cuales no informaron, ni acreditaron poseer el documento que prueba la afiliación o ratificación de la misma. En caso contrario, el último día de enero de dos mil veinte, la DEPPP requerirá a los PPN para que informen del estatus señalado, apercibiendo a los PPN que, de ser omisos en la respuesta, sabedores de las consecuencias.

...

ACUERDO

PRIMERO. Se ordena el inicio del procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de las personas afiliadas a los PPN, el cual tendrá vigencia del uno de febrero de dos mil diecinueve al treinta y uno de enero de dos mil veinte, y se aprueba el Formato para solicitar la baja del padrón de militantes del PPN que corresponda, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo como Anexo Único.

SEGUNDO. Las Direcciones Ejecutivas del Registro Federal de Electores y de Prerrogativas y Partidos Políticos llevarán a cabo los trabajos necesarios y pertinentes que permitan implementar el servicio a la ciudadanía de solicitar su baja del padrón de afiliadas y afiliados a un PPN, en cualquier oficina de este Instituto.

TERCERO. Los PPN darán de baja definitiva de manera inmediata de su padrón de militantes los nombres de aquellas personas que, antes de la aprobación de este Acuerdo, hayan presentado quejas por indebida afiliación o por renunciadas que no

hubieran tramitado. En el caso de las quejas por los supuestos antes referidos que se lleguen a presentar con posterioridad a la aprobación de este Acuerdo, los PPN tendrán un plazo de 10 días contado a partir del día siguiente de aquel en el que la UTCE les haga de su conocimiento que se interpuso ésta, para dar de baja de forma definitiva a la persona que presente la queja.

CUARTO. Los PPN deberán cancelar el registro de las y los ciudadanos que hubieren presentado la solicitud de baja del padrón, con independencia de que cuenten o no con el documento que acredite la afiliación, para garantizar el cumplimiento de la última voluntad manifestada.

QUINTO. Los PPN cancelarán los registros de aquellas personas respecto de las cuales no cuenten con la cédula de afiliación, refrendo o actualización una vez concluida la etapa de ratificación de voluntad de la ciudadanía. La baja no podrá darse en contra de la voluntad de la o el afiliado.”
[Énfasis añadido]

De lo transcrito se obtiene medularmente lo siguiente:

- En el Acuerdo INE/CG33/2019, se ordenó instaurar, de manera excepcional, un procedimiento de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar que únicamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación y de las cuales se contara con el documento que avalara la afiliación o ratificación de las mismas.
- Los partidos políticos deberían cancelar aquellos registros de las personas de las que no contaran con la cédula de afiliación.

E) Protección de datos personales

De los artículos 6, Apartado A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la *Constitución*, se desprende el derecho de toda persona, a que en nuestro país se proteja su información privada y sus datos personales, y de igual manera, a manifestar su oposición a la utilización no autorizada de su información personal.

3. CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO

De conformidad con lo expuesto en el punto inmediato anterior, es válido concluir que cuando una persona pretenda, libre y voluntariamente, ser registrada como

miembro del *PVEM*, por regla general debe acudir a las instancias partidistas competentes, suscribir una solicitud de afiliación y proporcionar la información necesaria para su afiliación, a fin de ser registrada en el padrón respectivo.

En consecuencia, por regla general, los partidos políticos (en el caso el *PVEM*), tienen la carga de conservar y resguardar, con el debido cuidado, los elementos o la documentación en la cual conste que la o el ciudadano en cuestión acudió a solicitar su afiliación y que la misma fue libre y voluntaria, puesto que —se insiste— le corresponde la verificación de dichos requisitos y, por tanto, el resguardo de las constancias atinentes, a fin de proteger, garantizar y tutelar el ejercicio de ese derecho fundamental y, en su caso, probar que las personas afiliadas al mismo cumplieron con los requisitos constitucionales, legales y partidarios.

Esta conclusión es armónica con la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para su constitución y registro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, párrafo 1, inciso c), del *COFIPE*, precepto que, derivado de la reforma constitucional en materia política electoral de diez de febrero de dos mil catorce, se reproduce en el diverso 25, párrafo 1, inciso c), de la *LGPP*.

En suma, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, están compelidos a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que la afiliación se realiza de manera libre, voluntaria y personal y, consecuentemente, conservar y resguardar los elementos o documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho y de cumplir con sus obligaciones legales en materia de constitución y registro partidario.

Por tanto, es dable sostener que, en principio, corresponde al partido político demostrar que sus militantes y afiliados manifestaron su consentimiento, libre y voluntario para formar parte de su padrón, a través de los documentos y constancias respectivas que son los medios de prueba idóneos para ese fin, y que además los titulares de los datos personales le proporcionaron los mismos para esa finalidad, incluso tratándose de aquellas afiliaciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de cualquier instrumento administrativo, emitido con el objeto de verificar la obligación de mantener el mínimo de militantes requerido por las leyes para conservar su registro, porque, se insiste:

- El derecho humano de libre afiliación política está previsto y reconocido en la Constitución, tratados internacionales y leyes secundarias, desde décadas atrás y tienen un rango superior a cualquier instrumento administrativo.
- Los partidos políticos sirven de espacio para el ejercicio de este derecho fundamental y, consecuentemente, a éstos corresponde demostrar que las personas que lo integran fue derivado de una decisión individual, libre y voluntaria.
- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La emisión y operación de lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales tiene como objeto principal revisar el mantenimiento de un número mínimo de afiliados que exige la ley, pero no es un instrumento del que nazca la obligación de los partidos políticos de garantizar la libre afiliación, ni mucho menos para marcar el tiempo a partir del cual los institutos políticos deben conservar los elementos para demostrar lo anterior.

Esta conclusión es acorde con lo sostenido por la *Sala Superior*, al resolver el expediente **SUP-RAP-107/2017**¹¹⁹, en el que estableció que la presunción de inocencia es un principio que debe observarse en los procedimientos sancionadores, conforme a su Tesis de Jurisprudencia **21/2013**, de rubro **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES**,¹²⁰ el cual tiene distintas

¹¹⁹ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0107-2017.pdf

¹²⁰. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, *Tribunal Electoral*, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.

vertientes, entre las que destacan, por su trascendencia para el caso que nos ocupa, como regla probatoria¹²¹ y como estándar probatorio.¹²²

En el primer aspecto —**regla probatoria**— implica destacadamente quién debe aportar los medios de prueba en un procedimiento de carácter sancionador, esto es, envuelve las reglas referentes a la actividad probatoria, principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas.

En el segundo matiz —**estándar probatorio**— es un criterio para concluir cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, lo que en materia de sanciones se traduce en definir las condiciones que debe reunir la prueba de cargo para considerarse suficiente para condenar.

Al respecto, la sentencia en análisis refiere que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación¹²³ ha estimado que es posible derrotar la presunción de inocencia cuando **las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia alegada por el presunto responsable, así como las pruebas de descargo y los indicios que puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.**

Mutatis mutandis, en la materia sancionadora electoral, la *Sala Superior* consideró en la sentencia referida que, para superar la presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio, es necesario efectuar un análisis de las probanzas integradas en el expediente a fin de corroborar que:

- La hipótesis de culpabilidad alegada por la denunciante sea capaz de explicar los datos disponibles en el expediente, integrándolos de manera coherente.
- Se refuten las demás hipótesis admisibles de inocencia del acusado.

¹²¹ Tesis de Jurisprudencia: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 478, número de registro 2006093.

¹²² Véase la Tesis de jurisprudencia de rubro: “**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA**”. 10ª Época; Primera Sala, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro 5, abril de 2014, Tomo I, página 476, número de registro 2006091. Véase la nota 35.

¹²³ Véanse las tesis **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, así como **DUDA RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE CARGO Y DE DESCARGO.**

Así, cuando la acusación del quejoso versa sobre la afiliación indebida a un partido político, por no haber mediado el consentimiento del ciudadano, la acusación implica dos elementos:

- Que existió una afiliación al partido.
- Que no medió la voluntad del ciudadano en el proceso de afiliación.

En cuanto al primer aspecto, opera la regla general relativa a que “el que afirma está obligado a probar” misma que, aun cuando no aparece expresa en la ley sustantiva electoral, se obtiene de la aplicación supletoria del artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con fundamento en el diverso 441 de la *LGPE*, lo que implica, que el denunciante tiene en principio la carga de justificar que fue afiliado al partido que denuncia.

Respecto al segundo elemento, la prueba directa y que de manera idónea demuestra que una persona está **afiliada voluntariamente** a un partido es la **constancia de inscripción respectiva**, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta de que una persona desea pertenecer a un instituto político determinado.

Así, cuando en las quejas que dieron lugar al procedimiento ordinario sancionador una persona alega que **no dio su consentimiento** para pertenecer a un partido, sostiene también que no existe la constancia de afiliación atinente, de manera que la parte denunciante no está obligada a probar un hecho negativo (la ausencia de voluntad) o la inexistencia de una documental, pues en términos de carga de la prueba, no son objeto de demostración los hechos negativos, sino conducen a que quien afirme que la incorporación al padrón de militantes estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la o del ciudadano, demuestre su dicho.

Esto es, la presunción de inocencia no libera al denunciado de la carga de presentar los medios de convicción idóneos para evidenciar la verdad de sus afirmaciones y, consecuentemente, desvirtuar la hipótesis de culpabilidad, sino que lo constriñe a demostrar que la solicitud de ingreso al partido **fue voluntaria**, debiendo acompañar, por ejemplo, la constancia de afiliación respectiva, si desea evitar alguna responsabilidad.

De esta forma, la Sala Superior sostuvo que si el partido denunciado alega que la afiliación se llevó a cabo previo consentimiento del denunciante, será ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no tiene el deber de presentar

las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes, pues, por una parte, las cargas probatorias son independientes de otros deberes legales que no guardan relación con el juicio o procedimiento respectivo; y por otra, la ausencia de un deber legal de archivar o resguardar las constancias de afiliación de militantes, no implica que de manera insuperable el partido se encuentre imposibilitado para presentar pruebas que respalden su afirmación.

En efecto, aunque el partido no tuviera el mencionado deber, sí podía contar con la prueba de la afiliación de una persona, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, además de que resulta viable probar la afiliación conforme al marco convencional, constitucional y legal concerniente a la libertad de afiliación a través de otros medios de prueba que justifiquen la participación voluntaria de una persona en la vida interna del partido con carácter de militante, como por ejemplo, documentales sobre el pago de cuotas partidistas, la participación en actos del partido, la intervención en asambleas internas o el desempeño de funciones o comisiones partidistas, entre otras.

En suma, que el partido no tuviera el cuidado de conservar una constancia que documentara la libertad con que se condujo una persona previa a su afiliación que dice se llevó a cabo, o que deliberada (o incluso accidentalmente) la haya desechado, no lo libera de la carga de probar su dicho, teniendo en cuenta la máxima jurídica que establece que, en juicio, nadie puede alegar su propio error en su beneficio.

Lo anterior incide directamente en el derecho de presunción de inocencia en su vertiente de **estándar probatorio**, porque obliga a la autoridad del conocimiento a justificar que los datos derivados del material probatorio que obra en el expediente son consistentes con la acusación, permitiendo integrar toda la información que se genera de manera coherente, refutando la hipótesis de inocencia que hubiere presentado la defensa.

Esto es, la presunción de inocencia no significa que el acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que en su defensa se deben presentar los elementos suficientes para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.

Otro aspecto importante a tomar en consideración, radica en que, si el partido político cumple con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de la persona quejosa, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de queja, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

Al respecto, cabe destacar que, si la autenticidad o el contenido de dicho documento es cuestionado por la parte quejosa, se debe estar a las disposiciones contenidas en la *LGIPE* y el *Reglamento de Quejas*, las cuales aluden a las reglas que deben observarse tratándose de la objeción de documentos, como parte del derecho contradictorio que les asiste a las partes, de oponerse o refutar las pruebas que ofrezcan o que se allegue la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral durante la secuela de un procedimiento ordinario sancionador.

Así, el artículo 24 del citado cuerpo normativo establece que:

*1. Las partes podrán objetar las pruebas ofrecidas durante la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores **ordinario** y especial, siempre y cuando se realice antes de la audiencia de desahogo.*

*2. Para los efectos de lo señalado en el párrafo que antecede, las partes podrán objetar la autenticidad de la prueba o bien su alcance y valor probatorio **debiendo indicar** cuál es el aspecto que no se reconoce de la prueba o por qué no puede ser valorado positivamente por la autoridad, esto es, el motivo por el que a su juicio no resulta idóneo para resolver un punto de hecho.*

*3. Para desvirtuar la existencia o verosimilitud de los medios probatorios ofrecidos, no basta la simple objeción formal de dichas pruebas, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción **y aportar elementos idóneos para acreditarlas, mismos que tenderán a invalidar la fuerza probatoria de la prueba objetada.***

[Énfasis añadido]

Esto es, de conformidad con el precepto reglamentario previamente transcrito, **no basta con objetar de manera formal el medio de prueba ofrecido por el partido político para desvirtuar la existencia o verosimilitud de la constancia de afiliación, sino que es necesario señalar las razones correctas en que se apoya la objeción y, también, aportar en el momento procesal oportuno, los elementos idóneos para acreditar su objeción.**

Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia **4/2005**¹²⁴ de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:

¹²⁴ Jurisprudencia 1a./J. 4/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Página 266.

DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y PUEBLA, ESTA ÚLTIMA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998). En términos de lo dispuesto por los artículos 324 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 330 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, los documentos privados provenientes de las partes deben ser reconocidos expresa o tácitamente para que adquieran el valor probatorio que las propias legislaciones les otorgan. Ahora bien, **esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio reiterado de que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que es necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción.** Debido a que en las legislaciones adjetivas en cuestión no se establece ninguna regla específica sobre la carga probatoria en la hipótesis apuntada, para saber a quién corresponde dicha carga de la prueba sobre la objeción formulada, deben atenderse los hechos en que se funde la misma, aplicándose las reglas genéricas establecidas en los artículos 289 del Código de Procedimientos Civiles de Chiapas y 263 del Código de Procedimientos Civiles de Puebla, en cuanto a que **a cada parte corresponde probar los hechos de sus pretensiones. Por tanto, si la objeción de un documento privado proveniente de los interesados base de sus pretensiones se funda en la circunstancia de no haber suscrito el documento el objetante, a él corresponde la carga de la prueba.** Dicho de otra forma, **quien invoca una situación jurídica está obligado a probar los hechos fundatorios en que aquélla descansa; por lo contrario, quien sólo quiere que las cosas se mantengan en el estado que existen en el momento en que se inicia el juicio, no tiene la carga de la prueba, pues desde el punto de vista racional y de la lógica es evidente que quien pretende innovar y cambiar una situación actual, debe soportar la carga de la prueba.**

[Énfasis añadido]

Bajo ese contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió, en concordancia con los preceptos invocados en líneas que anteceden, que no basta decir que se objeta un documento privado para que éste carezca de valor probatorio, sino que debe ser necesario probar las causas o motivos en que se funde la objeción, es decir, que al objetante corresponde la carga de la prueba.

A efecto de robustecer lo anterior, se citan criterios de diversos Tribunales Colegiados de Circuito, en los que se han pronunciado en tal sentido sobre el tema:

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. OBJECCIÓN A LOS.**¹²⁵
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES. CONFORME AL ARTÍCULO 277 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA.**¹²⁶

¹²⁵ Jurisprudencia I.30c. J/8, Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Agosto de 1996, Página 423.

¹²⁶ Tesis Aislada XV.4o.12 C, Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Página 3128.

- **DOCUMENTOS PRIVADOS. PARA NEGARLES VALOR PROBATORIO, NO BASTA LA SIMPLE OBJECCIÓN, SINO QUE DEBEN SEÑALARSE LAS CAUSAS EN QUE LA FUNDE Y DEMOSTRARLAS.**¹²⁷
- **DOCUMENTOS PRIVADOS, CARGA DE LA PRUEBA EN CASO DE OBJECCIÓN A LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)**¹²⁸
- **DOCUMENTOS PRIVADOS. CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR LA OBJECCIÓN RESPECTO DE LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA CONTENIDA EN ELLOS**¹²⁹
- **DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE LAS PARTES, LA CARGA PROBATORIA DE LA OBJECCIÓN DE FIRMA CORRESPONDE A QUIEN LA PLANTEA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)**¹³⁰

De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia **I.3o.C. J/11**,¹³¹ dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes:

DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS. *En tratándose de documentos privados, debe hacerse la distinción entre aquellos que provienen de terceras personas y los que se atribuyen a las partes litigantes en la controversia. Respecto de los primeros, basta la objeción del instrumento privado, debidamente razonada, para que pierda su valor probatorio, quedando a cargo del oferente la carga de la prueba y apoyar su contenido aportando otros elementos de convicción, y en relación con el segundo supuesto, para tener por satisfecho lo dispuesto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es menester que la parte a quien perjudique realice en tiempo, forma y suficiencia la objeción, para que pierda su alcance probatorio dicho instrumento. De esta manera, se tiene que si en un caso la contraparte del oferente, al dársele vista con el documento exhibido, se limitó a manifestar que no lo había firmado, tal aseveración no pudo constituir la causa suficiente de objeción que demeritara el alcance de esa probanza, ya que para tal efecto resulta indispensable que existan causas motivadoras de la invalidez de la prueba y que se aportaran las pruebas idóneas para tal fin, como pudieron ser las periciales grafoscópicas, grafológicas y caligráficas; elementos que no se rindieron para acreditar la impugnación, como lo dispone el artículo 341 del código citado.*

[Énfasis añadido]

¹²⁷ Jurisprudencia III. 1Oc. J/17, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Número 63, Marzo de 1993, Página 46.

¹²⁸ Tesis Aislada, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Agosto de 1993, Página 422.

¹²⁹ Tesis XXXI.3º 8 L, Tercer Tribunal Colegiado de Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Página 1254.

¹³⁰ Tesis II. o C, 495 C, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Página 1454.

¹³¹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

En igual sentido, el Primer Tribunal Colegiado en materia civil del Tercer Circuito en la Jurisprudencia **III.1o.C. J/29**,¹³² sostuvo el referido criterio en el siguiente sentido:

DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). *Una interpretación armónica de los artículos 342, 343, 344, 345, 346 y 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, lleva a concluir que cuando se objeta la autenticidad de la firma de un documento privado es necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser determinado por una persona con conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito grafógrafo, aun cuando exista diferencia notoria entre las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la diferencia entre ambas.*

[Énfasis añadido]

Lo anterior, en suma, significa que para destruir la presunción de inocencia que surge en favor del denunciado cuando aporta elementos de prueba idóneos para demostrar que la afiliación cuestionada estuvo precedida de la manifestación de voluntad de la persona, tal como las constancias de afiliación correspondientes, o bien, elementos que pongan de manifiesto que la parte quejosa realizó hechos positivos derivados de su militancia, no basta que, de manera abstracta y genérica, la persona denunciante afirme que dichos medios de convicción no son veraces o auténticos.

Lo anterior, atento que, conforme a la normativa que rige los procedimientos sancionadores electorales y que inexcusablemente está obligado a seguir este *Consejo General*, resulta imperativo que quien objeta un medio de prueba, señale específicamente cuál es la parte que cuestiona, y al efecto aporte, o cuando menos señale, conforme a la regla general relativa a que a quien afirma le corresponde probar —vigente en los procedimientos sancionadores electorales conforme a lo establecido por la *Sala Superior*—, los elementos objetivos y ciertos que puedan conducir a destruir la eficacia probatoria de los elementos aportados por el denunciado en su defensa, pues de otra manera, el principio de presunción de inocencia deberá prevalecer apoyado en las evidencias allegadas al procedimiento por el presunto responsable.

¹³² Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

4. HECHOS ACREDITADOS

Como se ha mencionado, las denuncias respecto de las que se emitirá la presente determinación (veinte en total, como se ha establecido previamente), versan sobre la supuesta violación a su derecho de libertad de afiliación en su modalidad positiva —indebida afiliación—, ya que denunciaron haber sido incorporadas en el padrón del *PVEM*, sin su consentimiento, así como la utilización de sus datos personales por dicho partido político para sustentar y continuar con tales afiliaciones.

En torno a la demostración de los hechos constitutivos de las infracciones objeto de la denuncia, en el siguiente cuadro se resumirá, la información derivada de la investigación preliminar implementada, así como las conclusiones que, para el caso, fueron advertidas, de conformidad con lo siguiente:

- I. **Afiliaciones que, a juicio de esta autoridad, se realizaron conforme con la normativa aplicable.**
 - a) **Supuestos en los que el partido político aportó cédulas de afiliación que se consideran válidas, y que no fueron objetadas por las personas denunciantes:**

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
1	Mario Mauricio Ramírez Arellano Refirió que desconocía la afiliación y que en esa fecha estaba laborando en el INE y que, además, es apertidista.	Afiliado 17/03/2018 Registro cancelado 25/11/2020	Informó que fue afiliado el 17/03/2018 y que su registro fue cancelado el 25/11/2020. Aportó el original del formato denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2018, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma. La fecha que se asentó en el citado formato es el 17/03/2018, misma que coincide con la que se informó por la DEPPP y el propio partido.
Conclusiones A partir del criterio de regla probatoria establecido previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i> , que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación del ciudadano se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
2	<p>Rocío Espinosa Aquino</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que al solicitar empleo en el INE se enteró que estaba afiliada al citado partido político y que desconoce rotundamente haber realizado ese trámite.</p>	<p>Afiliado 12/11/2019</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 12/11/2019 y que su registro fue cancelado el 25/11/2020.</p> <p>Aportó el original del formato denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>En apartado posterior se realizará el análisis de dicho documento</p>

Observaciones

Como se señaló previamente, el PVEM aportó el documento denominado Aportó el original del formato denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, con la información de Rocío Espinosa Aquino.

En dicha constancia, que —se reitera—, fue presentada, en respuesta al requerimiento de la autoridad tramitadora, en original, se asentó el nombre de la persona denunciante, así como una firma que —resulta válido suponer—, pertenece a Rocío Espinosa Aquino.

Asimismo, el formato contiene datos relacionados con el domicilio, clave de elector, entre otros datos, que hacen identificable a la denunciante; además, en el formato se asienta, bajo el rubro de firma, la siguiente leyenda: Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y/o Partido Político.

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad, que dicha constancia, lleva por fecha —en la parte superior, que podría inferirse se trata del día de su llenado— ocho de agosto de dos mil diecinueve [08/08/2019], mientras que, de la respuesta aportada por la DEPPP, se advierte que

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
	la ciudadana fue afiliada al partido denunciado el doce de noviembre de dos mil diecinueve [12/11/2019], fecha que también reconoce el propio partido político.		
	No obstante, se considera que dicha inconsistencia no afecta la validez del documento aportado por el denunciado.		
	Lo anterior, en razón de que, la fecha de llenado del documento [08/08/2019], es anterior a la fecha de afiliación (12/11/2019), aunado a que, esta última resulta coincidente tanto en la información aportada por el <i>PVEM</i> como respecto de lo que corroboró la <i>DEPPP</i> y, de igual manera, teniendo en cuenta, como se precisó líneas arriba, que el formato de afiliación aporta un cúmulo de información que, para lo que concierne al presente caso, hace indudable para esta autoridad, que fueron colmados los requisitos establecidos en el citado acuerdo INE/CG33/2019, para tener por válida la afiliación de la quejosa.		
Conclusiones			
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i> , que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el <u>original</u> del formato de afiliación con firma autógrafa, documental que se ha tenido por válida conforme lo sostenido en párrafos anteriores, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.			

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
3	<p>David Cruz Antonio Domínguez Aguilar</p> <p>Denunció al <i>PVEM</i>, por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al participar en la convocatoria para trabajar en el INE.</p>	<p>Afiliado 20/09/2019</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 20/09//2019 y que su registro fue cancelado el 25/11/2020.</p> <p>Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>La fecha que se asentó en el citado formato es veinte de septiembre de dos mil diecinueve [20/09//2019], misma que coincide con la que se informó por la <i>DEPPP</i> y el propio partido.</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
Conclusiones			
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación del ciudadano se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>			

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
4	<p>Samuel Alejandro Hernández Hernández</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que nunca se ha registrado y que se enteró al registrarse en la Convocatoria del INE para participar como CAE.</p>	<p>Afiliado 08/02/2020</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 08/02/2020 y que su registro fue cancelado el 25/11/2020.</p> <p>Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>La fecha de llenado del referido formato es el de ocho de febrero de dos mil veinte [08/02/2020], misma que con la fecha de afiliación, que informó la DEPPP y el propio partido político.</p>
Conclusiones			
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación del ciudadano se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>			

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
5	María Ana Ela Basurto Sánchez	Afiliado 23/12/2019	Informó que fue afiliado el 23/12/2019 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020.

**CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020**

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la <i>DEPPP</i>	Manifestaciones del partido político
	<p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al darse de alta para participar como SE y CAE.</p>	<p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>El referido formato no contiene fecha, no obstante, el propio partido político informó que la fecha de afiliación es de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, misma que coincide con la fecha de afiliación, que informó la <i>DEPPP</i>.</p> <p>En apartado posterior se realizará el análisis de dicho documento.</p>

Observaciones

Como se señaló previamente, el PVEM aportó el documento denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, con la información de María Ana Ela Basurto Sánchez.

En dicha constancia, presentada, en original, se asentó el nombre de la persona denunciante, así como una firma que —resulta válido suponer—, pertenece a María Ana Ela Basurto Sánchez.

Así mismo, el formato contiene datos relacionados con el domicilio, clave de elector, entre otros datos, que hacen identificable a la persona denunciante; además, en el formato se asienta, bajo el rubro de firma, la siguiente leyenda: Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y/o Partido Político.

Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad, que dicha constancia, no se advierte asentada ninguna fecha en el espacio correspondiente—en la parte superior, que podría inferirse se trata del día de su llenado—.

No obstante, se considera que dicha inconsistencia no afecta la validez del documento aportado por el denunciado.

Lo anterior, en razón de que, la fecha de afiliación que informó el *PVEM* (veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve), resulta coincidente con la que corroboró la *DEPPP* y, de igual manera, teniendo en cuenta, como se precisó líneas arriba, que el formato de afiliación aporta un cúmulo de información que, para lo que concierne al presente caso, hace indudable para esta autoridad, que fueron colmados los requisitos establecidos en el citado acuerdo INE/CG33/2019, para tener por válida la afiliación de la quejosa.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
Conclusiones			
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, documental que se ha tenido por válida conforme lo sostenido en párrafos anteriores, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>			

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
6	<p>Manuel Guzmán Gómez</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al darse de alta para participar como CAE.</p>	<p>Afiliado 18/06/2019</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 18/06/2019 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020.</p> <p>Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>La fecha que se asentó en el citado formato es dieciocho de junio de dos mil diecinueve [18/06/2019], misma que coincide con la que se informó por la DEPPP y el propio partido.</p>
Conclusiones			
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i>, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio¹³³ (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación del ciudadano se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>			

¹³³ Cabe precisar que mediante correo electrónico de trece de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso presentó un escrito en el que hizo manifestaciones en relación a la cédula aportada por el partido político denunciado, sin embargo, el mismo no fue presentado en original, pese a que esta autoridad se lo requirió mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno. Escrito y correo electrónico visible a páginas 495 a 496.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
7	<p>Lucía Guzmán Gómez</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al darse de alta para participar como CAE.</p>	<p>Afiliado 05/04/2019</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 05/04/2019 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020.</p> <p>Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>La fecha del referido formato es del cinco de abril de dos mil diecinueve [05/04/2019], misma que coincide con la fecha de afiliación, que informó la DEPPP y el propio partido político</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el **original** del formato de afiliación con firma autógrafa, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio¹³⁴ (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del *Manual*), se debe concluir que **la afiliación de la persona denunciante se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.**

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
8	<p>Alonso Guzmán López</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que desconocía la afiliación y que no la solicitó.</p>	<p>Afiliado 05/04/2019</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 05/04/2019 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020.</p> <p>Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>La fecha del referido formato es del cinco de abril de dos mil diecinueve [05/04/2019], misma que coincide con la fecha de</p>

¹³⁴ Cabe precisar que mediante correo electrónico de trece de agosto de dos mil veintiuno, la quejosa presentó un escrito en el que hizo manifestaciones en relación con la cédula aportada por el partido político denunciado, sin embargo, el mismo no fue presentado en original, pese a que esta autoridad se lo requirió mediante proveído de diez de diciembre de dos mil veintiuno. Escrito y correo electrónico visible a páginas 497 a 498.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			afiliación, que informó la DEPPP y el propio partido político
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación del ciudadano se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>			

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
9	<p>Oscar Alejandro Torres Vázquez</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al darse de alta para participar como SE y CAE, que nunca ha presentado documentos para afiliarse a dicho partido y que se considera apartidista.</p>	<p>Afiliado 08/10/2016</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 08/10/2016 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020.</p> <p>Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2016-2017. CDMX, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>El referido formato no contiene fecha [en el apartado correspondiente se aprecia 2016-09 y enseguida, una serie de números: 012229]; no obstante, el partido político informó que el ciudadano fue afiliado el ocho de octubre de dos mil dieciséis, información que coincide con la fecha de afiliación que informó la DEPPP.</p> <p>En apartado posterior se realizará el análisis de dicho documento.</p>
<p style="text-align: center;">Observaciones</p> <p>Como se señaló previamente, el PVEM aportó el documento denominado Aportó el original del formato denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2016-2017 CDMX, con la información de Oscar Alejandro Torres Vázquez.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
			<p>En dicha constancia, que —se reitera—, fue presentada, en respuesta al requerimiento de la autoridad tramitadora, en original, se asentó el nombre de la persona denunciante, así como una firma que —resulta válido suponer—, pertenece a Oscar Alejandro Torres Vázquez.</p> <p>Asimismo, el formato contiene datos relacionados con el domicilio, clave de elector, entre otros datos, que hacen identificable a la persona denunciante; además, en el formato se asienta, bajo el rubro de firma, la siguiente leyenda: Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y/o Partido Político.</p> <p>Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad, que dicha constancia, no se advierte asentada ninguna fecha en el espacio correspondiente—en la parte superior, que podría inferirse se trata del día de su llenado—.</p> <p>No obstante, se considera que dichas inconsistencias no afectan la validez del documento aportado por el denunciado.</p> <p>Lo anterior, en razón de que, la fecha de afiliación que informó el PVEM (ocho de octubre de dos mil dieciséis), resulta coincidente con la que corroboró la DEPPP y, de igual manera, teniendo en cuenta, como se precisó líneas arriba, que el formato de afiliación aporta un cúmulo de información que, para lo que concierne al presente caso, hace indudable para esta autoridad, que fueron colmados los requisitos establecidos en el citado acuerdo INE/CG33/2019, para tener por válida la afiliación de la quejosa.</p>
Conclusiones			
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el original del formato de afiliación con firma autógrafa, documental que se ha tenido por válida conforme lo sostenido en párrafos anteriores, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación del ciudadano se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p>			

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
10	<p>Herman Aguilar Andapia</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrito indebidamente y sin su</p>	<p>Afiliado 08/10/2016</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 08/10/2016 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020.</p> <p>Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2016-2017, GUERRERO, en el que aparece,</p>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
	consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación y que se enteró al realizar su registro para participar como SE y CAE.		además de los datos de la persona denunciante, una firma. La fecha del referido formato es de ocho de octubre de dos mil dieciséis [08/10/2016], misma que coincide con la fecha de afiliación, que informó la DEPPP y el propio partido político

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el **original** del formato de afiliación con firma autógrafa, y que el quejoso no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese documento, en términos del *Manual*), se debe concluir que **la afiliación del ciudadano se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.**

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
11	María de la Luz Suárez Ávila Denunció al PVEM, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados. Refirió que desconocía la afiliación al partido denunciado y que en el tiempo que fue afiliada se encontraba trabajando fuera del municipio.	Afiliado 25/12/2018 Registro cancelado 25/11/2020	Informó que fue afiliado el 25/12/2018 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020. Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2018, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma. La fecha del referido formato es de veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho [25/12/2018], misma que coincide con la fecha de afiliación, que informó la DEPPP y el propio partido político

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse que, al no existir controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM, que el partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria el **original** del formato de afiliación con firma autógrafa, y que la quejosa no realizó manifestaciones que desvirtuaran dicho elemento probatorio (aún y cuando se le corrió traslado con copia de ese

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
documento, en términos del <i>Manual</i>), se debe concluir que la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.			

- b) Supuestos en los que el partido político aportó cédulas de afiliación que se consideras válidas, y que, si bien fueron objetadas por las personas denunciantes, dicha objeción se considera insuficiente:

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
1	Olivia Chino Dorantes Denunció al PVEM, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.	Afiliado 25/10/2016 Registro cancelado 05/11/2020	Informó que fue afiliada el 25/10/2016 y que su registro fue cancelado el 05/11/2020. Aportó el original del formato "CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2016-2017. GUERRERO", en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma. En apartado posterior se realizará el análisis de dicho documento.	La quejosa manifestó: En respuesta a la vista que se le dio con la cédula: ¹³⁵ " ... fui afiliada sin mi consentimiento al partido verde ecologista de México, en el año 2016, cotejando el formato de afiliación me di cuenta que la firma no es legítima y ha sido alterada para fines favorables a dicho partido. Me deslindo totalmente del partido político y rechazo haber firmado dicho formato de afiliación. Anexo la copia de mi credencial de elector para realizar la comparativa de la firma."
<p style="text-align: center;">Observaciones</p> <p>Como se señaló previamente, el PVEM aportó el documento denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 206-2017. GUERRERO, con la información de Olivia Chino Dorantes.</p>				

¹³⁵ Visible a página 465.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
	<p>En dicha constancia, que —se reitera—, fue presentada, en respuesta al requerimiento de la autoridad tramitadora, en original, se asentó el nombre de la persona denunciante, así como una firma que —resulta válido suponer—, pertenece a Olivia Chino Dorantes.</p> <p>Asimismo, el formato contiene datos relacionados con el domicilio, clave de elector, entre otros, que hacen identificable a la denunciante; además, en el formato se asienta, arriba del rubro de firma, la siguiente leyenda: <i>Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y/o Partido Político.</i></p> <p>Se precisa que, a la constancia de afiliación que aquí se analiza, se adjuntó copia de la credencial de la denunciante.</p> <p>Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad, que dicha constancia, lleva por fecha —en la parte superior, que podría inferirse se trata de la fecha de afiliación— diez de octubre de dos mil dieciséis, mientras que, el partido informó que la quejosa fue afiliada el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.</p> <p>No obstante, se considera que dicha inconsistencia no afecta la validez del documento aportado por el denunciado.</p> <p>Lo anterior, en razón de que, la fecha de llenado del documento [10/10/2016], es anterior a la fecha de afiliación (25/10/2016), aunado a que, esta última resulta coincidente tanto en la información aportada por el PVEM como respecto de lo que corroboró la DEPPP y, de igual manera, teniendo en cuenta, como se precisó líneas arriba, que el formato de afiliación aporta un cúmulo de información que, para lo que concierne al presente caso, hace indudable para esta autoridad, que puede tenerse por válida dicha constancia para acreditar el consentimiento de la quejosa.</p>			
Conclusiones				
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse:</p> <p>No existe controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM.</p> <p>El partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria, el <u>original</u> del formato de afiliación con firma autógrafa, constancia que se ha tenido por válida conforme lo sostenido en párrafos anteriores; de igual manera debe señalarse que, si bien la persona denunciante formuló objeción a dicha documental, en los términos precisados en líneas previas, lo cierto es que, esta autoridad considera que, tales manifestaciones no cumplen lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.</p>				

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
<p>Por tanto, se debe concluir que, la afiliación de dicha persona se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p> <p>Al final del presente subapartado se formularán consideraciones comunes a los casos que aquí se analizan.</p>				

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
2	<p>Claudia Lorena Pérez Mirón</p> <p>Manifestó que desconoce su afiliación al PVEM, que se enteró de ello al intentar participar en la convocatoria electoral.</p>	<p>Afiliado 12/11/2019</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliada el 12/11/2019 y que su registro fue cancelado el 25/11/2020.</p> <p>Aportó el original del formato denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>El referido formato no contiene fecha, no obstante, el partido político informó que la ciudadana fue afiliada el doce de noviembre de dos mil diecinueve, información que coincide con la fecha de afiliación que informó la DEPPP.</p> <p>En apartado posterior se realizará el análisis de dicho documento.</p>	<p>La quejosa manifestó:</p> <p>En respuesta a la vista que se le dio con la cédula:¹³⁶</p> <p>“... no estoy afiliada al partido político el cual se me ha señalado (partido verde ecologista) y que en ningún momento he firmado ninguna afiliación a algún partido político y asimismo le hago saber que desconozco totalmente de este partido político. Solicito de la manera más atenta y respetuosa al presidente del Partido (verde ecologista) darme de baja del registro de afiliados este Partido Político Local del Estado de Oaxaca en el cual desconozco y niego haberme registrado y/o afiliado a dicho Instituto Político.”</p>

¹³⁶ Visible a página 309.

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
Observaciones				
<p>Como se señaló previamente, el PVEM aportó el documento denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, con la información de Claudia Lorena Pérez Mirón.</p> <p>En dicha constancia, que —se reitera—, fue presentada, en respuesta al requerimiento de la autoridad tramitadora, en original, se asentó el nombre de la persona denunciante, así como una firma que —resulta válido suponer—, pertenece a Claudia Lorena Pérez Mirón.</p> <p>Asimismo, el formato contiene datos relacionados con el domicilio, clave de elector, entre otros, que hacen identificable a la denunciante; además, en el formato se asienta, arriba del rubro de firma, la siguiente leyenda: <i>Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y/o Partido Político.</i></p> <p>Se precisa que, a la constancia de afiliación que aquí se analiza, se adjuntó copia de la credencial de la denunciante.</p> <p>Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad, que dicha constancia, no tiene asentada ninguna fecha en el rubro respectivo; no obstante, el partido informó que la quejosa fue afiliada el doce de noviembre de dos mil diecinueve.</p> <p>No obstante, se considera que dichas inconsistencias no afectan la validez del documento aportado por el denunciado.</p> <p>Lo anterior, en razón de que, la fecha de afiliación que informó el PVEM (doce de noviembre de dos mil diecinueve), resulta coincidente con la que corroboró la DEPPP y, de igual manera, teniendo en cuenta, como se precisó líneas arriba, que el formato de afiliación aporta un cúmulo de información que, para lo que concierne al presente caso, hace indudable para esta autoridad, que fueron colmados los requisitos establecidos en el citado acuerdo INE/CG33/2019, para tener por válida la afiliación de la quejosa.</p>				
Conclusiones				
<p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse:</p> <p>No existe controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM.</p> <p>El partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria, el <u>original</u> del formato de afiliación con firma autógrafa, constancia que se ha tenido por válida conforme lo sostenido en párrafos anteriores; de igual manera debe señalarse que, si bien la persona</p>				

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
<p>denunciante formuló objeción a dicha documental, en los términos precisados en líneas previas, lo cierto es que, esta autoridad considera que, tales manifestaciones no cumplen lo previsto en el artículo 24 del Reglamento de Quejas.</p> <p>Por tanto, se debe concluir que, la afiliación de dicha persona se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p> <p>Al final del presente subapartado se formularán consideraciones comunes a los casos que aquí se analizan.</p>				

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
3	<p>Martha Flores Ramírez</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que tuvo conocimiento de su afiliación al realizar su registro para trabajar como CAE, que no firmó documento que avale la afiliación.</p>	<p>Afiliada 16/12/2019</p> <p>Registro cancelado 10/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliada el 16/12/2019 y que su registro fue cancelado el 10/11/2020.</p> <p>Aportó el original del formato denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>La fecha de llenado del referido formato es del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve [16/12/2019], misma que coincide con la</p>	<p>La quejosa manifestó:</p> <p>En respuesta a la vista que se le dio con la cédula:¹³⁷</p> <p>“... hago de su conocimiento que desconozco y desapruero los datos que supuestamente son míos y que vienen registrados en el formato de afiliación al Partido Verde Ecologista, por lo cual solicito sea dado de baja dicha afiliación de acuerdo a los lineamientos establecidos para realizarla.”</p>

¹³⁷ Visible a página 453.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
			fecha de afiliación, que informó la DEPPP y el propio partido político.	
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse:</p> <p>No existe controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM.</p> <p>El partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria, el original del formato de afiliación con firma autógrafa; al respecto, si bien la persona denunciante formuló objeción a dicha documental, en los términos precisados en líneas previas, lo cierto es que, esta autoridad considera que, tales manifestaciones no cumplen lo previsto en el artículo 24 del <i>Reglamento de Quejas</i>.</p> <p>Por tanto, se debe concluir que, la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.</p> <p>Al final del presente subapartado se formularán consideraciones comunes a los casos que aquí se analizan.</p>				

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
4	Luz Andrea Alva Rodríguez Denunció al PVEM, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento	Afiliado 11/11/2019 Registro cancelado 25/11/2020	Informó que fue afiliada el 11/11/2019 y que fue cancelado su registro el 25/11/2020. Aportó el original del formato denominado	La quejosa manifestó: En respuesta a la vista que se le dio con la cédula: ¹³⁸ : “... El motivo de mi carta es porque el Partido Verde Ecologista de México me afilió indebidamente, por tal motivo presenté una denuncia en contra de dicho partido y de quien resulte responsable (se anexan

¹³⁸ Visible a páginas 264 a 265.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
	en el padrón de afiliados.		<p>CAMPANA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, MEXICO, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>La fecha de llenado del referido formato es del once de noviembre de dos mil diecinueve [11/11/2019], misma que coincide con la fecha de afiliación, que informó la DEPPP y el propio partido político.</p>	<p>documentos). El partido a su vez aportó el formato de afiliación y se me hizo entrega de una copia simple por medio de la 14 Junta Distrital Ejecutiva (anexo copia) bajo protesta de decir verdad denunció que el contenido de dicho formato es falso ya que yo jamás lo elaboré. Aclaro que no es mi firma, no especifica mi número de teléfono fijo ni celular ni correo electrónico, ni mi escolaridad. Y en la copia del INE que anexo se puede apreciar mi firma real.</p> <p>...."</p>

Conclusiones

A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse:

No existe controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del PVEM.

El partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria, el **original** del formato de afiliación con firma autógrafa; al respecto, si bien la persona denunciante formuló objeción a dicha documental, en los términos precisados en líneas previas, lo cierto es que, esta autoridad considera que, tales manifestaciones no cumplen lo previsto en el artículo 24 del *Reglamento de Quejas*.

Por tanto, se debe concluir que, **la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.**

Al final del presente subapartado se formularán consideraciones comunes a los casos que aquí se analizan.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
5	<p>Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que al registrarse como SE y CAE tuvo conocimiento de su afiliación.</p>	<p>Afiliado 17/03/2019</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliada el 17/03/2019 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020</p> <p>Aportó el original del formato "CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019 MEXICO", en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>En apartado posterior se realizará el análisis de dicho documento.</p>	<p>La quejosa manifestó:</p> <p>En respuesta a la vista que se le dio con la cédula:¹³⁹:</p> <p>"... El motivo de mi carta es porque el Partido Verde Ecologista de México me afilió indebidamente, por tal motivo presenté una denuncia en contra de dicho partido y de quien resulte responsable (se anexan documentos). El partido a su vez aportó el formato de afiliación y se me hizo entrega de una copia simple por medio de la 14 Junta Distrital Ejecutiva (anexo copia) bajo protesta de decir verdad denunció que el contenido de dicho formato es falso ya que no es mi letra, no es mi firma, no especifica mi número de teléfono fijo ni celular no correo electrónico, la escolaridad también es falsa y en la fecha en que supuestamente se dio el alta que es el 13/03/2019 yo no vivía en el domicilio que aparece en el formato (anexa copia del INE del domicilio que en ese entonces vivía) Y en dicha copia también se puede apreciar mi firma. ..."</p>
<p style="text-align: center;">Observaciones</p> <p>Como se señaló previamente, el PVEM aportó el documento denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019 MEXICO, con la información de Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín.</p> <p>En dicha constancia, que —se reitera—, fue presentada, en respuesta al requerimiento de la autoridad tramitadora, en original, se asentó el nombre de la persona denunciante, así como una firma que —resulta válido suponer—, pertenece a Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín.</p> <p>Asimismo, el formato contiene datos relacionados con el domicilio, clave de elector, entre otros, que hacen identificable a la denunciante; además, en el formato se asienta, arriba del rubro de firma, la siguiente leyenda: <i>Manifiesto mi libre interés de ser inscrito en el Padrón de Afiliados del Partido Verde Ecologista de México, comprometiéndome a contribuir a la realización de sus</i></p>				

¹³⁹ Visible a páginas 273 a 274.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
<i>objetivos. Declaro bajo protesta de decir verdad que no tengo afiliación con ninguna otra Asociación y/o Partido Político.</i>				
Se precisa que, a la constancia de afiliación que aquí se analiza, se adjuntó copia de la credencial de la denunciante.				
Ahora bien, no pasa inadvertido para esta autoridad, que dicha constancia, lleva por fecha —en la parte superior, que podría inferirse se trata de la fecha de afiliación— trece de marzo de dos mil diecinueve [13/03/2019], mientras que, el partido informó que la quejosa fue afiliada el diecisiete de marzo de dos mil diecinueve [17/03/2019].				
No obstante, se considera que dichas inconsistencias no afectan la validez del documento aportado por el denunciado.				
Lo anterior, en razón de que, la fecha de afiliación que informó el <i>PVEM</i> (diecisiete de marzo de dos mil diecinueve), resulta coincidente con la que corroboró la <i>DEPPP</i> y, de igual manera, teniendo en cuenta, como se precisó líneas arriba, que el formato de afiliación aporta un cúmulo de información que, para lo que concierne al presente caso, hace indudable para esta autoridad, que fueron colmados los requisitos establecidos en el citado acuerdo INE/CG33/2019, para tener por válida la afiliación de la quejosa.				
Conclusiones				
A partir del criterio de regla probatoria establecida previamente, es de concluirse:				
No existe controversia en el sentido de que la persona denunciante apareció registrada como militante del <i>PVEM</i> .				
El partido político aportó como prueba para acreditar que la afiliación fue voluntaria, el original del formato de afiliación con firma autógrafa; al respecto, si bien la persona denunciante formuló objeción a dicha documental, en los términos precisados en líneas previas, lo cierto es que, esta autoridad considera que, tales manifestaciones no cumplen lo previsto en el artículo 24 del <i>Reglamento de Quejas</i> .				
Por tanto, se debe concluir que, la afiliación de la ciudadana se realizó conforme con las disposiciones legales y estatutarias aplicables.				
Al final del presente subapartado se formularán consideraciones comunes a los casos que aquí se analizan.				

En todos los casos anteriores, se considera que, las afirmaciones de las personas denunciantes, desconociendo ya sea la afiliación, la constancia con las que se les

dio vista, o bien, la firma estampada en dichos documentos, resultan insuficientes para desvirtuar las cédulas en análisis.

En efecto, esta autoridad advierte, en los casos de Olivia Chino Dorantes, que manifestó: *cotejando el formato de afiliación me di cuenta que la firma no es legítima y ha sido alterada para fines favorables a dicho partido; [...]*, que se hace una mención genérica, de desconocimiento de la firma y del formato, pero sin que se hayan expresado razones y fundamentos a partir de los cuales esta autoridad estuviera en condiciones de dar la razón a los denunciantes respecto de la objeción que formulan.

Por cuanto hace a las personas denunciantes Claudia Lorena Pérez Mirón, Martha Flores Ramírez, Luz Andrea Alva Rodríguez y Ma de la Luz Rodríguez Osteguín de los escritos en los que formulan su objeción se desprende que, niegan haber firmado el formato de afiliación respectivo y/o desconocen los datos asentados en el mismo; del mismo modo, las personas denunciantes realizan manifestaciones acerca del contexto fáctico de las conductas denunciadas (que los datos asentados en los formatos respecto a sus domicilios, números telefónicos o escolaridad no coinciden), pero sin que se advierta una controversia frontal y contundente del medio de prueba, más allá de la negativa misma.

En tal sentido, toda vez que las personas denunciantes se limitan a negar haberse afiliado, a objetar el formato y la firma del mismo pero sin que de los escritos en análisis se desprenda referencia alguna a la necesidad de que, mediante una prueba pericial se aclare la negativa que formulan respecto de tales constancias, debe reiterarse la determinación de que, se está en presencia de manifestaciones (que pueden ser menos o más detalladas, según se ha establecido en los párrafos anteriores) que tienen por común denominador el que, el intento de objeción, aún el más elaborado, no señala con contundencia la necesidad de que se lleve a cabo una prueba pericial en grafoscopia, a partir de la cual esta autoridad se allegue del elemento de certeza necesario para restar valor a la documental aportada por el partido político.

Es decir, no basta que las personas denunciantes antes indicadas objetaran las constancias aportadas por el denunciado, sino que era necesario señalar las razones en que se apoyaba la misma y, sobre todo, aportar los elementos idóneos para acreditar que la firma no corresponde a la que ellos estampan, como pudiera ser, algún documento en el que se hubiera estampado su rúbrica, la pericial en materia de grafoscopia o cualquier otra que considerara oportuna.

No pasa inadvertido que la denunciante Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín, en el escrito del que se ha venido dando cuenta y cuyo contenido medular se transcribió previamente, refirió, además de lo analizado con anterioridad, lo siguiente:

...en la fecha en que supuestamente se dio el alta que es el 13/03/2019 yo no vivía en el domicilio que aparece en el formato (anexa copia del INE del domicilio que en ese entonces vivía) Y en dicha copia también se puede apreciar mi firma.

Al respecto, debe señalarse que el *PVEM* adjuntó al formato de afiliación de la citada ciudadana copia de su credencial de elector, en la que se advierte que el domicilio contenido en ese documento es el mismo que el asentado en la cédula de afiliación respectiva.

Del mismo modo, debe reiterarse que, la cédula aportada por el partido político denunciado incluye, una firma; dicho elemento constituye la esencia de la manifestación de voluntad por parte de la ciudadanía al ser afiliado a un partido político y, en el caso, como se precisó previamente, la firma no fue objetada de manera contundente.

Los razonamientos anteriores encuentran sustento en las Tesis de Jurisprudencia I.3o.C. J/11 de rubro DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS e III.1o.C. J/29, de rubro DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

II. Afiliación respecto de la que el partido político denunciado no acreditó el consentimiento de los ciudadanos

a) Casos en los que no se aportó constancia de afiliación u otro documento idóneo para desvirtuar la conducta que se imputa.

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
1	Sergio Meza Salcedo Denunció al PVEM, por aparecer inscrito	Afiliado 04/11/2016 Registro cancelado 27/10/2020	Informó que fue afiliado el 04/11/2016 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020. No aportó documentación que acreditara la debida afiliación de la denunciante.

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
	indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.		
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>No existe controversia en el sentido de que la denunciante apareció registrado como militante del PVEM, pues ello fue referido por el denunciante, corroborado por la autoridad y aceptado por el partido político; toda vez que el citado ciudadano negó haber consentido ser afiliado a ese instituto político y el PVEM no aportó constancia alguna para acreditar la afiliación del denunciante, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.</p>			

- b) Supuestos en los que, las constancias aportadas por el partido político denunciante se tienen por insuficientes para desvirtuar la conducta que se imputa.**

N O	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
1	<p>Alejandro Santoyo Almanza</p> <p>Denunció al PVEM por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p> <p>Refirió que no firmó ni otorgó su credencial para ser afiliado y que fue notificado por el INE al intentar participar como CAE.</p>	<p>Afiliado 25/09/2019</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 25/09/2019 y que su registro fue cancelado el 25/11/2020.</p> <p>Aportó el original del formato CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma, en apartado posterior se realizará el análisis de dicho documento.</p> <p>En apartado posterior se realizará el análisis de dicho documento.</p>
<p style="text-align: center;">Observaciones</p> <p>Como se señaló previamente, el PVEM aportó original del formato denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, con la información de Alejandro Santoyo Almanza.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

N o	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>En dicha constancia, que —se reitera—, fue presentada, en respuesta al requerimiento de la autoridad tramitadora, en original, se asentó el nombre de la persona denunciante, así como una firma que —resulta válido suponer—, pertenece a Alejandro Santoyo Almanza.</p> <p>Ahora bien, se considera necesario destacar que, dicha constancia, lleva por fecha —en la parte superior, que podría inferirse se trata del día de su llenado— veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.</p> <p>Al respecto, si bien el denunciado aportó el original de la cédula de afiliación respectiva, lo cierto es que, en el caso, se considera que, la fecha que se asentó en el formato (veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve), en modo alguno puede dar cobertura a una afiliación registrada a partir del veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve; es decir, se considera que, una constancia como la que se exhibe, no puede, de manera posterior, justificar una conducta realizada previamente y, por tanto, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.</p>			
Conclusiones			
<p>En tal sentido, una vez que se han establecido previamente las razones por las cuales no puede tenerse por válida la constancia aportada por el PVEM, para acreditar que la afiliación de la denunciante se realizó con el consentimiento de ésta, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.</p>			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
2	<p>Marbella Altunar Rueda</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrita indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados; asentó que nunca se ha afiliado a dicho partido.</p>	<p>Afiliado 02/09/2019</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliada el 02/09/2019 y que su registro fue cancelado el 25/11/2020.</p> <p>Aportó el original del formato “CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma.</p> <p>En apartado posterior se realizará el análisis de dicho documento.</p>
Observaciones			
<p>Como se señaló previamente, el PVEM aportó el documento denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2019, con la información de Marbella Altunar Rueda.</p>			

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político
<p>Ahora bien, se considera necesario destacar que, dicha constancia, lleva por fecha —en la parte superior, que podría inferirse se trata del día de su llenado— dos de octubre de dos mil diecinueve.</p> <p>Al respecto, si bien el denunciado aportó el original de la cédula de afiliación respectiva, lo cierto es que, en el caso, se considera que, la fecha que se asentó en el formato (dos de octubre de dos mil diecinueve), en modo alguno puede dar cobertura a una afiliación registrada a partir del dos de septiembre de dos mil diecinueve; es decir, se considera que, una constancia como la que se exhibe, no puede, de manera posterior, justificar una conducta realizada previamente y, por tanto, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida.</p>			
<p style="text-align: center;">Conclusiones</p> <p>La incorporación de Marbella Altunar Rueda <i>al PVEM</i> es un hecho no controvertido, a partir del reconocimiento que de ello hace el propio denunciado, además de que así lo corroboró la autoridad competente; por tanto, ante la negativa de la denunciante de haber consentido la afiliación, corresponde al partido acreditar haber actuado con apego a la norma.</p> <p>En tal sentido, una vez que se han establecido previamente las razones por las cuales no puede tenerse por válida la constancia aportada por el <i>PVEM</i> para acreditar que la afiliación de la denunciante se realizó con el consentimiento de ésta, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida</p>			

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
3	<p>Marcelino Carmona García</p> <p>Denunció al PVEM, por aparecer inscrito indebidamente y sin su consentimiento en el padrón de afiliados.</p>	<p>Afiliado 10/10/2010</p> <p>Registro cancelado 25/11/2020</p>	<p>Informó que fue afiliado el 10/10/2010 y que su registro fue cancelado el 25/10/2020.</p> <p>Aportó el original del formato denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN</p>	<p>El quejoso manifestó:</p> <p>En respuesta a la vista que se le dio con la cédula:¹⁴⁰</p> <p>“... De un formato de afiliación con folio n.- 27966 de fecha 10 de octubre de 2016., En la que hacen constar mi firma, la cual no es de mi puño y letra, asimismo mi escolaridad no es de secundaria sino de licenciatura por lo que esto es falso y desde este momento exijo sea dado de baja de su Padrón de militantes, así también que se le sancione por daño moral a mi persona.</p>

¹⁴⁰ Visible a página 360.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
	Refirió que desconocía la afiliación hasta que el INE le notificó de ello.		2016-2017 GUERRERO, en el que aparece, además de los datos de la persona denunciante, una firma. La fecha de llenado del referido formato es del diez de octubre de dos mil dieciséis.	..."
<p style="text-align: center;">Observaciones</p> <p>Como se señaló previamente, el PVEM aportó el documento denominado CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN DE AFILIACIÓN 2016-2017, con la información de Marcelino Carmona García.</p> <p>Ahora bien, se considera necesario destacar que, dicha constancia, lleva por fecha —en la parte superior, que podría inferirse se trata del día de su llenado— diez de octubre de dos mil dieciséis.</p> <p>Al respecto, se considera necesario señalar que, si bien la fecha de afiliación —diez de octubre de dos mil diez—, coincide con la que, al respecto, informó el PVEM (y corroboró la DEPPP), lo cierto es que, la constancia, fechada en dos mil dieciséis como ya se ha establecido, no puede tenerse por válida para acreditar una afiliación de fecha tan remota.</p> <p>Esto es, en tratándose de una afiliación de dos mil diez, lo conducente era que el partido político aportara una cédula de esa temporalidad, o bien, una que correspondiera a dos mil diecinueve —esto último, en cumplimiento al Acuerdo aprobado en ese año, que tuvo como propósito la depuración de los padrones de afiliados de los partidos políticos— o, en su defecto, que justificara las razones a partir de las cuales esta autoridad debería tener por válida una constancia de fecha diferente; y toda vez que, el partido político denunciado no cumplió ninguno de los supuestos antes establecidos, lo procedente es determinar que, la constancia aportada por el PVEM, en busca de acreditar que la afiliación de Marcelino Carmona García contó con el consentimiento de dicha persona, no resulta suficiente para ello, con independencia de la ineficacia de las manifestaciones del quejoso respecto de dicho documento.</p>				
Conclusiones				

No	Persona denunciante/ Dicho del escrito de queja	Información proporcionada por la DEPPP	Manifestaciones del partido político	Manifestaciones de la persona denunciante en las diversas etapas procesales.
En tal sentido, una vez que se han establecido previamente las razones por las cuales no puede tenerse por válida la constancia aportada por el PVEM, para acreditar que la afiliación de la denunciante se realizó con el consentimiento de ésta, es de concluirse que se trata de una afiliación indebida				

Las constancias aportadas por la *DEPPP*, al ser documentos generados por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones se consideran pruebas documentales públicas, de conformidad con el artículo 22, párrafo 1, del *Reglamento de Quejas*, mismas que, conforme a lo previsto en los artículos 462, párrafo 2 de la *LGIPE* y 27, párrafo 2 del Reglamento citado tienen valor probatorio pleno, ya que no se encuentran controvertidas ni desvirtuadas respecto de su autenticidad o contenido.

Por otra parte, las documentales allegadas al expediente por el partido político denunciado, constituyen documentales privadas, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, numeral 1, fracción II del *Reglamento Quejas* y, por tanto, por sí mismas carecen de valor probatorio pleno; sin embargo, podrán generar plena convicción en esta autoridad, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio; ello, al tenor de los artículos 462, párrafo 3 de la *LGIPE*, y 27, párrafo 3, del Reglamento en mención.

5. CASO CONCRETO

Previo al análisis detallado de las infracciones aducidas por las denunciantes, es preciso subrayar que de lo previsto en el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE*, es posible advertir los elementos que se deben actualizar para que la autoridad electoral esté en posibilidad de imponer alguna sanción en materia electoral.

En primer lugar, se debe acreditar la existencia de alguna infracción, esto es, que objetivamente esté demostrada mediante pruebas una situación antijurídica electoral.

Posteriormente, verificar que esa situación antijurídica sea imputable a algún sujeto de Derecho en específico; es decir, partido político, candidato o, inclusive, cualquier

persona física o moral; dicho de otra forma, la atribuibilidad de la conducta objetiva a un sujeto en particular.

De esta forma, para la configuración de una infracción administrativa electoral se requiere de la actualización de dos elementos esenciales, por una parte, el hecho ilícito (elemento objetivo) y, por otra, su imputación o atribución directa o indirecta (elemento subjetivo), lo cual puede dar lugar a responsabilidad directa o incumplimiento al deber de cuidado.

A partir de la actualización de estos dos elementos esenciales, la autoridad electoral, podrá imponer alguna sanción, para lo cual deberá valorar las circunstancias que rodearon la comisión de la conducta.

En tal sentido, por cuanto hace a la existencia del supuesto normativo, debe reiterarse, como se estableció en apartados previos, que desde hace décadas está reconocido en la legislación de este país, la libertad de las y los ciudadanos de afiliarse, permanecer afiliados, desafiliarse de un partido político, o bien, no pertenecer a ninguno, y de igual manera, que las personas en este país tienen el derecho de que se proteja su información privada y sus datos personales, todo lo cual está previsto desde el nivel constitucional.

En el caso, si bien en el marco normativo se hace referencia a los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, identificados con el número de Resolución CG617/2012 y, de igual manera se transcribe la parte de disposiciones estatutarias del partido político denunciado, relacionada con el procedimiento de afiliación, lo cierto es que, por el carácter constitucional de tales derechos, la existencia de los mismos —y las obligaciones correlativas a éstos—, no está condicionada al reconocimiento por parte de los sujetos obligados, en este caso, de los partidos políticos.

En otras palabras, si la libertad de afiliación política, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos de este país desde hace varios decenios, resulta por demás evidente que las obligaciones de los partidos políticos que deriven de esta garantía —respetar la libertad de afiliación o, en su caso, la decisión de no pertenecer más a un partido, así como acreditar fehacientemente el consentimiento de la persona para cualquier caso— no debe estar sujeta o condicionada a que éstos establezcan en sus normas internas disposiciones encaminadas a su protección, es decir, esta carga que se les impone no depende del momento en el

que los partidos políticos hayan incluido en sus normas internas la obligación de que la afiliación sea voluntaria.

Por cuanto hace al elemento subjetivo señalado líneas arriba, debe destacarse que, la autoridad, para estar en aptitud de conocer la verdad de los hechos y su atribución a las personas involucradas en un procedimiento sancionador, debe contar con elementos suficientes que generen convicción para arribar a tal conclusión, y, de ser el caso, determinar responsabilidad y la sanción respectiva.

Para ello, la autoridad, analizará y ponderará el caudal probatorio que obre en el expediente, del cual es posible obtener indicios, entendidos como el conocimiento de un hecho desconocido a partir de uno conocido, o bien, prueba plena para el descubrimiento de la verdad.

En principio, corresponde a la parte promovente demostrar con pruebas suficientes la comisión de la conducta ilícita, así como el señalamiento que formula en contra del denunciado (atribuibilidad), es decir, la carga de la prueba corresponde a la parte quejosa.

Lo anterior, es acorde al principio general del Derecho "el que afirma está obligado a probar", recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de aplicación supletoria al presente caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 441 de la *LGIPE*.

En tanto que, al que niega, se le releva de esa carga, salvo cuando su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho; supuesto en el que estará obligado también a demostrarlo en el procedimiento.

Así, esta autoridad electoral considera, en consonancia con lo resuelto por la Sala Superior, en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizado previamente, que la carga de la prueba corresponde al partido político que afirma que contaba con el consentimiento de las quejas para afiliarlos a su partido político, y no a éstos que negaron haber solicitado su inclusión en el padrón de militantes de dicho instituto político.

Así, como vimos, en el apartado *ACREDITACIÓN DE HECHOS*, está demostrado a partir de la información proporcionada por la *DEPPP* que las personas denunciadas, se encontraron como afiliadas del *PVEM*.

Por otra parte, en algunos casos, el citado denunciado no demuestra con medios de prueba idóneos, que la afiliación respectiva sea el resultado de la manifestación de voluntad libre e individual de las quejas, en los cuales, ellas mismas, *motu proprio*, expresaron su consentimiento y, por ende, proporcionaron sus datos personales a fin de llevar a cabo la afiliación a dicho instituto político —con excepción de los supuestos que más adelante se detallarán—.

Debiendo precisar que la carga de la prueba corresponde al *PVEM*, en tanto que el dicho de las denunciantes consiste en afirmar que no dieron su consentimiento para ser afiliadas, es decir, se trata de un hecho negativo, que en principio no es objeto de prueba.

En tanto que los partidos políticos, cuya defensa consiste básicamente en afirmar que sí cumplieron las normas que tutelan el derecho fundamental de afiliación, tienen el deber de probar mediante los medios idóneos esa situación.

Ahora bien, tal y como quedó de manifiesto en el apartado del *MARCO NORMATIVO* de la presente resolución, así como en el correspondiente a *CARGA Y ESTÁNDAR PROBATORIO SOBRE INDEBIDA AFILIACIÓN A UN PARTIDO POLÍTICO*, **la libertad de afiliación en materia político-electoral, es un derecho reconocido y así garantizado para toda la ciudadanía de nuestro país**, al menos desde hace varias décadas, tanto a nivel constitucional como legal, **el cual es concebido como la potestad que se tiene de afiliarse a un partido político, permanecer afiliado a éste, desafiliarse e, incluso, no pertenecer a ninguno**. Asimismo, es incuestionable que el derecho a la protección de datos personales e información relacionada con la vida privada de las personas, es igualmente un derecho con una trayectoria de protección por demás lejana.

En este sentido, es pertinente reiterar que la garantía y protección a los citados derechos, evidentemente no deriva de disposiciones reglamentarias al interior de los institutos políticos, que prevean como obligación del partido político la conservación de los expedientes de afiliación de cada miembro, ni tampoco a partir de la emisión de los *Lineamientos para la verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos Nacionales para la conservación de su Registro*, emitidos por el propio *INE* en la resolución CG617/2012, sino que, como se vio, el derecho tutelado deviene de disposiciones de rango supremo, el cual debe ser tutelado en todo momento, y no a partir de normas internas o reglamentarias que así lo establezcan.

En este orden de ideas, se debe concluir que si la libre afiliación a los partidos políticos, en todas sus vertientes, es un derecho de las y los ciudadanos previsto

como garantía constitucional en nuestro país, también lo es la obligación de los partidos políticos de preservar, y en su caso, de demostrar, en todo momento, que cualquier acto que engendre la voluntad de una persona para formar parte en las filas de un instituto político, o bien, ya no pertenecer a estos, deben estar amparados en el o los documentos que demuestren indefectiblemente el acto previo del consentimiento —para los casos en que se aduce no mediar consentimiento previo para ser afiliados o afiliadas— siendo **ineficaz cualquier alegato en el sentido de que no se tiene o tenía el deber de presentar las pruebas que justifiquen su dicho, sobre la base de que no tenía obligación legal de archivar o conservar las documentales correspondientes.**

Precisado lo anterior, se procede al análisis de las veinte denuncias respecto de las que se emite pronunciamiento de fondo en la presente determinación.

Apartado A. Personas de quienes el PVEM no conculcó su derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —indebida afiliación—

A partir de los elementos analizados en el apartado anterior, esta autoridad considera que, la **indebida afiliación que se imputa al PVEM en el presente procedimiento, no se acredita, respecto de dieciséis personas**, como se expondrá en los párrafos subsecuentes.

En principio, debe establecerse que, por cuanto hace a **once personas**, el partido político denunciado aportó elementos de prueba —cédulas de afiliación—, que se tuvieron por válidas y de las cuales, las personas denunciantes no formularon objeción alguna; las denuncias que se encuentran en tal supuesto, corresponden a las siguientes personas:

No	Persona denunciante
1	Mario Mauricio Ramírez Arellano
2	Rocío Espinosa Aquino
3	David Cruz Antonio Domínguez Aguilar
4	Samuel Alejandro Hernández Hernández
5	María Ana Ela Basurto Sánchez
6	Manuel Guzmán Gómez
7	Lucía Guzmán Gómez
8	Alonso Guzmán López
9	Oscar Alejandro Torres Vázquez
10	Herman Aguilar Andapia
11	María de la Luz Suárez Ávila

Por otra parte, respecto de **cinco personas** más, se asentó también en el apartado de análisis probatorio que, de las mismas el *PVEM* aportó cédulas de afiliación a las que se consideró válidas y que, si bien los quejosos realizaron manifestaciones al respecto, no se considera que se trate de objeciones que cumplan los extremos de la norma reglamentaria correspondiente.

Las personas denunciantes que se ubican en este caso, son:

No	Persona denunciante
1	Martha Flores Ramírez
2	Luz Andrea Alva Rodríguez
3	Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín
4	Claudia Lorena Pérez Mirón
5	Olivia Chino Dorantes

A partir de los razonamientos establecidos en el apartado previo, esta autoridad considera que la afiliación de **las personas antes precisadas**, conforme a las pruebas que obran en autos, en específico la información proporcionada por la *DEPPP*, así como por lo manifestado por el *PVEM* y las documentales que éste aportó, fueron apegadas a derecho.

Así las cosas, para sostener la legalidad de las afiliaciones cuestionadas el *PVEM*, en todos los casos que aquí se analizan, ofreció como medio de prueba para sustentar la debida afiliación de las y los ciudadanos, **los originales de los respectivos formatos únicos de afiliación y refrendo**, acompañados con copia de la credencial para votar de estos, medios de convicción que esta autoridad electoral, al valorarlos tanto en lo individual como en su conjunto con el caudal probatorio restante, estima suficientes, idóneos y pertinentes para acreditar la licitud de las afiliaciones controvertidas.

No es obstáculo a lo anterior, el hecho que se trata de documentales privadas que *per se* no tienen una eficacia demostrativa plena, pues apreciadas en su contexto y concatenadas con el caudal probatorio que obra en autos, de conformidad con los principios de la lógica y la sana crítica, así como las máximas de la experiencia, permiten a esta autoridad electoral concluir la licitud de las afiliaciones discutidas, ya que fueron el resultado de la manifestación libre y voluntaria de las y los quejosos, la cual, como ya se dijo, quedó constatada con la firma autógrafa que los mismos imprimieron en dichos formatos.

De este modo, esta autoridad resolutora engarzó una cadena de indicios a partir de diversos hechos que se tuvieron como demostrados, en la especie: i) las

manifestaciones de las partes y la *DEPPP* respecto a la existencia de las afiliaciones; ii) las documentales privadas, consistentes en los originales de los formatos únicos de afiliación y refrendo de las personas antes precisadas, en cuyo contenido aparece la manifestación de la voluntad de las y los quejosos (firma autógrafa) y; iii) la falta de objeción o falta de objeción eficaz de esos formatos.

En este tenor, con la finalidad de respetar el principio de contradicción y el derecho de audiencia de las personas denunciantes, la autoridad instructora, en cumplimiento a lo establecido en el *Manual*, dio vista a éstas a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación con las respectivas cédulas de afiliación que, para cada caso, aportó el *PVEM*, conforme a lo siguiente:

*Mediante Acuerdo identificado con la clave **INE/CG189/2020**, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el **Manual de Contratación de las y los Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales, para el Proceso Electoral 2020-2021**, que en su **Anexo 5** denominado **Procedimiento para la Compulsa de la credencial de elector**, señala, en lo conducente lo siguiente:*

En caso de que las diligencias de investigación se desprendan que el partido político correspondiente aportó documentos que acrediten la afiliación, la UTCE avisará a la o el aspirante afectado para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga en un plazo de 3 días.

*Por lo anterior, y toda vez que el Partido Revolucionario Institucional proporcionó documentación relacionada con la afiliación de las siguientes personas denunciantes, se ordena dar vista a éstas, con copia simple de los respectivos documentos, a efecto de que, dentro del plazo improrrogable de **tres días hábiles**, contados a partir del día hábil siguiente al de la legal notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho corresponda respecto de los citados documentos.*

[Se insertan nombres]

Al respecto, es menester precisar que las manifestaciones u objeciones que, en su caso, formule respecto de la información con la cual se les corre traslado, deberá sujetarse a las reglas establecidas en el artículo 24, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, el cual, para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

Artículo 24 *[Se transcribe]*

Tales diligencias fueron desahogadas como ya ha quedado reseñado con antelación.

Sin que sea óbice señalar que, en la etapa de alegatos, el expediente citado al rubro se puso a disposición de las partes denunciantes, en cuyas constancias se encuentran los documentos base del partido político; lo anterior, a fin de que, en dicha etapa procesal, manifestaran lo que a su derecho conviniera.

De manera particular, por cuanto hace a Mario Mauricio Ramírez Arellano, Rocío Espinosa Aquino, David Cruz Antonio Domínguez Aguilar, Samuel Alejandro Hernández Hernández, María Ana Ela Basurto Sánchez, Manuel Guzmán Gómez, Lucía Guzmán Gómez, Alonso Guzmán López, Oscar Alejandro Torres Vázquez, Herman Aguilar Andapia y María de la Luz Suárez Ávila, debe reiterarse que, tales personas fueron omisas en responder tanto a la vista que les fue formulada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, en la que se les corrió traslado con el formato de afiliación, así como para formular alegatos; por lo que hicieron nulo su derecho de realizar las manifestaciones que estimaran pertinentes y, en su caso, de desvirtuar el medio de prueba exhibido.

En efecto, de lo antes referido es posible advertir de las constancias de autos que, aun cuando las personas denunciantes tuvieron las oportunidades procesales de objetar la autenticidad y contenido de la respectiva cédula de afiliación, se abstuvieron de cuestionarlas, pues no se apersonaron al procedimiento a formular manifestación alguna en ese sentido, de lo que se puede colegir que existe un reconocimiento tácito de éstas de haber suscrito y firmado ese documento, lo que de suyo permite colegir que existió su voluntad para ser afiliadas al partido denunciado.

En este sentido, se debe precisar que el derecho de contradicción probatoria no es más que la posibilidad de las partes de defenderse, de refutar y oponerse a las afirmaciones realizadas por la parte contraria, y de ser el caso, de aportar elementos que le permitan desvirtuar lo dicho en su contra.

No obstante, la oportunidad procesal que tuvieron las partes promoventes de refutar el documento que, para cada caso, aportó el *PVEM* para acreditar que sí medió la voluntad libre y expresa de éstas que querer pertenecer a las filas de militantes de dicho ente político, lo cierto es que las mismas no hicieron valer ese derecho de contradicción dentro del procedimiento.

Por tanto, no existe evidencia objetiva que haga suponer que la afiliación de estas personas, haya sido producto de una acción ilegal por parte del *PVEM*, pues como se refirió, el formato original de afiliación aportado por el denunciado, no fue controvertido u objetado de manera frontal y directa por parte de las personas denunciantes, no obstante que estuvieron en la aptitud y garantía procesal de haberlo hecho.

Así las cosas, este órgano considera que el partido político sí cumplió con la carga probatoria que le correspondía a su afirmación, en el sentido de que las afiliaciones

cuestionadas estuvieron precedidas del consentimiento de las personas quejosas; es decir, acreditó con los medios de prueba idóneos, necesarios y suficientes, que sí existió la voluntad de las partes denunciantes de incorporarse como militantes de ese partido político y, que para ello, suscribieron y firmaron, en cada caso, el respectivo formato de afiliación que, a la postre, aportó el *PVEM*, por lo que, es válido colegir que dicho denunciado sí realizó la afiliación de las personas promoventes de conformidad con sus procedimientos internos.

Mientras que, **Martha Flores Ramírez, Luz Andrea Alva Rodríguez, Ma, de la Luz Rodríguez Osteguín, Claudia Lorena Pérez Mirón y Olivia Chino Dorantes**, si bien expresaron oposición a los documentos aportados por el partido político denunciado, al referir, entre otras cuestiones, desconocer el formato de afiliación, negar haber firmado la cédula de afiliación y/o haber entregado la credencial para votar como sustento de tal acción; del mismo modo, los quejosos realizan manifestaciones acerca del contexto fáctico de las conductas denunciadas (que desconocían la afiliación, que nunca elaboraron la cédula con la que se les corrió traslado, que la firma estampada no es de ellos, que los datos asentados en la misma no coinciden con su persona), pero sin que se advierta una controversia frontal y contundente del medio de prueba, más allá de la negativa misma.

Por tanto, como se abundó en el apartado en que se reseñaron y analizaron los elementos de prueba, debe precisarse que tales declaraciones se realizan de forma lisa y llana, es decir, no establecieron las razones concretas que, en su caso, apoyaran sus respectivas objeciones, ni tampoco aportaron los elementos idóneos para acreditar sus manifestaciones, lo anterior, con la finalidad de invalidar la fuerza probatoria de las pruebas aportadas por el denunciado, por lo que no se cumple con lo establecido en el artículo 24, párrafos 2 y 3, del *Reglamento de Quejas*.

Lo anterior se afirma así, pues no basta para esta autoridad la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones concretas en que se apoya la misma y aportar los elementos idóneos para acreditarlas.

En ese sentido, debe reiterarse, como se detalló en el apartado correspondiente, de manifestaciones como las que realizaron las personas denunciantes Olivia Chino Dorantes, que manifestó: *cotejando el formato de afiliación me di cuenta que la firma no es legítima y ha sido alterada para fines favorables a dicho partido; [...]* no puede desprenderse que se trate de una objeción que deba ser atendida en el presente procedimiento.

Del mismo modo, en el apartado probatorio se razonó que, si bien Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín, presentó escrito en el que precisó que en la fecha en que supuestamente se le dio de alta en el padrón de afiliados del *PVEM* ya no vivía en ese domicilio, lo cierto es que, no van más allá de la negativa de haber firmado la cédula de afiliación, del mismo modo, se precisó que la quejosa formuló manifestaciones acerca del contexto fáctico de la conducta denunciada pero sin que se advierta una controversia frontal y contundente del medio de prueba, más allá de la negativa misma.

Por lo anterior, es que debe establecerse que, si bien las personas denunciantes **Martha Flores Ramírez, Luz Andrea Alva Rodríguez, Claudia Lorena Pérez Mirón y Olivia Chino Dorantes**, presentaron escritos en los que pretenden formular objeción a las constancias aportadas por el partido político denunciado y, en el mismo sentido, debe precisarse que, de los mismos no se advierte que se establezca con claridad y contundencia la necesidad de que se lleve a cabo una prueba pericial en grafoscopia, a partir de la cual esta autoridad se allegue del elemento de certeza necesario para restar valor a la documental aportada por el partido político.

Por tanto, es de concluirse que, si las partes denunciantes antes identificadas, si bien dieron respuesta a la vista que se les dio con la constancia de afiliación que en cada caso aportó el partido político denunciado, lo cierto es que, a partir de lo señalado previamente, debe reiterarse que, lo asentado en los escritos de respuesta no es suficiente para desvirtuar el valor del documento aportado y, en consecuencia, su objeción no es susceptible de ser atendida por esta autoridad.

En efecto, no basta la simple objeción formal, sino que es necesario señalar las razones en que apoyan la misma y **aportar los elementos idóneos para acreditarlas**, para lo cual, no solo debieron indicar el aspecto que no reconocían, o el por qué no podía ser valorada positivamente por la autoridad, sino que debieron aportar los medios de prueba que estimaran conducentes, tendentes a acreditar que efectivamente las firmas contenidas en los formatos de afiliación exhibido por el *PVEM* no era la de ellos, como podría ser, algún documento en el que se hubiera estampado su rúbrica, la pericial en materia de grafoscopia o cualquier otra que consideraran oportuna, pero no lo hicieron.

Por tanto, en virtud de que sus respectivos alegatos se desarrollaron en torno a la que no el documento no era veraz, sin hacer mención al elemento que le da validez, en el caso, la firma autógrafa, la prueba idónea para refutar la misma lo era la pericial en materia de grafoscopia tal y como ha sido establecido en las Tesis de

Jurisprudencia I.3o.C. J/11¹⁴¹ de rubro **DOCUMENTOS PRIVADOS INSUFICIENTEMENTE OBJETADOS POR EL PROPIO FIRMANTE, VALOR PROBATORIO DE LOS** e III.1o.C. J/29,¹⁴² de rubro **DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).**

En síntesis, si las personas quejasas, como tal, no objetan la firma que obra en el documento respectivo, sino únicamente desconocen la afiliación o el consentimiento otorgado; se concluye que se tratan de argumentos genéricos y en ningún momento están encaminados a desvirtuar u objetar el alcance probatorio o el contenido de los formatos de afiliación respectivos.

De tal manera, debe concluirse que las partes denunciante, cuyo caso se analiza en este apartado, faltaron a la carga de la prueba, absteniéndose de aportar aquellas que soportaran su dicho, de modo que la sola objeción de los documentos bajo análisis, basada en la afirmación no demostrada de que su firma es distinta de la que calza la constancia de afiliación, es insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia **1a./J. 12/2012 (10a.)** de rubro y contenido siguientes:¹⁴³

OBJECCIÓN DE DOCUMENTOS PRIVADOS PROVENIENTES DE TERCEROS. LA NECESIDAD DE EXPRESAR EL O LOS MOTIVOS EN QUE SE SUSTENTA, DEPENDERÁ DE LA PRETENSIÓN DE QUIEN OBJETA (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).

Tratándose de la objeción de documentos provenientes de terceros, el artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no exige determinada formalidad para formular la oposición respectiva; sin embargo, se considera que, -atendiendo a la naturaleza de la prueba-, si lo que se pretende con la sola objeción de un documento privado proveniente de un tercero, es que no se produzca la presunción del reconocimiento tácito del documento por no haberlo objetado, bastará con que exprese su objeción de manera genérica a fin de que el juzgador tome en consideración este dato al momento de valorar la prueba, -ello con independencia del valor probatorio que se le otorgue, derivado del hecho de que se perfeccione o no la documental-. En cambio, si lo que se pretende con la objeción es controvertir, -entre otras causas-, la autenticidad de la firma o del contenido del documento, se estima que sí constituye un presupuesto necesario para tener por hecha la objeción, que se expresen las razones conducentes, dado que la objeción no es una cuestión de capricho, sino que se compone precisamente de los argumentos o motivos por los que el interesado se opone al

¹⁴¹ Tesis I.3o. C J/11, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Página 615.

¹⁴² Jurisprudencia III.1o.C. J/29, Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Página 680.

¹⁴³ Consultable en la liga electrónica
<http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2000608&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0>

documento respectivo. Dichas razones permiten que la parte oferente tenga la oportunidad de saber en qué sentido tiene que perfeccionar su documento, más aún cuando proviene de un tercero, ya que, de lo contrario, el cumplimiento de esa carga procesal estará al arbitrio de quien simplemente objeta un documento sin exponer ninguna razón. Además, tal información también resulta importante para que el juzgador, teniendo esos elementos, le otorgue el valor y alcance probatorio en su justa dimensión.

En consecuencia, toda vez que las manifestaciones de las promoventes no son suficientes para desacreditar las documentales exhibidas por el *PVEM*, en cuanto a su existencia, contenido, valor y alcance probatorio, se concluye que el denunciado sí acreditó con la prueba idónea, que la afiliación de las denunciantes se efectuó mediando la voluntad de éstas para afiliarse a sus filas y, por tanto, su incorporación al padrón de militantes del partido se hizo conforme a sus estatutos.

Bajo esta óptica, resulta claro que si las partes actoras sostuvieron la falsedad del *formato de afiliación* que respaldaba su incorporación a las filas del *PVEM*, asumieron una carga probatoria para demostrar ese aserto, no sólo por la carga genérica que asumen las partes de probar cualquier afirmación que realicen, sino porque la falsificación de un hecho jurídico, *lato sensu*, (en el caso el documento cuestionado) resulta un evento extraordinario que debe justificarse por quien lo afirma, ya que implica un estado de cosas anormal que genera una duda razonable sobre su realización, máxime, si se consideran las inferencias a las que arribó esta autoridad electoral a partir de la cadena de indicios y del material probatorio que obra en autos.

En tal virtud, si bien es cierto que realizaron las manifestaciones que estimaron idóneas para restar fuerza probatoria a la documental aportada por el denunciado, lo cierto es que faltaron a la carga de la prueba, al abstenerse de aportar elementos probatorios que restaran valor al documento bajo análisis, en específico la firma autógrafa, lo cual resulta insuficiente para derrotar la presunción de inocencia que surge de la documental en cuestión.

Lo anterior, ya que dicho elemento (firma autógrafa) constituye un signo expreso e inequívoco de la voluntad de la persona de accionar el sistema de impartición de justicia y vincula a su autor con el acto jurídico contenido en el documento, traduciéndose en un requisito esencial de validez que condiciona su procedencia, el cual, se reitera, no fue materia de objeción.

Por tanto, la conclusión a la que se llega es que, el *PVEM* sí acreditó con los medios de prueba idóneos, necesarios y suficientes, que sí existió la voluntad de las partes quejasas de incorporarse como militantes de ese partido político, y para ello

suscribieron y firmaron el formato de afiliación que, al efecto, aportó el partido; por tanto, el denunciado sí realizó la afiliación de estas de conformidad con sus procedimientos internos.

Por otra parte, no pasa inadvertido por esta autoridad que en los casos de **Olivia Chino Dorantes, Rocío Espinosa Aquino y Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín**, si bien la fecha que se registra en la cédula de afiliación aportada por el *PVEM* es anterior a la fecha de afiliación de dichas ciudadanas que fue informada por la *DEPPP*, lo cierto es que, por tratarse (tanto la fecha de afiliación y/o de la del “llenado” del formato, de una **temporalidad anterior** al registro de la afiliación que el partido político denunciado efectuó ante la *DEPPP* y, asimismo, por contar dicho documento con elementos de certeza, como son el que se incluya, además de una firma —que puede suponerse válidamente corresponden a las personas quejasas, en tanto no la contrvirtieron—, datos tales como la clave de elector, el domicilio, teléfono y correo electrónico de las personas denunciantes, permite colegir su validez y, por tanto, acredita la voluntad de las personas quejasas a pertenecer como militantes de dicho instituto político.

En efecto, aun en el caso que la afiliación de los quejosos hubiese sucedido en la fecha estampada en el formato (diez de octubre de dos mil dieciséis y ocho de agosto y trece de marzo, estas de dos mil diecinueve, respectivamente), lo cierto es que, a la fecha que informó la *DEPPP*, las personas quejasas ya habían manifestado su consentimiento para ser registradas como militantes del *PVEM*, de manera que la discrepancia en las fechas, en modo alguno anula su libre consentimiento para ser incorporados al padrón de militantes del denunciado, especialmente cuando el formato respectivo no fue objetado.

Las fechas antes referidas se detallan enseguida:

Persona denunciante	Fecha de afiliación, asentada en la cédula proporcionada por el PVEM	Fecha de afiliación informada por el PVEM y corroborada por la DEPPP
Olivia Chino Dorantes	10/10/2016	25/10/2016
Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín	13/03/2019	17/03/2019
Rocío Espinosa Aquino	08/08/2019	12/11/2019

De ahí que deba reiterarse la determinación ya anunciada, en el sentido de que, el formato aquí referido, resulta válido y suficiente para desvirtuar la imputación formulada por Olivia Chino Dorantes, Rocío Espinosa Aquino y Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín.

Por todo lo anterior, y a partir de los razonamientos establecidos en los apartados previos, esta autoridad considera que la afiliación de las **dieciséis personas denunciantes** al *PVEM* fue apegada a derecho, por lo que, puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable, resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normativa electoral que le fueron imputados.

Así, la cadena de indicios mencionada no resultó fragmentada por la omisión y manifestaciones de las referidas personas, ya que la carga probatoria derivada de su afirmación no fue soportada en medio de prueba alguno.

Pues como se ha manifestado, si el partido político cumplió con la carga probatoria que corresponde a su afirmación en el sentido de que la afiliación cuestionada estuvo precedida del consentimiento de las partes quejas, es decir, si exhibe prueba suficiente sobre la legitimidad de la afiliación motivo de denuncia, debe considerarse que prevalece el principio de presunción de inocencia, en su vertiente de estándar probatorio.

En conclusión, a partir de los razonamientos previamente establecidos, esta autoridad considera que las afiliaciones de dichas personas fueron apegadas a derecho, ya que, de lo expuesto puede afirmarse que la conducta realizada por el justiciable resulta atípica en relación con los injustos descritos en la normativa electoral que le fueron imputados.

Lo anterior es así, porque como fue antes razonado, la actualización del tipo administrativo en estudio tiene como elementos constitutivos: i) una incorporación al partido político que se traduce en el acto de afiliación formal y, ii) la falta de consentimiento libre del ciudadano para ser afiliado.

En este sentido para colmar la hipótesis normativa contenida en el artículo 3, párrafo 2 de la *LGPP* en relación con los diversos 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) del mismo ordenamiento legal y 443, párrafo 1, incisos a) y n) de la *LGIPE*, cuya infracción se imputó al denunciado, resultaba necesario que concurriera la acreditación de los dos elementos referidos, lo que no sucedió en el particular.

Es decir, en el caso debió demostrarse fehacientemente no solamente la afiliación de estas personas al *PVEM*, sino también la ausencia de voluntad de las mismas para ser afiliadas, en razón de que el núcleo del tipo administrativo en estudio lo constituye la libertad de asociación, de ahí que si en la especie solamente se justificó la afiliación de las partes denunciantes sin evidenciar la ausencia de

voluntad de las mismas en esos actos, entonces, es inconcuso que no se colmó el tipo administrativo sujeto a escrutinio.

De igual manera, por las razones expuestas con antelación, tampoco se actualizó la hipótesis descrita en el numeral 29 de la *LGPP*, ya que al concluirse que las personas quejasas se afiliaron libremente al partido justiciable, por mayoría de razón debe afirmarse que el *PVEM* no utilizó indebidamente la información y datos personales de los impetrantes, porque estos, en su oportunidad, consintieron afiliarse al partido político, para lo cual, conforme al marco normativo descrito en la presente resolución, era menester proporcionar al partido político esa información y los documentos atinentes.

En suma, al no acreditarse uno de los extremos en que se finca el procedimiento sancionador, específicamente la falta de voluntad de afiliarse al partido denunciado, se concluye la inexistencia del tipo administrativo, por lo que no procede imponer al *PVEM* sanción alguna.

Similar consideración estableció el *Consejo General*, entre otras, en las determinaciones INE/CG1673/2018 ya citada, e INE/CG1666/2021, dictada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, al resolver el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/ZMC/CM20/OPLE/MICH/153/2021.

Ante lo razonado en líneas precedentes, se debe concluir que el bien jurídico tutelado por las normas constitucionales y legales que protegen la libertad de las y los ciudadanos para afiliarse voluntariamente a un partido político, **no fue transgredido** por el *PVEM*, toda vez que acreditó con las documentales idóneas, que la afiliación de estas personas se efectuó mediando la voluntad de las mismas para afiliarse a sus filas y, por tanto, su incorporación al padrón de militantes del partido se hizo conforme a sus estatutos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **3/2019**, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes:

DERECHO DE AFILIACIÓN. LA OBLIGACIÓN DE PROBAR LA MILITANCIA CORRESPONDE AL PARTIDO POLÍTICO.- De conformidad con los artículos 461 de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación con el diverso 441 de ese ordenamiento y 15, segundo párrafo, de la *Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral*, en principio, las partes involucradas en una controversia tienen las cargas procesales de argumentar y presentar los medios de convicción idóneos que resulten necesarios para su adecuada defensa. Sin embargo, si una persona denuncia que fue afiliado a un partido sin su consentimiento, corresponde a los partidos políticos la

carga de probar que ese individuo expresó su voluntad de afiliarse, debiendo exhibir la constancia de inscripción respectiva, esto es, el documento donde se asienta la expresión manifiesta del ciudadano de pertenecer al partido político. Lo anterior, porque quien presenta la denuncia no está obligado a probar un hecho negativo (la ausencia de la voluntad) o la inexistencia de la documental, pues en términos de carga de la prueba no sería objeto de demostración y, en cambio, los partidos políticos tienen el deber de conservar la documentación relativa a las constancias de afiliación de su militancia, teniendo en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido político.

Es por ello que, **se tiene por no acreditada la infracción** en el procedimiento sancionador ordinario, consistente en la supuesta violación al derecho político de libre afiliación de **las dieciséis personas denunciantes**, cuyo caso se analizó en el presente apartado, por los argumentos antes expuestos.

Ahora bien, más allá de que se tiene por no acreditada la infracción imputada al *PVEM*, es importante precisar que las personas quejasas, en su oportunidad, fueron dadas de baja del padrón de afiliados de partido político denunciado, como se advierte de lo manifestado por el propio instituto político, de lo señalado por la *DEPPP* y del acta circunstanciada levantada por la autoridad instructora.

Apartado B. Personas de quienes el *PVEM* conculcó su derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —indebida afiliación—

Ahora bien, como ha quedado precisado el *PVEM* reconoció la afiliación de **Sergio Meza Salcedo, Marbella Altunar Rueda, Alejandro Santoyo Almanza y Marcelino Carmona García**, situación que fue corroborada por la *DEPPP*, quien, además, proporcionó la fecha en que estas personas fueron afiliadas al partido:

a) Caso en el que no se aportó elemento de prueba alguno:

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación
1	Sergio Meza Salcedo	04/11/2016

Respecto de este caso, el *PVEM* no aportó la cédula correspondiente, a fin de acreditar ante esta autoridad que el registro de la mismas aconteció de forma libre, individual, voluntaria, personal y pacífica y que además para llevar a cabo ese trámite se cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normativa interna.

Por lo que este órgano colegiado considera que se tiene por acreditada la infracción en el presente procedimiento, pues se concluye que el partido denunciado infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación de **una persona denunciante**, ya que no demostró la libre afiliación de ésta.

En este sentido, se debe considerar que el medio de prueba esencial para acreditar la debida afiliación de las y los ciudadanos es el formato de afiliación —original— o, en su caso, cualquier otra documentación establecida en la normativa del *PVEM* en materia de afiliación, en la que constara el deseo de estos de afiliarse a ese partido político, al estar impresa de su puño y letra, el nombre, firma autógrafa, domicilio y datos de identificación, además de que dicha exhibición debe ser realizada dentro de los plazos legales para que a la misma se le pueda dar el valor probatorio respectivo; no obstante, tales circunstancias no acontecieron.

Lo anterior, considerando el hecho de que los partidos políticos son entidades de interés público que sirven de vehículo para el acceso de la ciudadanía al poder y espacio para el ejercicio del derecho humano de afiliación en materia política-electoral, lo que los obliga a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de ese derecho fundamental, para lo cual deben verificar y revisar, en todo momento, que las afiliaciones que realizan, deben ser de manera libre, voluntaria y personal y, como consecuencia de ello, **conservar y resguardar** y, en su caso, **exhibir** la documentación en donde conste esa situación, a fin de estar en condiciones de probar ese hecho.

En este sentido, se encuentran compelidos a acreditar con las pruebas idóneas y correctas que las afiliaciones se realizaron conforme a las disposiciones legales y estatutarias, pues precisamente corresponde al oferente y más, tratándose de una institución política, acompañarla con los elementos suficientes para su perfeccionamiento y consiguiente valor legal.

En consecuencia, toda vez que el *PVEM* **no exhibió** la documentación soporte en la que constara la afiliación libre y voluntaria de Sergio Meza Salcedo, es válido concluir que no demostró que la afiliación de dicha persona, se realizó a través del procedimiento que prevé su normativa interna, ni mediante algún otro procedimiento distinto en el que se hiciera constar que la parte denunciante haya dado su consentimiento para ser afiliada.

En mérito de todo lo anterior, existe evidencia que hace suponer que la afiliación a la que se refiere en este apartado, fue producto de una acción ilegal por parte del *PVEM*.

b) Casos en los que, los elementos de prueba aportados se tuvieron por insuficientes:

Tal y como se asentó previamente, por cuanto hace al caso de los ciudadanos **Marbella Altunar Rueda, Alejandro Santoyo Almanza y Marcelino Carmona García**, esta autoridad estima que se conculcó su derecho de libre afiliación política e intrínsecamente, el uso indebido de sus datos personales.

Lo anterior se considera así, ya que, como se dijo, el *PVEM* reconoció su afiliación, lo cual, además, fue corroborado por la *DEPPP*, a través del desahogo del requerimiento de información que previamente le fue formulado por la *UTCE*; aunado a ello, destaca que la citada Dirección Ejecutiva proporcionó la fecha en que las personas denunciantes citadas fueron afiliadas al partido denunciado, la cual es coincidente con la que informó el denunciado a requerimiento expreso de la autoridad tramitadora:

No.	Persona denunciante	Fecha de afiliación
1	Marbella Altunar Rueda	02/09/2019
2	Marcelino Carmona García	10/10/2010
3	Alejandro Santoyo Almanza	25/09/2019

Esto resulta relevante para la conclusión a que se arriba en este apartado, si se toma en consideración que la información con la que cuenta la *DEPPP* es alimentada por los propios partidos políticos, en el caso el *PVEM*, a través del *Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos*; por tanto, es válido concluir que, en atención a lo antes señalado, los resultados obtenidos por lo que hace a esta persona, es consecuencia de la información capturada por el partido político denunciado.

En este sentido, la información proporcionada por la *DEPPP*, constituye una prueba documental pública, toda vez que fue expedida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, la cual da cuenta sobre el registro de afiliación de la denunciante, razón por la cual se tiene certeza de la afiliación de ésta al instituto político denunciado.

Ahora bien, corresponde señalar que si bien, en el caso, el partido político denunciado exhibió **el original de la cédula de afiliación** de las personas quejasas, a fin de intentar acreditar que el registro de éstas aconteció de forma libre, individual,

voluntaria, personal y pacífica, y que además para llevar a cabo ese trámite cumplió con los requisitos establecidos para tal efecto en su normativa interna.

No obstante, lo cierto es que **existe discordancia entre la fecha de afiliación informada, tanto por la DEPPP como por el propio PVEM y, la reflejada en la cédula aportada por dicho ente político**, como lo observamos en la tabla siguiente:

Persona denunciante	Fecha de afiliación registrada	Fecha de afiliación contenida en la cédula
Marbella Altunar Rueda	02/09/2019	02/10/2019
Marcelino Carmona García	10/10/2010	10/10/2016
Alejandro Santoyo Almanza	25/09/2019	26/09/2019

Como se evidencia, las cédulas de afiliación fueron requisitadas en fecha posterior a aquella en la que se les dio de alta como militantes del *PVEM*; respecto de Alejandro Santoyo Almanza, se tiene que, la diferencia es de un día; de Marbella Altunar Rueda, la diferencia es de un mes, y en el caso de Marcelino Carmona García, de seis años.

Al efecto, se considera necesario señalar que, dichas constancias, en modo alguno pueden tenerse por válidas para acreditar que la incorporación a dicho instituto político, de las personas denunciadas identificadas previamente, se llevó a cabo de conformidad con la normativa aplicable.

Es decir, una constancia en la que se asienta que se obtuvo el consentimiento de una persona para incorporarle como militante de un partido político, podría dar soporte a una afiliación que se registra en esa fecha, o en una *razonablemente* posterior —teniendo en cuenta el tiempo que puede tomar al partido político el acopio de dicho documento y su incorporación a los sistemas de captura—, pero, salvo las excepciones en las que se acredita que se trata del refrendo de una afiliación realizada previamente, no puede una cédula como las que aquí se analizan, dar validez, de manera posterior, a un acto que se tuvo por realizado en fecha previa.

Es decir, sería contrario a toda lógica jurídica, tener por válida la evidencia de que la persona afiliada otorgó su consentimiento, cuando la misma fue recabada después de surgida la obligación: la fecha de afiliación debe corresponder a la que

el partido político informó a la autoridad competente [DEPPP], en su momento, o a una razonablemente anterior, pero no puede aceptarse de fecha posterior.

En consecuencia, se concluye que, las cédulas de afiliación exhibidas por el PVEM con la intención de acreditar la legalidad de la afiliación de Marbella Altunar Rueda, Marcelino Carmona García y Alejandro Santoyo Almanza, no es el documento fuente del cual emana el registro de las quejas como militantes de dicho partido.

Semejantes razonamientos sostuvieron las determinaciones emitidas por este Consejo General en las resoluciones INE/CG469/2020 de siete de octubre de dos mil veinte, al resolver el procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/FJLG/JD08/VER/148/2018 e INE/CG479/2021, de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, expediente UT/SCG/Q/DITR/JD04/COAH/84/2020.

Por tanto, a consideración de este órgano resolutor, los documentos exhibidos por el partido político denunciado, no son válidos para acreditar las legales afiliaciones de **Marbella Altunar Rueda, Alejandro Santoyo Almanza y Marcelino Carmona García**, toda vez que existe presunción fundada de que fueron creadas con fecha posterior, para atender lo requerido por la autoridad instructora, sin tener coherencia respecto de la fecha de los hechos acreditados, como lo es la de afiliación registrada por el propio partido político denunciado en el Sistema para la Verificación del Padrón de Afiliados del INE.

En conclusión, este órgano colegiado considera que **se tiene por acreditada la infracción denunciada** atribuida al PVEM en el presente procedimiento, pues se concluye que dicho denunciado infringió las disposiciones electorales tendentes a demostrar la libre afiliación, en su modalidad positiva —afiliación indebida—, de las **dos personas quejas** antes precisadas, quienes aparecieron como afiliadas a dicho instituto político, por no demostrar el **ACTO VOLITIVO** de éstos para ser incorporadas a ese partido.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia **3/2019**, ya referida con antelación.

En efecto, como se demostró anteriormente, las personas denunciantes que aparecieron afiliadas al PVEM, manifestaron que en momento alguno otorgaron su consentimiento para ello, siendo que dicho instituto político no demostró lo contrario, por lo que se actualiza la violación al derecho fundamental de libre afiliación garantizado desde la Constitución y la ley, según se expuso.

Así pues, el *PVEM* no demostró que la afiliación de las personas denunciantes se realizó mediando la voluntad de éstas, ni mucho menos que hayan permitido o entregado datos personales para ese fin, los cuales se estiman necesarios para procesar la afiliación, dado que estos elementos se constituyen como insumos obligados para, en su momento, llevar a cabo una afiliación, de ahí que esto sea necesario e inescindible.

Con base en ello, ante la negativa de las personas quejasas de haberse afiliado al *PVEM*, correspondía a dicho instituto político demostrar, a través de pruebas idóneas, que la afiliación se llevó a cabo a través de los mecanismos legales para ello, en donde constara fehacientemente la libre voluntad de las personas promoventes, lo que no hizo, siendo que el solo hecho de aparecer en su registro electrónico es insuficiente para acreditar el ejercicio libre, personal y voluntario del derecho de afiliación a dicho instituto político.

Es decir, no basta con que las partes actoras aparezcan como afiliadas al *PVEM* en sus registros electrónicos, sino que dicho instituto político debió demostrar, con documentación soporte o pruebas idóneas y dentro de los plazos legales, que dicha afiliación se realizó de forma libre o voluntaria, o bien, que la aparición del nombre y datos de los quejosos en su padrón de militantes, fue consecuencia de un error involuntario o de alguna circunstancia diversa, pero no lo hizo.

Esto último es relevante, porque, como se expuso, la afiliación al *PVEM* implica, además de un acto volitivo y personal, la exhibición o presentación voluntaria de documentos en los que se incluyen datos personales, siendo que, en el caso, no se demostró el consentimiento para el uso de ese tipo de información personal que pudiera haber servido de base o justificación al partido político para afiliar a los ahora quejosos.

Entonces, podemos afirmar que el presunto uso indebido de datos personales, tiene íntima vinculación con la indebida afiliación de las **cuatro personas quejasas**, lo cual ya quedó debidamente acreditado y, como consecuencia de ello, merece la imposición de las sanciones que se determinarán en el apartado correspondiente.

Por tanto, al abstenerse de acreditar el consentimiento de las personas inconformes para mantener, solicitar y/o adquirir la militancia a dicho ente político, impide contar con certeza respecto a que la militancia fue voluntaria, máxime si se concatena dicha abstención con lo expresado por éstos al desconocer su registro o incorporación al propio partido político.

Esto es así, porque el bien jurídico que se persigue con la normativa, tanto legal como interna del instituto político, tiene como objetivo que los partidos cuenten con padrones de militantes de personas que libre y voluntariamente hayan decidido pertenecer a sus filas, lo cual se consigue, manteniendo sus registros regularizados en todo tiempo, para cumplir con los fines y propósitos de su vida intrapartidaria, además que es su deber tomar las medidas de control necesarias para preservar el padrón en depuración y actualización constante.

Conforme a los razonamientos hasta aquí expuestos y de la valoración conjunta a los medios probatorios correspondientes a los hechos que esta autoridad efectuó, conforme a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, se concluye que **es existente la infracción denunciada** en el presente procedimiento en contra del *PVEM*, por la violación al derecho de libre afiliación, en su modalidad positiva —indebida afiliación—, de las **cuatro personas denunciantes**, cuyos casos, fueron analizados en este apartado.

Finalmente, no pasa inadvertido para esta autoridad que el partido, durante sus intervenciones procesales adujo diversas defensas y excepciones a fin de pretender deslindarse de la responsabilidad que le imputa; sin embargo, a consideración de quien hoy resuelve, las mismas resultan ineficaces, en razón de lo siguiente:

Aduce el partido denunciado que, en el caso, no existió un uso indebido de datos personales, sin embargo, como ya se ha señalado, al no existir en autos constancia que demuestre la voluntad plena y manifiesta de los ciudadanos de pertenecer a las filas de un partido político, como en el caso aconteció, es evidente que intrínsecamente, a la conducta de indebida afiliación, existe también un uso indebido de datos personales, toda vez que éstos fueron utilizados de manera inapropiada por el *PVEM*, con el propósito de que el nombre y datos de las personas denunciantes aparecieran registrados en un padrón que los vinculaba con una fuerza política a la cual no deseaban pertenecer. De ahí que la excepción hecha valer, carezca de sustento lógico y jurídico, además de que la presente conclusión, como ya se analizó en el apartado de marco normativo, ha sido reiteradamente confirmada por el máximo órgano jurisdiccional en la materia.

Por cuanto hace a la afirmación que realiza el partido político denunciado, en el sentido de que, en el caso, no existió una indebida afiliación de las personas quejasas, debe decirse que, tal y como ha sido demostrado a lo largo de la presente resolución, la materia misma del procedimiento consistió en determinar si se

actualizó o no la infracción en los términos de la queja planteada, cuya responsabilidad fue demostrada en la presente causa al no justificarse con las constancias o documentales debidas, que el partido obtuvo un consentimiento previo y razonado sobre su deseo de ser enrolados en las filas del *PVEM*.

Por último, en cuanto a la petición que formula en el sentido de que se aplique en su favor el principio de presunción de inocencia, debe decirse que, en el caso a estudio, está plenamente acreditada la existencia de la infracción, consistente en la indebida afiliación de las cuatro personas denunciadas precisadas, mediante el uso de sus datos personales, de modo tal que la solicitud que formula no puede atenderse en los términos planteados, habida cuenta que este principio opera en los procedimientos de naturaleza sancionadora, cuando existe duda razonable respecto de la plena culpabilidad del procesado sobre la comisión de una conducta considerada ilegal.

Así pues, como se dijo, correspondía al partido político, demostrar que las afiliaciones que se le cuestionaron, fueron producto de la libre voluntad de las personas que promovieron el procedimiento que se resuelve, y al no hacerlo de esta forma, es evidente que se transgredió el derecho de libre afiliación y, por tanto, debe imponerse una sanción en los términos que más adelante se precisan.

Similares consideraciones, fueron realizadas por la Sala Superior, al resolver los SUP-RAP-237/2018 y SUP-RAP-369/2018, ya señalados párrafos arriba.

QUINTO. CALIFICACIÓN DE LA FALTA E INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Una vez que ha quedado demostrada plenamente la comisión de la falta denunciada, así como la responsabilidad del *PVEM*, en el caso detallado en el considerando que antecede, procede ahora determinar la sanción correspondiente.

En relación con ello, el *Tribunal Electoral* ha sostenido que para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral.

1. Calificación de la falta

A) Tipo de infracción

Partido	Tipo de infracción	Descripción de la conducta	Disposiciones jurídicas infringidas
<i>PVEM</i>	La infracción se cometió por una acción del partido político denunciado, que transgrede disposiciones de la <i>Constitución</i> , del <i>COFIPE</i> , la <i>LGIPE</i> y la <i>LGPP</i> , en el momento de su comisión.	La conducta fue la afiliación indebida (modalidad positiva) de cuatro personas denunciantes , así como el uso no autorizado de los datos personales de estos.	Artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la <i>Constitución</i> ; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del <i>COFIPE</i> ; 443, párrafo 1, incisos a) y n); de la <i>LGIPE</i> , y 2, párrafo 1, inciso b), y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y), de la <i>LGPP</i> .

B) Bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas)

Por bienes jurídicos se deben entender aquellos que se protegen a través de las normas jurídicas que pueden ser vulnerados con las conductas tipificadas o prohibidas.

En el caso, las disposiciones legales vulneradas tienden a preservar el derecho de las personas de decidir libremente si desean o no afiliarse a un partido político, dejar de formar parte de él o no pertenecer a ninguno, el cual se erige como un derecho fundamental que tienen los individuos para tomar parte en los asuntos políticos del país.

En el caso concreto, se acreditó que el *PVEM* **incluyó indebidamente en su padrón de afiliados a Marbella Altunar Rueda, Alejandro Santoyo Almanza, Marcelino Carmona García y Sergio Meza Salcedo**, sin demostrar que para incorporarles medió la voluntad de éstos de inscribirse a dicho padrón, violentando con ello lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III, y 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; y 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

A partir de esta premisa, es válido afirmar que el bien jurídico tutelado por las normas transgredidas, radica en garantizar el derecho de las y los ciudadanos mexicanos de optar libremente en ser o no militante de algún partido político, lo cual implica la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de que quienes figuran en sus respectivos padrones de militantes, efectivamente consintieron libremente en ser agremiados a los distintos partidos políticos.

Por otra parte, como se analizó, para las indebidas afiliaciones acreditadas, se usaron los datos personales de las partes promoventes, sin que éstas hubiesen otorgado su consentimiento para ello.

Lo anterior, ya que, lógicamente se utilizaron datos personales como lo son, al menos el nombre y la clave de elector para ser afiliada, lo cual ocurrió en contra de su voluntad, de ahí que el uso de estos datos se constituya como un elemento accesorio e indisoluble de la infracción consistente en la afiliación indebida.

En efecto, si bien es cierto, a partir de las constancias que obran en autos no está demostrado que los datos personales hubieran sido utilizados con un propósito diverso a la afiliación indebida en sí misma, o bien su difusión frente a terceros, lo es también que dicha información fue necesaria para materializar la incorporación de los datos de los denunciantes al padrón de militantes del *PVEM*.

De ahí que esta situación debe considerarse al momento de fijar la sanción correspondiente al denunciado.

C) Singularidad o pluralidad de la falta acreditada

En el presente caso se trata de una falta **singular**.

Ello, toda vez que, aun cuando se acreditó que el *PVEM* transgredió lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales y aún las de la normativa interna del instituto partido político, y que, tal infracción se cometió en detrimento de los derechos de más de una persona, esta situación no conlleva estar en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que, en el caso, únicamente se acreditó la infracción al derecho político electoral de libertad de afiliación en su vertiente positiva al instituto político denunciado, quien incluyó y mantuvo en su padrón de militantes a cuatro personas denunciantes, sin demostrar el consentimiento previo para ello.

D) Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción

Ahora bien, para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta debe valorarse conjuntamente con las circunstancias objetivas que concurren en el caso, como son:

- a) **Modo.** En el caso bajo estudio, las irregularidades atribuibles al *PVEM*, consistieron en inobservar lo establecido en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; así como 5, párrafo 1 y 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*; disposiciones que se encuentran replicadas en el diverso 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*, al incluir en su padrón de afiliados a **cuatro personas denunciantes**, sin tener la documentación soporte que acredite fehacientemente la voluntad de éstas de pertenecer a las filas del instituto político en el cual encontraron incluidos, tal y como se advirtió a lo largo de la presente Resolución de forma pormenorizada.
- b) **Tiempo y lugar.** En el caso concreto, la afiliación sin el consentimiento previo de las personas quejas, aconteció en las fechas y lugares que se citan en el cuadro siguiente:

No	Ciudadano	Fecha de afiliación	Entidad
1	Marbella Altunar Rueda	02/09/2019	Chiapas
2	Marcelino Carmona García	10/10/2010	Guerrero
3	Sergio Meza Salcedo	04/11/2016	México
4	Alejandro Santoyo Almanza	25/09/2019	San Luis Potosí

E) Intencionalidad de la falta (comisión dolosa o culposa)

Se considera que en el caso existe una conducta **dolosa** por parte del *PVEM*, en violación a lo previsto en los artículos 6, apartado A, fracción II; 16, párrafo segundo; 35, fracción III y 41, fracción I de la *Constitución*; 5, párrafo 1; 38, párrafo 1, incisos a) y e) del *COFIPE*, replicados en los dispositivos 443, párrafo 1, inciso a), de la *LGIPE*; 2, párrafo 1, inciso b) y 25, párrafo 1, incisos a), e) e y) de la *LGPP*.

La falta se califica como **dolosa**, por lo siguiente:

- El *PVEM* es un Partido Político Nacional y, por tanto, tiene el estatus constitucional de **entidad de interés público**, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son el resultado del ejercicio de la libertad de asociación en materia política, previsto en los artículos 9°, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, fracción I, de la Constitución Federal; 22 y 25 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 16 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- El *PVEM* está **sujeto al cumplimiento de las normas que integran el orden jurídico nacional e internacional** y está obligado a conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, respetando los derechos de las y los ciudadanos, de acuerdo con el artículo 25, párrafo 1, incisos a), de la *LGPP*.
- El de libre afiliación a un partido político es un **derecho fundamental** cuyo ejercicio requiere de la manifestación personal y directa de voluntad de cada ciudadana y ciudadano, en términos del precitado artículo 41 constitucional.
- Los partidos políticos son un espacio para el ejercicio de derechos fundamentales en materia política-electoral, partiendo de los fines que constitucionalmente tienen asignados, especialmente como promotores de la participación del pueblo en la vida democrática y canal para el acceso de las y los ciudadanos al ejercicio del poder público, por lo que a su interior el ejercicio de tales derechos no solo no se limita, sino por el contrario, **se ensancha y amplía**.
- Todo partido político, tiene la **obligación de respetar la libre afiliación** y, consecuentemente, de cuidar y vigilar que sus militantes sean personas que fehacientemente otorgaron su libre voluntad para ese efecto.
- El ejercicio del derecho humano a la libre afiliación a cualquier partido político, conlleva un **deber positivo a cargo de los institutos políticos**, consistente no sólo en verificar que se cumplen los requisitos para la libre afiliación a su padrón, sino en **conservar, resguardar y proteger la documentación o pruebas en donde conste la libre afiliación** de sus militantes, en términos de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, 41, Base I, párrafo segundo, de la *Constitución*; 3, párrafo 2, y 25, párrafo 1, incisos a) y e), de la *LGPP*.
- El derecho de participación democrática de la ciudadanía, a través de la libre afiliación a un partido político, supone que éste sea el receptáculo natural para la verificación de los requisitos y para la guarda y custodia de la documentación o pruebas en las que conste el libre y genuino ejercicio de ese derecho humano, de lo que se sigue que, en principio, ante una controversia sobre afiliación, **corresponde a los partidos políticos involucrados, demostrar que la afiliación atinente fue libre y voluntaria**.

- La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y a su cancelación, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros.
- La afiliación indebida o sin consentimiento a un partido político, es una violación de orden constitucional y legal que **requiere o implica para su configuración, por regla general, la utilización indebida de datos personales de la persona o ciudadano afiliado sin su consentimiento.**

Tomando en cuenta las consideraciones jurídicas precisadas, en el presente caso la conducta se considera dolosa, porque:

- 1) Las personas quejasas aluden, que no solicitaron voluntariamente, en momento alguno, su registro o incorporación como militantes al *PVEM*; sin que dicha afirmación fuera desvirtuada.
- 2) Quedó acreditado que las partes denunciantes aparecieron en el padrón de militantes del *PVEM*, conforme a lo informado por la *DEPPP*, quien además precisó que dicha información deriva del padrón de militantes capturado por ese instituto político.
- 3) El partido político denunciado no aportó pruebas con las que demostrara que las afiliaciones de las **cuatro personas denunciantes** antes identificadas se hubieran realizado a través de los mecanismos legales y partidarios conducentes, ni mucho menos que ello se sustentara en la expresión libre y voluntaria de los denunciantes.
- 4) El partido denunciado no demostró ni probó que las afiliaciones de las **cuatro personas denunciantes** fuera consecuencia de algún error insuperable, o derivado de alguna situación externa que no haya podido controlar o prever, ni ofreció argumentos razonables, ni elementos de prueba que sirvieran de base, aun indiciaria, para estimar que las afiliaciones de los denunciantes fueron

debidas y apegadas a Derecho, no obstante que, en principio, le corresponde la carga de hacerlo.

5) El registro de afiliación de siete de ellas se efectuó anterior al veintitrés de enero de dos mil diecinueve en la que se aprobó el acuerdo INE/CG33/2019; siendo que los otros casos, sucedieron durante y posterior a la vigencia de dicho acuerdo

6) La cancelación del registro de afiliación de todas las personas ocurrió fuera de los plazos establecidos en el acuerdo INE/CG33/2019.

Sobre estos dos últimos puntos, debe tenerse presente que en términos de las previsiones establecidas en el acuerdo INE/CG33/2019, los partidos políticos tenían la obligación de llevar a cabo la revisión de sus padrones, en el entendido de que, de no contar con la documentación soporte, debían reservar dichas afiliaciones a fin de intentar conseguir el refrendo o ratificación por parte del militante.

Bajo esa lógica y de conformidad con las razones que motivaron la instrumentación del citado acuerdo, todas aquellas afiliaciones obtenidas por los partidos políticos con fecha posterior al veintitrés de enero de dos mil diecinueve, es decir, aquellas consideradas nuevas, debían, indefectiblemente, contar con los documentos comprobatorios de la libre voluntad de afiliación, ya que la facultad de reservar el registro, solo estaba previsto para los casos derivados del padrón existente a la fecha de emisión del acuerdo; sin embargo, como ya se mencionó, en el caso que nos ocupa, el partido no reservó la afiliación de las personas quejasas, ni mucho menos acompañó la documentación comprobatoria.

De ahí que esta circunstancia sea relevante para la presente individualización, habida cuenta que esa omisión pone de manifiesto el actuar indebido del denunciado, aún y cuando tenía conocimiento de la obligación contraída, primero de contar con la documentación soporte de la libre voluntad de las partes denunciadas de ser su militantes, de conformidad con la obligación constitucional y legal que se le impone, y luego, derivado del conocimiento que tuvo sobre los alcances de la suscripción del acuerdo INE/CG33/2019, y de la necesidad y compromiso de regularizar su padrón de personas afiliadas, en los términos impuestos en este acuerdo.

F) Condiciones externas (contexto fáctico)

Resulta atinente precisar que la conducta desplegada por el *PVEM*, se cometió al afiliar indebidamente a **cuatro personas**, sin demostrar el acto volitivo de éstas de ingresar en su padrón de militantes, así como de haber proporcionado sus datos personales para ese fin.

Así, se estima que la finalidad de los preceptos transgredidos, consiste en garantizar el derecho de libre afiliación y la protección de los datos personales de los ciudadanos mexicanos mediante la conservación de los documentos atinentes que permitan demostrar el acto de voluntad de los ciudadanos quejosos de militar en ese partido político.

2. Individualización de la sanción.

Una vez asentadas las anteriores consideraciones, **y a efecto de individualizar apropiadamente la sanción**, se procede a tomar en cuenta los siguientes elementos:

A) Reincidencia

Por cuanto a la **reincidencia** en que pudo haber incurrido el *PVEM*, esta autoridad considera que, en el caso concreto, **sí se actualiza**, respecto de la afiliación de **Marbella Altunar Rueda y Alejandro Santoyo Almanza**.

Lo anterior se afirma así, puesto que, de conformidad con el artículo 355, párrafo 6 del *COFIPE*, cuyo contenido reproduce el diverso 458, párrafo 6 de la *LGIPE*, se considerará reincidente a quien, habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el mencionado ordenamiento legal, incurra nuevamente en la misma conducta infractora.

Al respecto, la Sala Superior ha establecido que los elementos mínimos que se deben tomar en cuenta a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción en el procedimiento administrativo sancionador, son los siguientes:

1. Que el infractor haya cometido con anterioridad una infracción (repetición de la falta);

2. Que la infracción sea de la misma naturaleza a la anterior, lo que supone que ambas protegen el mismo bien jurídico; y,
3. Que en ejercicios anteriores el infractor **haya sido sancionado por esa infracción mediante resolución o sentencia firme.**

Lo anterior se desprende del criterio sostenido por el *Tribunal Electoral*, a través de la Tesis de Jurisprudencia **41/2010**, de rubro **REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN.**¹⁴⁴

En este sentido, por cuanto hace a indebidas afiliaciones atribuidas al *PVEM*, esta autoridad tiene presente la existencia de diversas resoluciones emitidas por el *Consejo General*, sobre conductas idénticas a la que nos ocupa, destacándose para los efectos del presente apartado, la identificada con la clave INE/CG448/2018, aprobada por el *Consejo General*, el **once de mayo de dos mil dieciocho**, la cual fue emitida dentro del procedimiento sancionador ordinario identificado con la clave UT/SCG/Q/MGSF/JD31/MEX/76/2017, a efecto de sancionar al *PVEM*, por haber inscrito a su padrón de afiliados a una ciudadana sin su consentimiento. Resolución que fue confirmada por la *Sala Superior*, al resolver el SUP-RAP-137/2018, el seis de junio de dos mil dieciocho.

Con base en ello, y tomando en consideración que las afiliaciones de Marbella Altunar Rueda y Alejandro Santoyo Almanza, fueron realizadas el **dos y veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve**, es decir, con fecha posterior al dictado de la referida resolución, se estima que en el caso **sí** existe reincidencia.

Por otra parte, respecto de las afiliaciones indebidas que han sido demostradas en el presente procedimiento, por cuanto hace a las personas denunciantes Sergio Meza Salcedo y Marcelino Carmona García, se estima que, **no existe reincidencia**, ya que se trata de afiliaciones realizadas entre **octubre de dos mil dieciséis y octubre de dos mil diez**, esto es, con anterioridad a la fecha en que se emitió la resolución que se ha tenido como base para determinar, en el caso concreto, la existencia o no, de reincidencia, esto es, el **once de mayo de dos mil dieciocho**; de ahí que no exista reincidencia en tales casos.

¹⁴⁴ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=41/2010&tpoBusqueda=S&sWord=41/2010>

B) Calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la infracción debe calificarse dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso concreto, contando con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción, esta autoridad electoral debe determinar, en principio, si la falta fue levísima, leve o grave, y en caso del último supuesto, precisar si se trata de una gravedad ordinaria, especial o mayor.

Luego entonces, debe mencionarse que el criterio que esta autoridad ha considerado para la imposición de la calificación de la infracción, en el presente asunto, tomará en consideración los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción que produjo la infracción electoral, tales como el tipo de infracción; el bien jurídico tutelado; singularidad y pluralidad de la falta; las circunstancias de tiempo, modo y lugar; el dolo o culpa; la reiteración de infracciones; las condiciones externas y los medios de ejecución.

En este sentido, para la graduación de la falta, se deben tomar en cuenta las siguientes circunstancias:

- Quedó acreditada la infracción al derecho de libre afiliación de **cuatro personas denunciantes** al partido político, pues se comprobó que el *PVEM* las afilió sin demostrar con la documentación soporte correspondiente, que medió la voluntad de éstas de pertenecer a la lista de militantes de dicho instituto político.
- El bien jurídico tutelado por las normas transgredidas es garantizar el derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos mexicanos, incluso en su modalidad de desafiliación, de optar por ser o no militante de algún partido político, y la obligación de éstos de velar por el debido respeto de la prerrogativa señalada, a través de los mecanismos idóneos que permitan generar certeza respecto de la voluntad de quienes deseen pertenecer agremiados a los distintos partidos políticos.
- Para materializar la indebida afiliación de las **cuatro personas denunciantes**, se utilizaron indebidamente sus datos personales, pues los mismos eran necesarios para formar el padrón de afiliados del *PVEM*.

- No existió un beneficio por parte del partido denunciado, o lucro ilegalmente logrado, ni tampoco existió un monto económico involucrado en la irregularidad.
- No existió una vulneración reiterada de la normativa electoral.
- No implicó una pluralidad de infracciones o faltas administrativas, toda vez que se configuró una sola conducta infractora.
- No se afectó en forma sustancial la preparación o desarrollo de algún Proceso Electoral.
- Sí existe reincidencia por parte del *PVEM*, respecto de dos personas quejas.

Por lo anterior, y en atención a los elementos objetivos precisados con antelación, se considera procedente **calificar la falta** en que incurrió el *PVEM* como de **gravedad ordinaria**, toda vez que como se explicó en el apartado de intencionalidad, el partido denunciado dolosamente infringió el derecho de libre afiliación en su modalidad positiva —indebida afiliación— de **cuatro personas**, lo que constituye una violación a su derecho fundamental de libre afiliación reconocido en la *Constitución*.

C) Sanción a imponer

La mecánica para la individualización de la sanción, una vez que se tenga por acreditada la falta y la imputabilidad correspondientes, consiste en imponer al infractor, por lo menos, el mínimo de la sanción y, hecho lo anterior, ponderando las circunstancias particulares del caso, determinar si es conducente transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares, que pudieran afectar el valor protegido por la norma transgredida.

Así, el artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, cuyo contenido es congruente con el diverso 456, párrafo 1, inciso a) de la *LGIFE*, prevé el catálogo de sanciones a imponer a los partidos políticos, mismas que pueden consistir en amonestación pública; multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México (ahora calculado en UMAS); reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda; interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral y, en casos de

graves y reiteradas conductas violatorias a la *Constitución* y la *LGIPE*, la cancelación de su registro como partido político.

Ahora bien, es preciso no perder de vista que el artículo 458, párrafo 5, de la *LGIPE* establece que, para la individualización de las sanciones, esta autoridad electoral nacional deberá tomar en cuenta, **entre otras** cuestiones, la gravedad de la conducta; la necesidad de suprimir prácticas que afecten el bien jurídico tutelado por la norma transgredida, las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; las condiciones externas y los medios de ejecución de la falta; la reincidencia en que, en su caso, haya incurrido el infractor; y, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio involucrado en la conducta, en caso que esta sea de contenido patrimonial.

Así, la interpretación gramatical, sistemática y funcional de este precepto, a la luz también de lo establecido en los artículos 22 de la *Constitución*, el cual previene que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado; y con el criterio sostenido por la Sala Superior a través de la Tesis **XLV/2002**, de rubro **DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**, conduce a estimar que si bien este *Consejo General* no puede soslayar el análisis de los elementos precisados en el párrafo que antecede, **éstos no son los únicos parámetros que pueden formar su convicción en torno al *quántum* de la sanción que corresponda a una infracción e infractor en particular.**

En efecto, reconociendo el derecho fundamental de acceso a una justicia completa a que se refiere el artículo 17 de la Ley Suprema, este *Consejo General*, como órgano encargado de imponer sanciones (equivalentes a la *pena* a que se refiere el artículo 22 constitucional, entendida como expresión del *ius puniendi* que asiste al estado) **está compelido a ponderar, casuísticamente, todas las circunstancias relevantes que converjan en un caso determinado**, partiendo del mínimo establecido en el artículo 458 de la *LGIPE*, que como antes quedó dicho, constituye la base insoslayable para individualizar una sanción.

Esto es, el *INE*, en estricto acatamiento del principio de legalidad, **está obligado** al análisis de cada uno de los elementos expresamente ordenados en la *LGIPE*, en todos los casos que sean sometidos a su conocimiento; sin embargo, la disposición señalada no puede ser interpretada de modo restrictivo, para concluir que dicho catálogo constituye un límite al discernimiento de la autoridad al momento de decidir la sanción que se debe imponer en un caso particular, pues ello conduciría a

soslayar el vocablo “entre otras”, inserta en artículo 458, párrafo 5, de la *LGIFE*, y la tesis antes señalada y consecuentemente, a no administrar una justicia **completa**, contrariamente a lo previsto por la Norma Fundamental.

Lo anterior es relevante porque si bien es cierto la finalidad inmediata de la sanción es la de reprochar su conducta ilegal a un sujeto de derecho, para que tanto éste como los demás que pudieran cometer dicha irregularidad se abstengan de hacerlo, lo es también que la finalidad última de su imposición estriba en la prevalencia de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, para que, en un escenario ideal, el estado no necesite ejercer de nueva cuenta el derecho a sancionar que le asiste, pues el bien jurídico tutelado por cada precepto que lo integra, permanecería intocado.

En ese tenor, este *Consejo General* ha estimado en diversas ocasiones que por la infracción al derecho de libertad de afiliación, conducta que se ha acreditado en el caso, justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II, del artículo 354, párrafo 1, inciso a) del *COFIPE*, el cual se encuentra replicado en el diverso 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIFE*, consistente en una **MULTA unitaria por cuanto hace a cada ciudadana y ciudadano sobre quienes se cometió la falta acreditada**.

Otro elemento a considerar para la imposición de la sanción es el relativo a que, como se refirió en el Considerando denominado “Efectos del acuerdo del Consejo General INE/CG33/2019” tanto esta máxima autoridad electoral administrativa como los propios partidos políticos, entre ellos el *PVEM*, advirtieron que a la violación del derecho de libertad de afiliación que dio lugar a los diversos precedentes, subyace un problema de mayor extensión, reconociendo la necesidad de iniciar un procedimiento de regularización de sus padrones de afiliación, ya que éstos se conformaban sin el respaldo de la información comprobatoria de la voluntad ciudadana.

Ante tales circunstancias, y de conformidad con las previsiones establecidas en el citado Acuerdo, se implementó un procedimiento extraordinario de revisión, actualización y sistematización de los padrones de militantes de los Partidos Políticos Nacionales, para garantizar, en un breve período, que solamente aparezcan en éstos las y los ciudadanos que en realidad hayan solicitado su afiliación, y respecto de quienes, además, los institutos políticos **cuenten con el soporte documental atinente a la militancia**.

Lo anterior, obedece justamente a la vigencia del orden jurídico, incluso más allá de la imposición de sanciones que reprochen a los partidos políticos la violación al derecho fundamental de la ciudadanía a decidir si desean o no militar en una fuerza política, además de fortalecer al sistema de partidos, el cual se erige indispensable y necesario para el sano desarrollo del régimen democrático de nuestro país, permitiendo que los institutos políticos cuenten con un padrón de militantes depurado, confiable y debidamente soportado, en cumplimiento al principio de certeza electoral.

Por estas razones, en dicha determinación, se establecieron plazos específicos para que los partidos políticos cumplieran su obligación de tener padrones de militantes debidamente integrados.

Siendo que en la etapa de Consolidación de Padrones se establecieron las siguientes obligaciones:

*Los PPN realizarán los ajustes finales a los padrones, con la finalidad de que solamente contengan los nombres de las personas respecto de las cuales se cuente con el documento que avale la afiliación o ratificación de la misma, así como la identidad de los mismos, con los publicados en la página de Internet del INE. Esta etapa deberá concluirse a más tardar el **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.*

Destacándose que en términos del acuerdo **INE/CG33/2019**, esta etapa ratificación concluiría a más tardar al **treinta y uno de enero de dos mil veinte**.

Además, es de suma importancia destacar que el citado Acuerdo, implicó para todos los partidos políticos nacionales, aparte de la baja de las personas quejas de sus padrones de afiliados, una serie de cargas y obligaciones de carácter general, tendentes a depurar sus listados de militantes y, a la par, inhibir los registros de afiliaciones que no encuentren respaldo documental sobre la plena voluntad y consentimiento de cada ciudadano.

En sintonía con lo expuesto, en ese acuerdo se estableció que la realización de las obligaciones a cargo de los partidos políticos, podría tomarse en cuenta como atenuante al momento de individualizar la sanción correspondiente, de resultar acreditada la infracción en los respectivos procedimientos sancionadores y de acuerdo con la valoración y circunstancias particulares de cada expediente.

No obstante, es importante tomar en cuenta que, para **todos los casos** existen circunstancias particulares de las que se puede concluir, no se ubican en la hipótesis anterior.

Ello, evidentemente denota una conducta dolosa por parte del denunciado, de infringir el acuerdo adoptado al que se refieren los párrafos precedentes, en contravención a la razón que subyacía a su aprobación, que es precisamente contar con padrones de militantes que dotaran de certeza a la autoridad electoral y a la ciudadanía en general sobre la integración de sus registros de agremiados, en beneficio del derecho de libre afiliación que deben observar todos los institutos políticos.

Por ello, esta autoridad considera que previo a determinar la sanción que corresponde al *PVEM* por la comisión de la infracción que ha sido materia de estudio en la presente Resolución, es por demás trascendente valorar también las circunstancias particulares del caso, con el objeto de acatar cabalmente el mandato constitucional de administrar justicia de manera completa, inserto en el artículo 17 de la *Constitución*.

En efecto, como antes quedó dicho, al aplicar una norma jurídica abstracta a un caso concreto, el juzgador está obligado a considerar todas las circunstancias que concurren en el particular, inclusive la conducta observada por el responsable con posterioridad a la comisión del ilícito, respecto a lo cual, resulta orientadora la jurisprudencia que se cita enseguida:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CORRESPONDE AL ARBITRIO JUDICIAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE INSTANCIA Y, POR ENDE, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE SUSTITUIRSE EN LA AUTORIDAD RESPONSABLE.¹⁴⁵ *Acorde con el tercer párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad judicial es la encargada de imponer las penas, al ser la que valora las pruebas para acreditar el delito y la responsabilidad penal del acusado, quien mediante el ejercicio de la inmediación debe analizar los elementos descritos en los artículos 70 y 72 del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que se refieren a las condiciones de realización del delito, las calidades de los sujetos activo y pasivo, la forma de intervención del sentenciado, la situación socioeconómica y cultural de éste, su comportamiento posterior al evento delictivo, así como las circunstancias en que se encontraba en su realización; todas esas condiciones deben percibirse por el juzgador de instancia, al ser quien tiene contacto directo con el desarrollo del proceso penal y no por el tribunal constitucional, el cual tiene como función salvaguardar derechos humanos y no verificar cuestiones de legalidad, en virtud de que su marco normativo para el ejercicio de sus facultades lo constituyen la Carta Magna, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el Tribunal Colegiado de Circuito no debe sustituirse en la autoridad responsable, toda vez que no podría aplicar directamente los preceptos de la codificación penal indicada al no ser una tercera instancia, máxime que el tema del grado de culpabilidad del sentenciado y el quantum de las penas no implica que la responsable se hubiese apartado de la*

razón y la sana lógica, no es una infracción a la interpretación de la ley, no es una omisión de valoración de la prueba y no consiste en la apreciación errónea de los hechos.

Del modo anterior, este *Consejo General* considera que **la actitud adoptada por el PVEM, no puede excluirlo de la responsabilidad en que incurrió**, y por el contrario, su actitud en cuanto a este procedimiento debe ser agravado, permitiendo modificar el criterio de sanción que se había venido sosteniendo, hacia un nivel superior de las sanciones previstas por la *LGIPE*, toda vez que dicha actitud redundante en la vigencia del orden jurídico, en la protección al derecho de libre afiliación de las y los ciudadanos tutelada, incluso, por parte de las propias entidades de interés público, como lo es el sujeto denunciado y la prevalencia del Estado de Derecho.

Lo anterior se considera así, ya que, como se indicó, la baja de las personas denunciadas del padrón de militantes del partido denunciado aconteció en las fechas que enseguida se precisan:

No	Ciudadano	Fecha de baja
1	Marbella Altunar Rueda	25/11/2020
2	Sergio Meza Salcedo	27/10/2020
3	Marcelino Carmona García	25/11/2020
4	Alejandro Santoyo Almanza	25/11/2020

Como se evidencia, las fechas en que el registro de tales personas fueron dados de baja, corresponde al mes de **octubre y noviembre de dos mil veinte**, esto es, a una temporalidad en la que ya no le resultan aplicables los beneficios del acuerdo **INE/CG33/2019** al establecer el mismo, esencialmente, un procedimiento de depuración de padrones de militantes, siendo que, en ese momento ya había concluido la etapa de Consolidación de padrones,¹⁴⁶ en donde se debió dar de baja del padrón de militantes a todas aquellas personas de las que no se tuviera la cédula de afiliación y no se contara con la voluntad de los interesados de permanecer en los partidos políticos.

Esto es, no obstante que, en esa temporalidad el *PVEM* tenía pleno conocimiento de las razones y motivos que dieron sustento al acuerdo **INE/CG33/2019**, cuyo propósito central era que los partidos políticos realizaran una depuración de sus padrones de militantes, con el objeto de contar, **únicamente, con registros de afiliación sustentados con cédulas de afiliación**, en el modo tradicional o, en su caso, con el correspondiente registro electrónico, tratándose de la aplicación móvil,

¹⁴⁶ Etapa que concluyó el treinta y uno de enero de dos mil veinte.

lo cierto es que dicho instituto político realizó la baja hasta ser requerido por la UTCE, sin que se aprecie que se hubiere realizado una genuina revisión de los registros de militantes por dicho partido político.

Lo que denota, como se precisó previamente, un actuar indebido por parte del PVEM que evidentemente contraviene los fines y objetivos que debe observar una entidad de interés público, como lo son los partidos políticos, quienes, en términos de los artículos 41, de la *Constitución* y 25, párrafo 1, inciso a), de la *LGPP*, deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales, respetando, entre otros, los derechos de los ciudadanos.

Por lo anterior, no obstante, lo establecido en el Acuerdo INE/CG33/2019 y los cumplimientos dados a dicho Acuerdo por parte del PVEM, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto, este *Consejo General* considera necesario transitar a una sanción de mayor entidad, con el objeto de disuadir tanto al responsable como a los demás sujetos de derecho, de realizar conductas similares.

En ese orden de ideas, este órgano resolutor se encuentra investido con una potestad sancionadora que le permite valorar a su arbitrio las circunstancias que se actualizaron en la comisión de la infracción, así como su gravedad, máxime si se toma en cuenta que la *LGIPE*, no determina pormenorizada y casuísticamente, todas y cada una de las condiciones del ejercicio de dicha potestad; por el contrario, solo establece las bases genéricas para el ejercicio de la misma, dejando que sea la autoridad quien determine el tipo de sanción que debe aplicarse y, en su caso, el monto de la misma.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero, del artículo 21 Constitucional, que prevé que la imposición de las penas, su modificación y su duración, son propias y exclusivas de la autoridad judicial, a juicio de este órgano electoral derivado de las circunstancias que concurrieron a la infracción atribuida al **PVEM se justifica** la imposición de la sanción prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso a), fracción II, de la *LGIPE*, consistente en una **MULTA**, toda vez que se considera que tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que una amonestación pública sería insuficiente e inadecuada para prevenir la comisión futura de esta infracción; mientras que las consistentes en reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y la cancelación del registro como partido político resultarían de carácter excesivo,

y la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral sería inaplicable en el presente asunto.

Ahora bien, es de explorado derecho que las autoridades al momento de imponer una sanción pecuniaria deben respetar los límites que la propia ley establece, al fijar un monto mínimo y uno máximo, dejando al arbitrio de la autoridad determinar cuál es el aplicable, y por otra parte, deberá expresar las circunstancias de hecho que justifiquen el monto determinado; valoración en la que la autoridad deberá atender tanto a la afectación que la conducta ilícita ha generado al bien jurídico tutelado en el respectivo ordenamiento, como a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que pueda inferirse la graduación de la sanción a imponer.

Bajo esta óptica, debe tomarse en consideración que la acreditación de la afiliación indebida de las personas denunciantes, estuvo rodeada de circunstancias particulares, como lo fue:

- El hecho de que el partido denunciado las siguiera conservando dentro de su padrón de militantes no obstante de haber transcurrido el periodo establecido para su depuración de registros de aquellas personas de las que no se tuviera cédula de afiliación, esto es con posterioridad al treinta y uno de enero de dos mil veinte;
- Las afiliaciones fueron realizadas en dos mil dieciséis, dos mil dieciocho y dos mil diecinueve;
- La falta fue calificada como grave ordinaria;
- Se concluyó la existencia del dolo, y
- Que **el partido ya sabía de su obligación de depurar sus padrones existentes y contar con la manifestación previa y documentada de su libre intención de ser militantes, así como que la conducta es reincidente, respecto de un caso.**

Por ello, esta autoridad considera adecuado, en el caso concreto, imponer una **multa** equivalente a **963 (novecientos sesenta y tres) días** de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, al momento de la comisión de la conducta, **por lo que respecta a Sergio Meza Salcedo y Marcelino Carmona García.**

Cabe precisar que, respecto de esta última, iguales sanciones han sido impuestas por este *Consejo General*, al emitir diversas resoluciones que han resuelto procedimientos ordinarios sancionadores por indebidas afiliaciones y, que además

han sido confirmadas por la *Sala Superior*, entre ellas, la identificada con la clave INE/CG483/2021, confirmada a través del **SUP-RAP-143/2021**.

Asimismo, se estima pertinente imponer una multa de **1,284 (mil doscientos ochenta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización** vigentes al momento de la comisión de la conducta, respecto de **Marbella Altunar Rueda y Alejandro Santoyo Almanza**.

Sanción que también ha sido impuesta por este *Consejo General*, en los casos de reincidencia, como lo fue la identificada con las claves **INE/CG168/2021** e **INE/CG1674/2021**, ya citadas con antelación.

En ese tenor, tomando en cuenta las particularidades que acontecen en esta causa y las condiciones socioeconómicas del instituto político denunciado, y no simplemente, los hechos denunciados y acreditados en el presente procedimiento, a fin de que la sanción que se imponga resulte efectivamente proporcional sin ser excesiva.

En efecto, para que una multa no resulte excesiva o desproporcionada, la autoridad debe determinar su monto o cuantía, **tomando en cuenta** las circunstancias objetivas y subjetivas que rodean la infracción, entre otras, la capacidad económica del infractor, la reincidencia, y el resto de los elementos por los cuales esta autoridad arribó a la calificación de gravedad del hecho infractor, para así determinar de forma individual la multa que corresponda.

De esta manera, la aplicación del principio de proporcionalidad se traduce en una actuación reglada, consistente en tomar en consideración, de manera razonada y con la motivación precisa, los elementos, criterios y pautas que para tal fin se deduzcan del ordenamiento en su conjunto o del sector de éste afectado, y en particular, los que se hubiesen podido establecer de la norma jurídica aplicable.

A efecto de lo anterior, esta autoridad goza de cierta discrecionalidad para individualizar la sanción derivada de una infracción, tomando en consideración la graduación de la sanción, es eminentemente casuístico y depende de las circunstancias concurrentes del caso concreto, partiendo siempre del monto mínimo, que corresponde a la simple demostración de la conducta ilegal, cuestión

que tiene sustento en la Tesis relevante **XXVIII/2003**,¹⁴⁷ emitida por el *Tribunal Electoral*, misma que a letra establece:

SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES.-

En la mecánica para la individualización de las sanciones, se debe partir de que la demostración de una infracción que se encuadre, en principio, en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de los que permiten una graduación, conduce automáticamente a que el infractor se haga acreedor, por lo menos, a la imposición del mínimo de la sanción, sin que exista fundamento o razón para saltar de inmediato y sin más al punto medio entre los extremos mínimo y máximo. Una vez ubicado en el extremo mínimo, se deben apreciar las circunstancias particulares del transgresor, así como las relativas al modo, tiempo y lugar de la ejecución de los hechos, lo que puede constituir una fuerza de gravitación o polo de atracción que mueva la cuantificación de un punto inicial, hacia uno de mayor entidad, y sólo con la concurrencia de varios elementos adversos al sujeto se puede llegar al extremo de imponer el máximo monto de la sanción.

En este tenor, para el cálculo de la multa correspondiente, se debe tomar en cuenta el salario mínimo vigente al momento de realizar la afiliación y, obtenido el monto correspondiente, deberá hacerse la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

Al respecto, es un hecho notorio que se invoca en términos de lo establecido en el artículo 461 de la *LGPE*, que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fija anualmente los montos respectivos, mismos que al ser relacionados con las fechas de afiliación, para obtener la sanción que corresponde a cada partido político infractor, por cuanto a cada uno de los ciudadanos indebidamente afiliados, arrojan lo siguiente:

PRI		
Personas denunciantes	Salario mínimo / UMA	Sanción a imponer
Afiliación de 2010		
1	\$57.46	\$ 55,333.98
Afiliación de 2016		
1	\$73.04	\$70,337. 52
Afiliación en 2019		
2	\$84.49	\$216,970.32
TOTAL		\$ 342,641.82

¹⁴⁷ Consultable en la página de internet del *Tribunal Electoral*, o bien en la dirección electrónica: <http://sief.te.gob.mx/IUSE/tesisjur.aspx?idtesis=XXVIII/2003&tpoBusqueda=S&sWord=XXVIII/2003>

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

Ahora bien, es importante no perder de vista que mediante reforma al artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la *Constitución* —efectuado por decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación—, se determinó que el salario mínimo no podrá ser utilizado para fines ajenos a su naturaleza, esto es, como índice, unidad, base, medida o referencia para fijar el monto de obligaciones o sanciones.

En esas condiciones, para el caso la afiliación realizada antes de dos mil dieciséis, lo procedente es transformar la sanción que se considera idónea, expresada en salarios mínimos, a Unidades de Medida y Actualización, para lo cual es necesario dividir el monto inicial (963 días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México multiplicado por su valor en cada año señalado en el cuadro), entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, entre el valor actual de la Unidad de Medida y Actualización, misma que equivale, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, a \$96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N.); resultando las siguientes cantidades:

Persona denunciante	Año de afiliación	Multa impuesta en SMGV A	Valor SMGV B	Valor UMA vigente C	Sanción en UMAS (A*B)/C D	SANCIÓN A IMPONER (C*D)
Marcelino Carmona García	2010	963	\$57.46	\$96.22	575.07	\$55,333.23

Para la persona a quien se impone la sanción con base en la Unidad de Medida de Actualización vigente en 2016, corresponde la siguiente cantidad:

No.	Persona denunciante	Año de renuncia	Multa impuesta en UMA	Valor UMA	SANCIÓN A IMPONER
1	Sergio Meza Salcedo	2016	963	\$73.04	\$70,337.52

Finalmente, para la persona que se indica a continuación, a quien se impone la sanción con base en la **Unidad de Medida de Actualización vigente en 2019** y, además, se acreditó la reincidencia, corresponde la siguiente cantidad:

Persona denunciante	Año de afiliación	Multa impuesta en UMA	UMAS por Reincidencia	Total multa en UMAS	Valor UMA	SANCIÓN A IMPONER
Marbella Altunar Rueda	2019	963	321	1284	\$84.49	108,485.16
Alejandro Santoyo Almanza	2019	963	321	1284	\$84.49	108,485.16
Total						\$216,970.32

Dicha sanción se considera adecuada para castigar la conducta que nos ocupa, pues sin ser gravosa, sí puede inhibir al *PVEM*, para que en el futuro vigile el cumplimiento de las normas de la materia.

D) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico derivado de la infracción

Se estima que la infracción cometida por parte del *PVEM*, aun cuando causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, no se cuenta con elementos objetivos para cuantificar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio económico ocasionado con motivo de la infracción.

E) Las condiciones socioeconómicas del infractor

Del oficio **INE/DEPPP/DE/DPPF/03246/2022**, emitido por la *DEPPP*, se advierte que al *PVEM* le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias para el mes de **noviembre** de dos mil veintidós, la cantidad de **\$ 19,751,300.62 (diecinueve millones setecientos cincuenta y un mil trescientos pesos 62/100 M.N.)**, una vez descontado el importe de las sanciones que se le impusieron.

Por lo anterior, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el infractor está en posibilidad de pagarla sin que se afecte su operación ordinaria, además de que la sanción es proporcional a las faltas cometidas y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

F) Impacto en las actividades del sujeto infractor

En este sentido, a consideración de esta autoridad, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado, dado que representa, para cada persona denunciante, el porcentaje:

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

Año	Monto de la sanción por persona	Ciudadanos que fueron indebidamente afiliados	% de la ministración mensual por persona¹⁴⁸
2010	\$55,333.23	1	0.28%
2016	\$70,337.52	1	0.35%
2019	\$108,485.16	2	0.54%

Por consiguiente, la sanción impuesta al *PVEM* no es de carácter gravoso, si se toma en cuenta el porcentaje que representa con relación a la ministración mensual correspondiente al mes que transcurre.

De esta forma, debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción cometida por el *PVEM* (especialmente los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta); su grado de responsabilidad en el actuar ilegal, y su capacidad socioeconómica.

Dada la cantidad que se impone como multa al partido antes citado, comparada con el financiamiento que recibe del *INE* para el presente mes, para cumplir con sus obligaciones ordinarias, resulta evidente que en modo alguno se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político sancionado.

En efecto, la sanción económica que por esta vía se impone resulta adecuada, pues el mencionado partido político—tal como quedó explicado con anterioridad— está en posibilidad de pagarla sin que ello afecte su operación ordinaria, además que la sanción es proporcional a la falta cometida y se estima que, sin resultar excesiva ni ruinosa, puede generar un efecto inhibitorio, lo cual —según lo ha establecido la *Sala Superior* en la sentencia del SUP-RAP-114/2009—¹⁴⁹ es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

De conformidad con el artículo 458, párrafo 7, de la *LG/PE*, las cantidades objeto de las multas serán deducidas por este Instituto de las ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el *PVEM*, una vez que esta resolución haya quedado firme.

¹⁴⁸ Cantidades expresadas hasta el segundo decimal.

¹⁴⁹ Consultable en la liga de internet: http://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/SUP-RAP-0114-2009.pdf.

SEXTO. MEDIO DE IMPUGNACIÓN

A fin de garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, tutelado en el artículo 17 de la Constitución Federal,¹⁵⁰ se precisa que la presente determinación es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el numeral 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO. No se acredita la infracción consistente en la indebida afiliación y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de **las siguientes personas**, en términos de lo establecido en el Considerando **CUARTO, numeral 5, Apartado A**, de esta Resolución.

No	Persona denunciante
1	Olivia Chino Dorantes
2	Mario Mauricio Ramírez Arellano
3	Claudia Lorena Pérez Mirón
4	Rocío Espinosa Aquino
5	David Cruz Antonio Domínguez Aguilar
6	Martha Flores Ramírez
7	Samuel Alejandro Hernández Hernández
8	Luz Andrea Alva Rodríguez
9	Ma. de la Luz Rodríguez Osteguín
10	María Ana Ela Basurto Sánchez
11	Manuel Guzmán Gómez
12	Lucía Guzmán Gómez
13	Alonso Guzmán López

¹⁵⁰ Al respecto, resultan orientadoras las siguientes tesis aisladas emitidas por tribunales del Poder Judicial de la Federación: Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Materia: Constitucional, Tesis: III. 40. (III Región) 6 K (10ª), Página: 1481, Rubro: “**TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA LOGRAR LA EFICACIA DE ESE DERECHO HUMANO LOS JUZGADORES DEBEN DESARROLLAR LA POSIBILIDAD DEL RECURSO JUDICIAL**”, y Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Materia: Constitucional, Tesis: II.8º. (I Región) 1 K (10ª), Página: 2864, Rubro: “**TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO FUNDAMENTAL.**”

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

No	Persona denunciante
14	Oscar Alejandro Torres Vázquez
15	Herman Aguilar Andapia
16	María de la Luz Suárez Ávila

SEGUNDO. Se acredita la infracción consistente en la violación al derecho de libre afiliación en su vertiente **positiva** —indebida afiliación— y uso de datos personales para tal efecto, en perjuicio de **Alejandro Santoyo Almanza, Marbella Altunar Rueda, Marcelino Carmona García y Sergio Meza Salcedo** en términos de lo establecido en el Considerando **CUARTO, numeral 5, apartado B**, de esta Resolución.

TERCERO. En términos del Considerando **QUINTO** de la presente resolución, se impone al Partido Revolucionario Institucional, **una multa por la indebida afiliación de cada una de las personas denunciantes respecto de quienes resulta aplicable dicha sanción**, conforme a los montos que se indican a continuación:

1	Marcelino Carmona García	575.07 (quinientos setenta y cinco punto cero siete) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$55,333.23 (cincuenta y cinco mil trescientos treinta y tres mil pesos 23/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2010]
2	Sergio Meza Salcedo	963 (novecientas sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$70,337.52 (setenta mil trescientos treinta y siete pesos 52/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2016]
3	Marbella Altunar Rueda	1,284 (un mil doscientas ochenta y cuatro)) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.) [Ciudadana afiliada en 2019 y de quien, además, se acreditó reincidencia]
4	Alejandro Santoyo Almanza	1,284 (un mil doscientas ochenta y cuatro)) Unidades de Medida y Actualización, calculado al segundo decimal, equivalente a \$108,485.16 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.) [Ciudadano afiliado en 2019 y de quien, además, se acreditó reincidencia]

CUARTO. En términos de lo establecido en el artículo 457, párrafo 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de la multa impuesta al **Partido Verde Ecologista de México**, será deducido de las siguientes ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba dicho instituto político, una vez que esta resolución haya quedado firme, conforme a lo dispuesto en su considerando QUINTO.

QUINTO. La presente Resolución es impugnabile a través del recurso de apelación previsto en el artículo 42 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía previsto en el artículo 79 del mismo ordenamiento.

NOTIFÍQUESE: **personalmente** a las y los **denunciantes**; al Partido Verde Ecologista de México, **por conducto de su representante ante el Consejo General de este Instituto**, en términos del artículo 68 numeral 1, incisos d), q) y w), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y, por **estrados**, a quienes resulte de interés.

En su oportunidad, **archívese** el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

CONSEJO GENERAL
UT/SCG/Q/OCD/JD04/GRO/188/2020

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de reiteración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, no estando presente durante la votación la Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera.

Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de objeción de pruebas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de las y los Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**